**EN EL CASO DE UN ARBITRAJE CONFORME AL TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR Y LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA
DE INVERSIONES Y EL REGLAMENTO DE ARBITRAJE DE LA CNUDMI**

Laudo Final

DEMANDANTES:	Chevron Corporation (EE.UU.) y Texaco Petroleum Company (EE.UU.)
ABOGADOS DE LOS DEMANDANTES:	R. Doak Bishop Edward G. Kehoe Wade M. Coriell Isabel Fernández de la Cuesta David H. Weiss Ms. Elizabeth Silbert KING & SPALDING LLP Alejandro Ponce-Martínez QUEVEDO & PONCE
DEMANDADA:	La República del Ecuador
ABOGADOS DE LA DEMANDADA:	Diego García Carrión PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Eric W. Bloom Ricardo Ugarte C. MacNeil Mitchell Tomás Leonard Bruno D. Leurent WINSTON & STRAWN LLP Mark Clodfelter FOLEY HOAG LLP
TRIBUNAL ARBITRAL:	El profesor Karl-Heinz Böckstiegel, Presidente El honorable Charles N. Brower El profesor Albert Jan van den Berg
SECRETARIO DEL TRIBUNAL:	Brooks Daly (CPA) Asistido por Martín Doe (CPA)
FECHA DE ESTE LAUDO FINAL:	31 de agosto de 2011

ÍNDICE DE MATERIAS

A.	Las Partes	11
B.	El Tribunal	14
C.	Breve Introducción al Caso.....	15
C.I.	La Fase Jurisdiccional.....	15
1.	Las Cuestiones Jurisdiccionales.....	15
2.	Argumentos de la Demandada	16
3.	Argumentos de los Demandantes.....	19
4.	El Laudo Interino del Tribunal sobre Jurisdicción	20
C.II.	La Fase sobre el Fondo	22
1.	Las Cuestiones sobre el Fondo	22
2.	Argumentos de los Demandantes.....	23
3.	Argumentos de la Demandada	32
4.	El Laudo Parcial del Tribunal sobre el Fondo	44
C.III.	La Fase de la Cuantía	46
D.	Antecedentes Procesales	47
E.	Petitorio de las Partes.....	87
E.I.	Petitorio de los Demandantes.....	87
E.II.	Petitorio de la Demandada	87
F.	Antecedentes de Hecho	88
G.	Consideraciones del Tribunal	102
G.I.	El Informe Pericial Conjunto y la Opinión Individual.....	102
1.	El Impuesto Aplicable a los Daños Directos	102
2.	El Impuesto Aplicable a los Intereses	103
3.	La Opinión Individual del Dr. Cordero Ordóñez.....	104
G.II.	El Laudo Parcial y el Mandato de los Peritos Tributarios	105
1.	Argumentos de los Demandantes.....	105
2.	Argumentos de la Demandada	107
3.	El Tribunal	112

G.III.El Monto de los Daños Directos de TexPet	120
1. Argumentos de los Demandantes.....	120
2. Argumentos de la Demandada	124
3. El Tribunal	128
G.IV. La Tarifa Impositiva Aplicable al Monto de los Daños Directos	132
1. Argumentos de los Demandantes.....	132
2. Argumentos de la Demandada	133
3. El Tribunal	136
G.V. La Tarifa Impositiva Aplicable al Monto de los Intereses.....	138
1. Argumentos de los Demandantes.....	138
2. Argumentos de la Demandada	139
3. El Tribunal	140
G.VI. El Monto Final de Daños	142
1. Argumentos de los Demandantes.....	142
2. Argumentos de la Demandada	143
3. El Tribunal	145
G.VII. Las Costas del Arbitraje.....	147
1. Petitorio de los Demandantes.....	147
2. Petitorio de la Demandada	149
3. El Tribunal	150
H. Decisiones	154

ABREVIACIONES

¶ / ¶¶	Párrafo / párrafos
Acuerdo de 1973	Acuerdo entre el Gobierno del Ecuador, Ecuadorian Gulf Oil Company, y TexPet del 6 de agosto de 1973
Acuerdo de 1977	Acuerdo complementario entre TexPet y el Gobierno de Ecuador del 16 de diciembre de 1977
Acuerdos de Concesión	Acuerdo de 1973 y Acuerdo de 1977
Acuerdo de Refinanciamiento de 1986	Convenio de Refinanciamiento de los Valores Adeudados por CEPE a través de la Cuenta Operaciones, a Texaco Petroleum Company por Ventas de Crudo para Consumo Interno a 30 de septiembre de 1986, 25 de noviembre de 1986
Acuerdos de Transacción	Memorando de 1994, Acuerdo de Reparación Medioambiental de 1995, y Transacción Global de 1995
Acuerdo de Reparación Medioambiental de 1995	Contrato para la Ejecución de Trabajos de Reparación Medioambiental y Liberación de Obligaciones, Responsabilidades y Demandas entre el Gobierno del Ecuador, PetroEcuador, y TexPet, 4 de mayo de 1995
<i>Aguinda</i>	Maria Aguinda y otros contra Texaco, Inc., 945 F. Supp. 625 (Distrito Sur de Nueva York 1996), 142 F. Supp. 534 (Distrito Sur de Nueva York 2001), 93 Civ. 7527, 2000 WL 122143 (Distrito Sur de Nueva York 31 de enero de 2000), 303 F.3d 470 (Corte de Apelación de EE.UU. para el Segundo Circuito, 16 de agosto de 2002).
C I	Escrito de demanda de los Demandantes de 19 de octubre de 2007
C II	Contramemoria de los Demandantes en materia de jurisdicción de 1 de abril de 2008
C III	Primer Escrito pos-audiencia de los Demandantes en materia de jurisdicción de 22 de julio de 2008
C IV	Segundo Escrito pos-audiencia de los Demandantes en materia de jurisdicción de 12 de agosto de 2008

C V	Escrito de alegaciones de los Demandantes sobre el fondo de 14 de abril de 2008
C VI	Réplica de los Demandantes sobre el fondo de 24 de noviembre de 2008
C VII	Primer Escrito pos-audiencia de los Demandantes de 19 de junio de 2009
C VIII	Segundo Escrito pos-audiencia de los Demandantes de 15 de julio de 2009
C IX	Carta de los Demandantes de 6 de agosto de 2009 sobre la relevancia de la sentencia emitida por el Juzgado Provincial de Pichincha el 14 de julio de 2009 en el caso 153-93
C X	Escrito de los Demandantes sobre costas de 7 de agosto de 2009
C XI	Escrito de los Demandantes en respuesta a las nuevas pruebas de la Demandada de 7 de agosto de 2009
C XII	Contestación de los Demandantes al Escrito de la Demandada sobre costas de 21 de agosto de 2009
C XIII	Réplica de los Demandantes en respuesta a las nuevas pruebas de la Demandada de 21 de agosto de 2009
C XIV	Carta de los Demandantes de 19 de octubre de 2009 sobre la relevancia de la sentencia emitida por el Juzgado Provincial de Pichincha el 10 de septiembre de 2009 en el caso 154-93
C XV	Carta de los Demandantes de 17 de noviembre de 2010 presentando comentarios sobre el Informe Pericial Conjunto
C XVI	Carta de los Demandantes de 19 de diciembre de 2010 presentando comentarios sobre la Carta de los Demandantes de 17 de noviembre de 2010
C XVII	Carta de los Demandantes de 4 de marzo de 2011 respecto del nombramiento del Dr. Cordero Ordóñez por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador
CEPE	Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, una compañía estatal Ecuatoriana

CEPE/PE	CEPE, tras haber sido sucedida por PetroEcuador
CDI	Comisión de Derecho Internacional
CIADI	Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
CNUDMI	Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
Consortio	Consortio entre TexPet, Ecuadorian Gulf Oil Company, y CEPE según el acuerdo del 6 de agosto de 1973
CPA	Corte Permanente de Arbitraje
CPCH	Código de Procedimiento Civil holandés
CVDT	Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969
Decreto 1258	Decreto Supremo 1258, aprobado el 8 de noviembre de 1973, publicado en el Registro Oficial N° 433, el 15 de noviembre de 1973
Exh. C	Elemento de Prueba de los Demandantes
Exh. R	Elemento de Prueba de la Demandada
Exh. RE	Declaración de Perito de la Demandada
Gulf	Gulf Oil Company
HC1	Diapositivas de los Demandantes de su presentación inicial en la Audiencia sobre la jurisdicción
HC2	Lista de cartas de los Demandantes entre TexPet y los tribunales ecuatorianos distribuida en la Audiencia sobre la jurisdicción
HC3	Diapositivas de los Demandantes de su presentación final en la Audiencia sobre la jurisdicción
HC4	Diapositivas de los Demandantes de su presentación inicial en la Audiencia sobre el fondo
HC5	Diapositivas de los Demandantes de su presentación final en la Audiencia sobre el fondo

HR1	Diapositivas de la Demandada de su presentación inicial en la Audiencia sobre la jurisdicción
HR2	Primera serie de diapositivas de la Demandada de su presentación final sobre la retroactividad en la Audiencia sobre la jurisdicción
HR3	Segunda serie de diapositivas de la Demandada de su presentación final en la Audiencia sobre la jurisdicción
HR4	Diapositivas de la Demandada de su presentación inicial en la Audiencia sobre el fondo
HR5	Diapositivas de la Demandada de su presentación final en la Audiencia sobre el fondo
Informe Pericial Conjunto	Informe Conjunto de los Peritos Dr. Diego Almeida Guzmán y Dr. Javier Cordero Ordóñez de fecha 20 de octubre de 2010 respecto de los efectos de cualquier ley tributaria ecuatoriana aplicable a la cuantía de los daños
Laudo Interino	Laudo Interino del Tribunal de 1 de diciembre de 2008
Laudo Parcial	Laudo Parcial sobre el Fondo de 30 de marzo de 2010
<i>Lago Agrio</i>	María Aguinda y otros contra Chevron Texaco Corporation, Procedimiento No. 002-2003, Corte Superior de Justicia, Nueva Loja, el Ecuador
Ley de Hidrocarburos de 1971	Ley de Hidrocarburos, Decreto Supremo 1459, aprobado el 27 de septiembre de 1971, publicado en el Registro Oficial N° 322, 1 de octubre de 1971
Memorando de 1994	Memorando de Entendimiento entre el Estado ecuatoriano, PetroEcuador, y TexPet, 14 de diciembre de 1994
OPAH	Operaciones para el Abastecimiento de Hidrocarburos
Opinión Individual	Opinión Individual del Dr. Javier Cordero Ordóñez respecto de los efectos de cualquier tributaria ecuatoriana a la cuantía de los daños
OP I	Orden Procesal N° 1 de 22 de mayo de 2007
OP II	Orden Procesal N° 2 de 19 de octubre de 2007

OP III	Orden Procesal N° 3 de 21 de abril de 2008
OP IV	Orden Procesal N° 4 de 23 de mayo de 2008
OP V	Orden Procesal N° 5 de 19 de marzo de 2009
OP VI	Orden Procesal N° 6 de 30 de abril de 2009
OP VII	Orden Procesal N° 7 de 24 de julio de 2009
OP VIII	Orden Procesal N° 8 de 31 de marzo de 2010
pág. / págs.	Página / Páginas
Proyecto de Artículos de la CDI	El proyecto de artículos de la comisión de derecho internacional sobre la responsabilidad del estado por hechos internacionalmente ilícitos, adoptada por la Comisión de Derecho Internacional en su quincuagésima tercera sesión (2001)
PetroEcuador	Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador
Peritos Tributarios	Dr. Diego Almeida Guzmán y Dr. Javier Cordero Ordóñez, nombrados por los Demandantes y la Demandada, respectivamente, de conformidad con el párrafo 3.1 de la Orden Procesal N° 8
Plan de Acciones de Reparación de 1995	Plan de acciones de remediación de Texaco Petroleum Company para el previo Consorcio entre PetroEcuador-TexPet Consortium, de 8 de septiembre de 1995
R I	Escrito de defensa de la Demandada de 30 de noviembre de 2007
R II	Escrito de alegaciones de la Demandada en materia de jurisdicción de 31 de enero de 2008
R III	Primer Escrito pos-audiencia de la Demandada en materia de jurisdicción de 22 de julio de 2008
R IV	Segundo Escrito pos-audiencia de la Demandada en materia de jurisdicción de 12 de agosto de 2008
R V	Contraescrito de alegaciones de la Demandada sobre el fondo de 23 de septiembre de 2008

R VI	Escrito de dúplica de la Demandada sobre el fondo de 26 de enero de 2009
R VII	Primer Escrito pos-audiencia de la Demandada sobre el fondo de 19 de junio de 2009
R VIII	Segundo Escrito pos-audiencia de la Demandada sobre el fondo de 15 de julio de 2009
R IX	Carta de la Demandada de 27 de julio de 2009 sobre la relevancia de la sentencia emitida por el Juzgado Provincial de Pichincha el 14 de julio de 2009 en el caso 153-93
R X	Escrito de la Demandada sobre costas de 7 de agosto de 2009
R XI	Contestación de la Demandada al Escrito de los Demandantes en respuesta a las nuevas pruebas de la Demandada de 14 de agosto de 2009
R XII	Contestación de la Demandada al Escrito sobre costas de los Demandantes de 22 de agosto de 2009
R XIII	Carta de la Demandada de 2 de octubre de 2009 sobre la relevancia de la sentencia emitida por el Juzgado Provincial de Pichincha de 10 de septiembre de 2009 en el caso 154-93
R XIV	Carta de la Demandada de 17 de noviembre de 2010 presentando comentarios sobre el Informe Pericial Conjunto
R XV	Carta de la Demandada de 10 de diciembre de 2010 presentando comentarios sobre la Carta de los Demandantes de 17 de noviembre de 2010
R XVI	Carta de la Demandada de 7 de marzo de 2011 respecto del nombramiento del Dr. Cordero Ordóñez por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador
Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI	Reglamento de Arbitraje de 1976 de la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional
Resolución 1179	Resolución 1179, emitido por el Director Adjunto del Departamento de Finanzas de CEPE el 19 de noviembre de 1980

SG-CPA	Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje
TBI	Tratado Bilateral de Inversiones, específicamente el tratado entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones de 27 de agosto de 1993 (entrado en vigor el 11 de mayo de 1997)
TexPet	Texaco Petroleum Company, una corporación establecida bajo las leyes de Delaware, EE.UU., y subsidiaria al 100% de Chevron Corporation
Tr. I	Transcripción (inglés) de la Audiencia sobre la jurisdicción en San José, Costa Rica, 19-20 de mayo de 2008
Tr. II	Transcripción (inglés) de la Audiencia sobre el fondo en Washington, D.C., 20-29 de abril de 2009
Transacción Global de 1995	Convenio Transaccional y Finiquito entre el Gobierno de Ecuador, PetroEcuador, PetroProducción, PetroComercial, y TexPet, 17 de noviembre de 1995

A. Las Partes

Los Demandantes

Chevron Corporation
6001 Bollinger Canyon Road
San Ramon, CA, 94583
EE.UU.

Texaco Petroleum Company
6001 Bollinger Canyon Road
San Ramon, CA, 94583
EE.UU.

Representados por:

D. R. Doak Bishop
D. Wade M. Coriell
Dña. Isabel Fernández de la Cuesta
D. David Weiss
Dña. Elizabeth Silbert
KING & SPALDING
1100 Louisiana, Suite 4000
Houston, TX 77002
EE.UU.

D. Edward G. Kehoe
KING & SPALDING
1185 Avenue of the Americas
New York, NY 10036-4003
EE.UU.

Dr. Alejandro Ponce-Martínez
QUEVEDO & PONCE
Ave. 12 de Octubre y Lincoln
Edificio Torre 1492 Piso 16
P.O. Box 17-01-600
Quito
ECUADOR

La Demandada

La República del Ecuador

Representada por:

Dr. Diego García Carrión
Procurador General del Estado
Dr. Álvaro Galindo C.
Director Nacional de Patrocinio Internacional
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
Robles 731 y Av. Amazonas
Quito
ECUADOR

D. Eric W. Bloom
D. Tomás Leonard
WINSTON & STRAWN LLP
1700 K Street, NW
Washington, D.C., 20006-3817
EE.UU.

D. Ricardo Ugarte
WINSTON & STRAWN LLP
Grand-Rue 23
1204 Ginebra
SUIZA

D. C. MacNeil Mitchell
Winston & Strawn LLP
200 Park Avenue
Nueva York, NY, 10166-4193
EE.UU.

D. Bruno D. Leurent
Winston & Strawn LLP
25, avenue Marceau
75116 París
Francia

D. Mark Clodfelter
FOLEY HOAG LLP
1875 K Street, NW
Suite 800
Washington, DC 20006-1238
EE.UU.

B. El Tribunal

Nombrado por los Demandantes:

El honorable Charles N. Brower

20 Essex Street Chambers

20 Essex Street

Londres WC2 R3AL

REINO UNIDO

Nombrado por la Demandada:

El profesor Albert Jan van den Berg

Hanotiau & van den Berg

IT Tower, 9th Floor

480 Avenue Louise, B.9

1050 Bruselas

BÉLGICA

Nombrado por acuerdo de los co-árbitros con el consentimiento de las Partes

El profesor Karl-Heinz Böckstiegel, Presidente

Parkstrasse 38

D-51427 Bergisch-Gladbach

ALEMANIA

C. Breve Introducción al Caso

1. La breve introducción al caso a continuación se presenta sin perjuicio de la completa presentación por las Partes de los detalles de hecho y legales del caso y de las consideraciones y conclusiones del Tribunal.

C.I. La Fase Jurisdiccional

2. Dado que los argumentos de las partes en relación con la jurisdicción del Tribunal pueden ser relevantes para entender por completo la fase sobre el fondo del procedimiento, el Tribunal reitera en las siguientes secciones un resumen de los asuntos y alegaciones sobre jurisdicción de su Laudo Interino de 1 de diciembre de 2008 (Laudo Interino, ¶¶38-42, 75-91).

1. Las Cuestiones Jurisdiccionales

3. Sin perjuicio de la completa presentación por las Partes de los detalles de hecho y legales del caso y de las consideraciones y conclusiones del Tribunal, los asuntos alegados por las Partes en esta fase jurisdiccional, sin importar si cada asunto en particular está correctamente caracterizado como jurisdiccional, se centran en cuatro temas principales.
4. La primera serie de asuntos trata del efecto preclusivo, de existir, que deberían tener las declaraciones o la conducta de los Demandantes anterior a la iniciación del arbitraje sobre su derecho a continuar con el presente litigio (véase Laudo Interino, ¶¶125-149).
5. La segunda serie de asuntos trata de si las reclamaciones contractuales en los juicios ante los tribunales ecuatorianos cumplen con los requisitos para ser considerados como una inversión o parte de una inversión conforme al TBI (véase Laudo Interino, ¶¶150-195). Alternativamente, la cuestión trata de si las reclamaciones se deben o se refieren a “acuerdos de inversión” de conformidad con el TBI (véase Laudo Interino, ¶¶196-213).

6. La tercera serie de asuntos trata de si los Demandantes tienen que agotar los recursos locales para cumplir con los requisitos de sus reclamaciones de denegación de justicia y otras violaciones del TBI y, en ese caso, si de verdad han agotado todos los recursos locales exigidos (véase Laudo Interino, ¶¶214-238).
7. La última serie de asuntos trata de la aplicación *ratione temporis* del TBI a una situación cuyos antecedentes de hecho incluyen periodos significativos que datan de antes de la entrada en vigor del TBI. Se disputa el ámbito temporal del TBI respecto a litigios preexistentes y actos y omisiones ocurridos antes de su entrada en vigor. También se disputa si la conducta del Ecuador constituye un acto continuado o compuesto, lo cual permitiría que caiga dentro del ámbito temporal del TBI (véase Laudo Interino, ¶¶239-301).

2. Argumentos de la Demandada

8. Sujeto a mayor detalle en relación con cada asunto en particular que se encuentre en el Laudo Interino, los argumentos de la Demandada sobre jurisdicción se pueden resumir de la siguiente manera.
9. La Demandada argumenta que este Tribunal carece de jurisdicción para conocer de las demandas que surgen del TBI por diversas razones. Como cuestión preliminar, la Demandada argumenta que los Demandantes deberían estar impedidos de presentar todas sus demandas debido a un abuso del procedimiento. La Demandada también se opone a la jurisdicción porque los Demandantes no han presentado una “diferencia de inversión” conforme al significado del TBI, situando así sus demandas fuera del ámbito *ratione materiae* del TBI. Por último, la Demandada alega que las demandas quedan fuera del alcance *ratione temporis* del TBI.
10. La objeción preliminar de la Demandada sobre el abuso del procedimiento se basa en que la posición actual de los Demandantes es incoherente con las repetidas manifestaciones realizadas previamente en un procedimiento judicial ante los tribunales de los EE.UU. en el que los Demandantes avalaron la imparcialidad y competencia del poder judicial ecuatoriano. La Demandada solicita al Tribunal que impida a los Demandantes que se contradigan a sí

mismos con el fin de crear jurisdicción sobre la base de una nueva “diferencia”. La Demandada además alega que el motivo de los Demandantes detrás del inicio del presente arbitraje es minar la ejecutabilidad de una eventual sentencia contraria en el caso *Lago Agrio*. Tanto la contradicción de los Demandantes consigo mismos, como su inadecuado objetivo de iniciar el arbitraje, constituyen un abuso de derecho tal que los Demandantes deberían ser tratados como si hubiesen renunciado a cualquier derecho a someter a arbitraje demandas relacionadas con la capacidad de los tribunales ecuatorianos.

11. Sobre la *ratione materiae*, la Demandada alega que las presentes demandas basadas en los procedimientos judiciales de TexPet no entran dentro de la definición de una “diferencia de inversión” prevista en el artículo VI(1) del TBI. Por lo tanto, la Demandada alega que la presente controversia está fuera del alcance sustantivo del consentimiento del Ecuador a arbitrar conforme al TBI. La Demandada formula varias objeciones a este respecto.
12. La Demandada alega que las actuales demandas no surgen ni están relacionadas con un “acuerdo de inversión” ni una infracción del tratado “con respecto a una inversión”. En primer lugar, los procedimientos judiciales de los Demandantes no poseen las características necesarias para constituir una “inversión”. Es más, los procedimientos judiciales de los Demandantes no pueden encajarse bajo la rúbrica del “derecho al dinero” de la definición del TBI de las inversiones protegidas. Esto es porque las demandas no están “relacionadas con una inversión” como exige esa definición dado que las inversiones de los Demandantes ya no existían en el momento en el que entró en vigor el TBI. Las demandas de TexPet tampoco entran dentro del título “derechos conferidos por ley o por contrato” dado que el TBI sólo cubre derechos a hacer algo o a de otra forma participar en alguna actividad sancionada por leyes análogas a los derechos bajo licencias o permisos. Finalmente, la no retroactividad del TBI también impide a los Demandantes apoyarse en los “acuerdos de inversión” que habían dejado de existir cuando el TBI entró en vigor.
13. Incluso si las demandas constituyeran una “diferencia de inversión” conforme al TBI, la Demandada añade que las reclamaciones por denegación de justicia no están maduras como para su procesamiento. Conforme al derecho internacional, un Estado no es responsable de los actos de su poder judicial salvo que un demandante haya agotado todos los recursos

procesales disponibles. Las reclamaciones por denegación de justicia por lo tanto deben estar basadas en los actos del poder judicial como un todo. Dado que los Demandantes no han probado que hayan agotado los potenciales recursos procesales en sus casos, las reclamaciones por denegación de justicia no pueden presentarse y las demandas deben considerarse prematuras.

14. Con respecto a la jurisdicción *ratione temporis*, la Demandada alega que los Estados son responsables por el incumplimiento de las obligaciones de los tratados sólo si tales obligaciones estaban en vigor cuando el supuesto incumplimiento sucedió. Cualquier conducta del Ecuador anterior al TBI queda fuera del alcance temporal del TBI de acuerdo con el principio de no retroactividad plasmado en el artículo 28 de la CVDT. La Demandada formula tres objeciones distintas a este respecto.
15. La primera objeción es que la presente disputa y todos los hechos asociados surgieron con anterioridad a la entrada en vigor del TBI el 11 de mayo de 1997. Se trata de la continuación en una forma distinta de una disputa pre-TBI. La Demandada alega que tales disputas pre-TBI están excluidas del ámbito temporal del TBI. El Tribunal por lo tanto debería rechazar todas las presentes reclamaciones sobre la base de que no representan una nueva disputa a la que se pueda aplicar el TBI.
16. Según la Demandada, el principio de no retroactividad y el derecho de la responsabilidad del Estado también impiden la consideración de cualquier acto pre-TBI para determinar un incumplimiento. El Tribunal no puede juzgar las actuaciones y omisiones del Ecuador conforme a estándares del TBI que no existían en el momento de tal conducta. El soporte de las reclamaciones – los originarios supuestos incumplimientos de obligaciones contractuales – está por lo tanto excluido de la jurisdicción del Tribunal. Es más, el resto de la demanda no puede mantenerse de forma independiente porque la conducta de la Demandada no constituye una acción ni “compuesta” ni “continuada” conforme al derecho internacional.
17. La tercera objeción *ratione temporis* alega que las demandas conciernen inversiones que dejaron de existir cuando TexPet abandonó el Ecuador. En 1995, el Acuerdo de 1973 había expirado, las operaciones de TexPet en el Ecuador habían terminado y todos los derechos restantes relacionados con los contratos anteriores habían terminado conforme a los Acuerdos

de Transacción. Por lo tanto, en el momento en que el TBI entró en vigor en 1997, la inversión de los Demandantes y sus derechos relacionados constituían una “situación que en esa fecha ha[bía] dejado de existir” conforme al artículo 28 de la CVDT.

3. Argumentos de los Demandantes

18. Sujeto a mayor detalle en relación con cada asunto en particular que se encuentre en el Laudo Interino, los argumentos de los Demandantes sobre jurisdicción se pueden resumir de la siguiente manera.
19. Los Demandantes argumentan en primer lugar que ellos continuaron teniendo inversiones en el Ecuador tras la entrada en vigor del TBI. La definición del término “inversión” del TBI es amplia. Las inversiones también deben examinarse en su integridad y no separadas en sus componentes. Por lo tanto, las inversiones realizadas conforme a los Acuerdos de 1973 y 1977 deben considerarse de tal manera que incluyan las demandas legales y contractuales que nacen de estos acuerdos y que son el objeto de los procedimientos pendientes así como los trabajos de reparación medioambiental relacionados con las operaciones de TexPet que continuaron hasta 1998, tras la entrada en vigor del TBI.
20. Los Demandantes además alegan que la controversia concierne “acuerdos de inversión”, en concreto los Acuerdos de 1973 y 1977. Tales controversias están cubiertas de forma independiente bajo el TBI. Además, dado que la jurisdicción sobre tales disputas no está limitada a reclamaciones basadas en el tratado, las limitaciones temporales que se aplican a las disputas TBI no se aplican. Es suficiente que estas demandas hayan continuado existiendo tras la fecha de entrada en vigor del TBI.
21. Los Demandantes alegan que el TBI no excluye disputas preexistentes. El TBI necesitaría incluir lenguaje explícito para excluir tales disputas. En cambio, de conformidad con el artículo XII del TBI, las disputas simplemente tienen que ser “existentes” en el momento de la entrada en vigor para estar cubiertas por el TBI. En cualquier caso, dado que las demandas son por denegación de justicia, éstas sólo se cristalizaron tras un grado crítico de demora indebida y politización del poder judicial que tuvo lugar en 2004.

22. Los Demandantes también rechazan la idea de que las reclamaciones conforme al TBI deben basarse estrictamente en actuaciones y omisiones posteriores al TBI. En primer lugar, la conducta anterior al TBI puede servir como antecedente para las demandas por denegación de justicia que solamente nacieron de verdad tras la entrada en vigor del TBI. En segundo lugar, el principio de no retroactividad no puede impedir la responsabilidad por actos “compuestos” o “continuados”. La incapacidad persistente de los tribunales ecuatorianos para decidir los casos de los Demandantes y los hechos que llevaron a la destrucción de la independencia del poder judicial ecuatoriano constituyen actos continuados y compuestos.
23. En cuanto al argumento de que los Demandantes no han agotado todos los recursos procesales disponibles, éstos alegan que cualquier requisito de agotamiento no es una cuestión jurisdiccional, sino una cuestión sobre el fondo. En cualquier caso, ellos alegan que cualquier esfuerzo adicional para intentar que sus casos se hubiesen decidido justamente habría sido inútil. Los recursos citados por la Demandada son adecuados para los errores de jueces individuales y no habrían sido efectivos en el contexto de un fallo sistemático del poder judicial ecuatoriano.
24. Por último, los Demandantes encuentran que los argumentos de la Demandada sobre abuso de derechos, *estoppel* y renuncia no tienen fundamento. Las alegaciones de los Demandantes en este caso no contradicen sus alegaciones previas en procedimientos judiciales ante los tribunales de los EE.UU. porque la situación en el Ecuador ha cambiado y empeorado significativamente desde que se hicieron cualquiera de las manifestaciones impugnadas. Es más, esas manifestaciones se hicieron por partes diferentes en un procedimiento distinto y no son transferibles al presente procedimiento.

4. El Laudo Interino del Tribunal sobre Jurisdicción

25. El Tribunal emitió su Laudo Interino el 1 de diciembre de 2008. A la vista de los razonamientos expuestos en el laudo, el Tribunal decidió lo siguiente:

- 1. Las objeciones de la Demandada son desestimadas.**

- 2. El Tribunal dispone de jurisdicción respecto a las demandas tal como las formularon los Demandantes en su Escrito pos-audiencia con fecha del 12 de agosto de 2008 en el párrafo 116.**
- 3. La decisión respecto de las costas del arbitraje se pospone hasta una fase posterior del presente procedimiento.**
- 4. El procedimiento a seguir en este caso será objeto de una Orden Procesal del Tribunal aparte.**

C.II. La Fase sobre el Fondo

26. Dado que los argumentos de las partes en relación con el fondo del caso pueden ser relevantes para entender por completo la decisión del Tribunal sobre la cuantía, el Tribunal reitera en las siguientes secciones un resumen de los asuntos y alegaciones sobre el fondo de su Laudo Parcial de 30 de marzo de 2010.

1. Las Cuestiones sobre el Fondo

27. Los asuntos planteados por las Partes durante la fase sobre el fondo se centran en seis temas principales.
28. La primera serie de asuntos trata de si la Demandada ha cometido una denegación de justicia bajo derecho internacional consuetudinario, bien con base en una demora indebida, o en decisiones manifiestamente injustas (véase Laudo Parcial sobre el Fondo, Secciones H.II.1 y H.II.2).
29. La segunda serie de asuntos trata de si la Demandada ha incumplido estándares específicos del TBI a través de su conducta o su inacción en relación con los procedimientos judiciales de los Demandantes (véase Laudo Parcial sobre el Fondo, Sección H.II.3).
30. La tercera serie de asuntos trata de si la Demandada ha incumplido sus obligaciones conforme al TBI en relación con “acuerdos de inversión” tal y como se entiende ese término en el TBI (véase Laudo Parcial sobre el Fondo, Sección H.II.4)
31. La cuarta serie de asuntos trata de si los Demandantes deben agotar los recursos locales para cumplir con los requisitos de sus demandas por denegación de justicia y otras violaciones del TBI y, en ese caso, si han agotado de verdad todos los recursos locales necesarios (véase Laudo Parcial sobre el Fondo, Sección H.III).
32. La quinta serie de asuntos trata del efecto preclusivo, de existir, que deberían tener las manifestaciones y la conducta de los Demandantes anterior al comienzo de este arbitraje

sobre su capacidad para continuar con el presente litigio (véase Laudo Parcial sobre el Fondo, Sección H.IV).

33. La última serie de asuntos trata de los daños consiguientes a la determinación de denegación de justicia o incumplimiento del TBI. Las Partes disputan la definición correcta de la pérdida de los Demandantes, si los Demandantes habrían ganado en los casos subyacentes ante los tribunales ecuatorianos, y la cuantía de los daños que deben adjudicarse como resultado de cualquier incumplimiento que haya impedido que los Demandantes hayan recobrado sus daños con base en sus demandas justificadas (véase Laudo Parcial sobre el Fondo, Secciones H.V, H. VI, y H. VII).

2. Argumentos de los Demandantes

34. Sujeto a mayor detalle que se encuentra en el Laudo Parcial del Tribunal en relación con cada asunto en particular, los argumentos de los Demandantes sobre el fondo se pueden resumir de la siguiente manera.
35. En primer lugar, los Demandantes alegan que debido a la demora de 15 años de los tribunales ecuatorianos y la negativa a emitir una sentencia en los siete casos de TextPet, el Ecuador claramente ha violado sus propias leyes y ha cometido una denegación de justicia conforme al derecho internacional. La demora indebida y las denegaciones de los tribunales claramente violan las propias leyes reguladoras de los procedimientos judiciales del Ecuador, incluyendo la Constitución del Ecuador de 1998, la Ley Orgánica de la Función Judicial, y el Código de Procedimiento Civil así como la Convención Americana de Derechos Humanos. Aunque los Demandantes mantienen que el derecho internacional regula el fondo de la controversia, los incumplimientos del derecho ecuatoriano evidencian un incumplimiento de los estándares mínimos de tratamiento bajo el derecho internacional consuetudinario. A su vez, cualquier violación del derecho internacional consuetudinario automáticamente se convierte en un incumplimiento del TBI en virtud del artículo II(3)(a) del TBI, que establece que, “[l]as inversiones...en ningún caso, se le concederá un trato menos favorable que el que exige el derecho internacional”.

36. Según los Demandantes, el derecho internacional consuetudinario protege contra denegaciones de justicia, lo que incluye cualquier “denegación, demora no garantizada u obstrucción en el acceso a los tribunales, deficiencia total en la administración del procedimiento judicial o en las acciones y recursos legales, un incumplimiento al proporcionar dichas garantías que generalmente se consideran indispensables en la debida administración de justicia, o una sentencia judicial manifiestamente injusta”. Los Demandantes añaden que el estándar de denegación de justicia es objetivo y no requiere ni demostración de mala fe ni discriminación hacia los nacionales del Estado de sede.
37. Al aplicar los principios anteriores a su reclamación por demora indebida, los Demandantes observan que seis de sus siete reclamaciones han estado legalmente preparadas para toma de decisión desde, por lo menos, 1998 y en cinco de dichos casos se dictaron autos para sentencia, declarando legalmente la responsabilidad del tribunal para dictar sentencia de inmediato. El último caso ha permanecido adormecido desde el inicio de la fase probatoria durante más de 14 años debido a la negativa del tribunal a poner en marcha la etapa probatoria. Los tribunales ecuatorianos son por lo tanto los únicos y directamente responsables por la demora y la Demandada no ha proporcionado ninguna justificación adecuada en términos de la complejidad del caso o la conducta de las partes en el litigio. La congestión de la corte y el trabajo atrasado en los tribunales mencionado por la Demandada pueden explicar el retraso pero no operan como una defensa a una reclamación por denegación de justicia. En la medida en que la congestión de la corte pueda ser relevante para determinar si hubo demora sin razón, los Demandantes sostienen que la Demandada no ha establecido ni la existencia de trabajo atrasado ni la suficiente diligencia del Ecuador para enfrentarse al trabajo atrasado alegado. Los Demandantes por lo tanto alegan que la denegación de justicia fue consumada en todos sus casos antes del 31 de diciembre de 2004, momento en que estos se habían demorado lo suficiente como para constituir una denegación de justicia conforme al derecho internacional.
38. Alternativamente, los Demandantes argumentan que las recientes decisiones de los tribunales ecuatorianos son manifiestamente injustas, extremadamente incompetentes y constituyen una denegación de justicia adicional e independiente conforme al derecho internacional consuetudinario. No es necesaria prueba directa de la mala fe de los tribunales a este

respecto: una denegación de justicia puede encontrarse en una clara y maliciosa incorrecta aplicación del derecho. Con respecto a los dos casos desestimados por “abandono” o “deseo de interposición judicial”, los Demandantes argumentan que los tribunales se basaron en una disposición del Código Civil evidentemente no aplicable, incluyendo la aplicación de la disposición de forma retroactiva. Además, en un caso, el tribunal fue tan lejos como para ignorar descaradamente la regla jurídica bien establecida que prohíbe la desestimación por abandono después de que el tribunal haya emitido un auto para sentencia. En cualquiera de los casos, el Tribunal debería considerar que la actuación del tribunal de aprovecharse de su propia infracción para desestimar el caso constituye una denegación de justicia en sí misma. Con respecto a los casos desestimados por prescripción, el tribunal aplicó incorrectamente un periodo de prescripción especial para pequeñas ventas al por menor a consumidores finales, una categoría de la que las reclamaciones de TexPet claramente no forman parte. Las acciones de TexPet no son *sui generis* tal y como la Demandada sostiene; son acciones comunes para las cuales se aplica el periodo de prescripción estándar y por defecto de 10 años. Los argumentos ofrecidos ahora por la Demandada nunca se presentaron ante el tribunal durante los 16 años de pendencia del litigio y no fueron mencionados en las sentencias mismas. Para todos los casos anteriores, los Demandantes destacan que las decisiones de los tribunales no se emitieron hasta después de que se había presentado la notificación de este arbitraje, a pesar de la total inactividad de los casos durante una década o más. Esto, aseguran los Demandantes, es una clara evidencia circunstancial de mala fe por parte de los tribunales ecuatorianos.

39. Además, los Demandantes argumentan que los mismos periodos largos de inactividad judicial y la negativa a juzgar, junto con las decisiones incompetentes y parciales, y la erosión de la independencia judicial en el Ecuador desde el 2004, también violaron varios estándares específicos de protección conforme al TBI. Ello incluye el artículo II(7) del TBI (“medios eficaces para hacer valer las reclamaciones y respetar los derechos”), el artículo II(3)(a) (“tratamiento justo y equitativo y protección y seguridad plenas, y un trato no menos favorable que el que exige el derecho internacional”), y el artículo II(3)(b) (“medidas arbitrarias y discriminatorias”). En particular, los Demandantes rechazan la alegación de la Demandada de que sólo la interferencia extrema y perjudicial por el gobierno violará el artículo II(7) y afirma que el sentido ordinario de la disposición obliga al Ecuador a

proporcionar un instrumento disponible que hará o forzará a otros—incluyendo a sí mismo— a observar los derechos establecidos en un contrato.

40. Dado que el TBI proporciona jurisdicción sobre las diferencias “que surgen o se relacionan con...un acuerdo de inversión”, los Demandantes sostienen que la Demandada ha incurrido en un incumplimiento del TBI mediante el incumplimiento de los Acuerdos de 1973 y 1977, cometiendo subsiguientemente una denegación de justicia cuando TexPet buscaba un remedio contra esos incumplimientos.
41. Con respecto al agotamiento de los recursos locales, los Demandantes argumentan de manera preliminar que la regla de los recursos locales no resulta aplicable a las reclamaciones por denegación de justicia por demoras indebidas conforme al derecho internacional consuetudinario. No existe apelación posible según el derecho ecuatoriano contra la negativa de un juez de primera instancia a decidir un caso. Las disposiciones sustantivas del TBI tampoco contienen un requerimiento de agotamiento de recursos locales e incluso si la regla de los recursos locales fuese aplicable, recurrir a los recursos locales habría sido inútil puesto que el poder judicial ecuatoriano carece de independencia desde el 2004. Finalmente, los Demandantes sostienen que la carga de la prueba de la disponibilidad del recurso *como recurso*, y la efectividad de tal recurso recae sobre la Demandada. Sin embargo, la Demandada no ha sido capaz de probar la existencia y efectividad de los recursos que han planteado.
42. Además, la Demandada no ha presentado un caso coherente de *estoppel* por abuso de derechos con respecto a las declaraciones de los Demandados hechas en el contexto del caso *Aguinda*. Primero, las declaraciones de los Demandados en el caso *Aguinda* eran opiniones individuales y no “claras e inequívocas declaraciones de hecho” tal y como se requiere bajo la doctrina del *estoppel*. Estas declaraciones “reflejaban diferentes opiniones articuladas en un momento diferente en el tiempo, sobre diferentes sistemas judiciales ecuatorianos por diferentes partes en diferentes controversias”. Además, la Demandada no ha demostrado ninguna confianza perjudicial en estas declaraciones tal y como se requiere para la aplicación del *estoppel*. En cualquiera de los casos, el Demandante Chevron no ha hecho declaraciones sobre el poder judicial ecuatoriano y el hecho de que una de las partes o sus afiliados

opinaran o predijeran que los tribunales ecuatorianos proporcionarían un foro adecuado para el caso *Lago Agrio* no autoriza de alguna manera a los tribunales del país a denegar la justicia a las partes litigando en dichos tribunales.

43. Volviendo al cálculo de los daños, los Demandantes sostienen que el principio de indemnización íntegra se aplica a una denegación de justicia. De acuerdo con este principio, debería adjudicarse a los Demandantes los daños equivalentes a aquellos reclamados en sus casos ante los tribunales ecuatorianos, así como los daños causados como resultado de la demora, esto es, los daños subyacentes más intereses y costos por el periodo de demora causada por los tribunales ecuatorianos. Además, los Demandantes sostienen que el Tribunal es competente para aplicar de nuevo su propia interpretación de los Acuerdos de 1973 y 1977 sin tener en cuenta las decisiones que se han dictado o que podrían ser dictadas en los tribunales ecuatorianos. Por lo tanto, no existe justificación para ajustar los daños de los Demandantes en este caso para tener en cuenta la posibilidad de que, a pesar de la validez legal de sus reclamaciones, los Demandantes no hubieran tenido éxito en los casos subyacentes. Con respecto a los argumentos de la Demandada sobre la mitigación de los daños, el Ecuador no debe confiar en su propia conducta ilegítima como base para reducir los daños de los Demandantes.
44. Volviendo al fondo de los casos judiciales subyacentes, los Demandantes argumentan que, bajo el Acuerdo de 1973, TexPet proporcionaría petróleo para su refinación en derivados (tales como gasolina, queroseno, combustible, y otros productos basados en petróleo) para satisfacer el consumo interno. Dada la falta de suficiente capacidad de refinación, TexPet también proporcionaría “Crudo de Compensación” al Ecuador para satisfacer las necesidades domésticas. Este crudo sería comprado al precio doméstico y exportado a un precio internacional. El beneficio de esta transacción se usaría para comprar productos derivados destinados para el consumo interno en el Ecuador. El consumo interno estaría satisfecho mediante la combinación y equilibrio entre estos dos métodos. El volumen total del crudo, independientemente del título bajo el que fuera solicitado, sería determinado dividiendo el consumo interno total de barriles por día por la producción proporcional correspondiente a cada uno de los productores en el país. Si el Ecuador requería suministros adicionales de petróleo crudo de TexPet con el fin de que las refinerías domésticas produjeran derivados

para la exportación, TexPet era pagado al precio del mercado internacional por este crudo y a parte de eso era libre de exportar el resto de su crudo al precio de mercado internacional.

45. Según los Demandantes, el Acuerdo de 1977 luego clarificó el Acuerdo de 1973 y estableció una fórmula global para calcular el equivalente del crudo de los productos exportados, basada en el precio relativo del producto exportado en comparación con el precio del crudo. Los Demandantes también niegan la aseveración de la Demandada de que los Acuerdos de 1973 y 1977 violaron la Ley de Hidrocarburos de 1971 o que eran inválidos porque no reunían las formalidades requeridas para los contratos estatales. Estos argumentos se ven contradichos por el preámbulo y los términos de los acuerdos en sí mismos así como por evidencia de la intención de las partes en el momento de la negociación. Además, estos argumentos nunca fueron alegados en los tribunales ecuatorianos.
46. Citando las disposiciones de los Acuerdos de 1973 y 1977 tal y como se describió anteriormente, los Demandantes aseveran que la Demandada incumplía sistemáticamente su obligación de pagar a TexPet los precios internacionales más altos del petróleo crudo que el Gobierno solicitó para el consumo interno pero que de hecho usaba para crear productos derivados para la exportación. Como resultado, los Demandantes iniciaron los cinco juicios contra el Gobierno del Ecuador entre 1991 y 1993 que versaban sobre las alegaciones de contribución en exceso de crudo para el consumo interno. Estas incluían las dos reclamaciones de la Refinería Amazonas (Casos 7-92 y 153-93), los dos casos de la Refinería Esmeraldas (Casos 23-91 y 152-93), y los casos de Productos Importados (Caso 154-93). Los Demandantes también presentaron dos casos más, uno relacionado con un asunto de fuerza mayor (Caso 8-92) y el otro respecto del incumplimiento del Acuerdo de Refinanciamiento de 1986 (Caso 983-03).
47. Los Demandantes argumentan que ellos probaron su reclamación en cada caso. En todos los casos, excepto en la primera reclamación de la Refinería Amazonas y la reclamación del Acuerdo de Refinanciamiento, TexPet designó al Sr. Borja como su perito, el cual presentó informes confirmando la contribución en exceso de crudo para el consumo interno y calculando el número específico de barriles y el valor de las contribuciones en exceso realizadas. En los mismos cinco casos, un perito en nombre del Ecuador confirmó el análisis

del Sr. Borja. En la primera reclamación de la Refinería Amazonas, el Sr. Borja no pudo presentar sus resultados porque el tribunal se negó a programar la fecha para la inspección judicial de los peritos. Finalmente, en la reclamación del Acuerdo de Refinanciamiento, el tribunal adjudicó a TexPet el monto que reclamaba (pero de tal forma que no podía cobrarlo). El total inicial de las reclamaciones cuantificadas en estos siete casos fue de 553.456.850,81 USD.

48. Más específicamente, en los casos de la Refinería Esmeraldas (Casos 23-91 y 152-93), y el caso de la Refinería Amazonas (Casos 7-92 y 15-93), los Demandantes mantienen que el Ecuador refinó el crudo requerido de TexPet para el consumo interno y vendió los productos derivados en el mercado interno ecuatoriano. Sin embargo, una parte de esos productos derivados, el petróleo residual del proceso de refinación, no pudo ser vendido en el mercado nacional y fue en cambio exportado con un beneficio significativo para el Ecuador. Los casos de TexPet por lo tanto reclamaban una indemnización basada en el argumento de que, cuando cualesquiera productos derivados fuesen exportados, TexPet tenía derecho a ser compensado al precio de mercado internacional de conformidad con el Acuerdo de 1973, como se confirmó en el Acuerdo de 1977.
49. En la reclamación de los Productos Importados (Caso 154-93), los Demandados alegan que el Ecuador no acreditó en la Cuenta OPAH los fondos recibidos de las ventas hechas a vendedores al por menor (como las gasolineras) de los derivados importados comprados con el Crudo de Compensación de TexPet. Según el sistema del Crudo de Compensación, el Ecuador solicitaría crudo a TexPet al precio doméstico y lo vendería al precio internacional. Las ganancias netas entonces fueron usadas por CEPE/PetroEcuador para comprar derivados para el consumo local que luego vendió a los vendedores al por menor como las gasolineras (también propiedad de CEPE). Todas estas transacciones debían reflejarse en la Cuenta OPAH, cuyo saldo afectaba al monto del Crudo de Compensación solicitado. Sin embargo, los ingresos de las ventas de CEPE/PetroEcuador a los vendedores al por menor nunca fueron depositados en la Cuenta OPAH. Los Demandantes sostienen que la Cuenta OPAH de hecho incluía cuentas a cobrar por estos pagos esperados, y además una resolución interna de CEPE (Resolución 1179 del 19 de noviembre de 1980) reconoció este déficit, pero no se realizaron depósitos por CEPE. Como consecuencia, los Demandados concluyen que el balance de la

Cuenta OPAH fue menor, lo que, a su vez, requería que TexPet contribuyese con un exceso de Crudo de Compensación para arreglar esta deficiencia.

50. El caso de Fuerza Mayor (Caso 8-92), está relacionado con un terremoto que golpeó el Ecuador el 5 de marzo de 1987 y destruyó varios kilómetros del oleoducto Transecuatoriano. Esto efectivamente “confinó” la capacidad de producción de TexPet. Los Demandantes argumentan que, bajo el Acuerdo de 1973, TexPet estaba sólo obligado a contribuir al consumo interno en proporción a su participación en el total de la producción de petróleo del Ecuador. Durante los meses siguientes al terremoto (el periodo de fuerza mayor), TexPet, a través de un oleoducto colombiano, proporcionó al Ecuador el crudo que tenía en sus tanques de almacenaje en el Ecuador. TexPet por tanto proporcionó al Ecuador el 100% de su producción, más todo su petróleo almacenado. Sin embargo, una vez que se restauró el oleoducto Transecuatoriano, el Ecuador requirió a TexPet que contribuyera de manera retroactiva con más del 100% de su producción para cubrir el consumo interno del Ecuador durante el periodo de fuerza mayor, pasándole por tanto de manera ilícita a TexPet toda la carga de los efectos del terremoto.
51. Con respecto al último caso, el caso del Acuerdo de Refinanciamiento (Caso 983-03, anteriormente Caso 6-92), los Demandantes alegan que el Ecuador acumuló una gran deuda por compras no pagadas de crudo a TexPet al precio de mercado interno. Por tanto, TexPet y el Ecuador celebraron un Acuerdo de Refinanciamiento, requiriendo a CEPE que devolviese su deuda en 18 cuotas mensuales. Los Demandantes sostienen que el Ecuador se retrasaba sistemáticamente en sus pagos de capital e interés, devengando así un mayor interés por pagos atrasados a la Tasa de Interés Preferencial de Nueva York, como se especifica en el contrato. TexPet y CEPE formaron luego una comisión que determinó que el Ecuador debía 1.522.552,54 USD de interés adicional. TexPet presentó el Caso 6-92 (que luego fue reenumerado como Caso 983-03), reclamando este monto. Los Demandados reconocen que, después de la Notificación de arbitraje, el tribunal sentenció a favor de TexPet el monto completo reclamado. Sin embargo, la sentencia estipulaba que debía pagarse al “representante legal” de TexPet. Esto hacía imposible su cobro porque, según el derecho ecuatoriano, sólo las empresas nacionales pueden tener “representantes legales”.

52. Los Demandantes alegan que con respecto a las sentencias emitidas contra ellos en el segundo caso de la Refinería Amazonas (Caso 153-93) y en el caso de los Productos Importados (Caso 154-93), después de la presentación de los Escritos pos-audiencia por las Partes, una decisión tomada por un tribunal doméstico después de haberse consumado una denegación de justicia no puede afectar la responsabilidad de la Demandada por dicho acto ilícito. Los Demandantes por lo tanto consideran que esas decisiones son irrelevantes para el presente caso.
53. Tal y como se ha descrito anteriormente, los Demandantes sostienen que han probado su reclamación y sus daños a través de su perito nombrado de parte, el Sr. Borja, cuyos resultados fueron confirmados por peritos independientes, designados por el tribunal y, en algunos casos, por el perito designado por la contraparte en dichos litigios. En este arbitraje, los Demandantes contrataron a Navigant para realizar una evaluación independiente de los daños hasta el 1 de abril de 2008. De acuerdo con los cálculos de Navigant, los daños de TexPet ascienden a entre 1,484 mil millones USD y 1,605 mil millones USD, incluyendo los intereses devengados.
54. Los cálculos de Navigant, a su vez, se basan en las aseveraciones de los Demandantes sobre el interés aplicable. Los Demandantes sostienen que el derecho ecuatoriano determina el interés que debe aplicarse hasta la fecha en que se consumó la denegación de justicia. De acuerdo con el derecho ecuatoriano, el interés simple se reclama por lo tanto desde el momento del incumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2004, usando la Tasa Activa Referencial, una tasa usada por el Gobierno ecuatoriano como la tasa clave para las obligaciones internacionales. Pasada la fecha de la consumación de la denegación de justicia, los Demandantes alegan que el derecho internacional impone la aplicación de un interés compuesto, usando una tasa de interés compuesto anual del 11,41% igual al costo del capital del Ecuador.
55. Al contrario de la Demandada, los Demandantes alegan que las adjudicaciones de los daños se han de computar sobre una base antes de impuestos. Los Demandantes aseveran que los impuestos a la renta son un acto del gobierno que no tiene ninguna relación con una reclamación por denegación de justicia. Los impuestos son consecuencia de la indemnización

concedida y no afectan a su determinación. Los Demandantes también observan que los tribunales ecuatorianos no habrían deducido impuestos de sus sentencias en los casos subyacentes. En cualquiera de los casos, conforme al derecho ecuatoriano, la antigua tarifa impositiva no aplicaría porque no ocurrió un hecho sujeto a imposición en dicho momento y los montos pagados por daños no están sujetos al impuesto a la renta. Incluso bajo las antiguas reglas tributarias, estos ingresos no estarían directamente relacionados con la exploración y producción de hidrocarburos y, por lo tanto, también se beneficiarían de una tarifa impositiva más baja que la del “Impuesto Unificado” afirmado por la Demandada. Aparte de estos argumentos, sin embargo, los Demandantes “se comprometen a pagar cualesquiera impuestos sobre un laudo que legalmente sean debidos en la jurisdicción apropiada, cuando y donde se deban”.

56. Los Demandantes además sostienen que sus daños también se extienden a otros menoscabos directos que son el resultado directo de la demora, tales como los costos desperdiciados del litigio ante los tribunales ecuatorianos así como los costos de este arbitraje. Finalmente, los Demandantes niegan la posibilidad de riesgo de doble indemnización en caso de que por el mismo monto se dicte tanto una sentencia por los tribunales ecuatorianos como un laudo en este arbitraje.

3. Argumentos de la Demandada

57. Sujeto a mayor detalle que se encuentra en el Laudo Parcial en relación con cada asunto en particular, los argumentos de la Demandada sobre el fondo se pueden resumir de la siguiente manera.
58. La Demandada argumenta que la denegación de justicia es una acusación grave según el derecho internacional y que de acuerdo con el derecho internacional existe una presunción sobre la corrección de la conducta del poder judicial de un Estado. La Demandada argumenta que para que una demora constituya una denegación de justicia, ésta debe representar una negativa a juzgar, algo que los Demandantes no han probado respecto de los siete casos de TexPet. Los Demandantes no han demostrado la existencia de un rechazo directo o

interferencia en sus casos judiciales o que hayan sido tratados de manera diferente a otros litigantes.

59. La Demandada además argumenta que no hay una cantidad automática de demora que constituya una denegación de justicia y que las demoras experimentadas por TexPet no sobrepasaban el umbral de la denegación de justicia. La totalidad de las circunstancias, incluyendo el hecho de que TexPet es una empresa en lugar de una persona física, que no hay derechos fundamentales en juego, que los casos son tanto de hecho como legalmente complejos, y que TexPet ha demostrado una falta de diligencia en hacer avanzar sus casos, abogan en contra de que se determine la existencia de demora indebida.
60. La Demandada además resalta la existencia de un enorme número de casos atrasados que ha plagado los tribunales ecuatorianos desde 1990. Estos retrasos, combinados con la propia falta de TexPet en hacer avanzar sus casos, explican y excusan los retrasos sufridos por TexPet. Contrariamente a los argumentos de los Demandantes, la jurisprudencia sólo establece que el trabajo atrasado no proporciona una defensa cuando el tiempo es esencial y las medidas tomadas para aliviar el trabajo atrasado resultan en vano o inefectivas. Por el contrario, el Ecuador llevó a cabo reformas judiciales significativas y eficaces en los últimos 15 años para contrarrestar el trabajo atrasado y TexPet no puede reclamar ningún daño que el interés anterior a la sentencia no vaya a compensar.
61. La Demandada argumenta que los Demandantes no han presentado argumentos de que hayan sufrido decisiones “incompetentes” o “injustas” en sus casos, ni han demostrado que alguna de las decisiones impugnadas pudieran llegar al nivel de un ilícito internacional. Para justificar una denegación de justicia conforme al derecho internacional, no es suficiente con demostrar una aplicación incorrecta de la legislación nacional. El incumplimiento de la ley municipal tiene que ser tan excepcionalmente escandaloso o terriblemente grave que pueda inferirse mala fe.
62. Según la Demandada, los Demandantes no pueden demostrar que las decisiones atacadas ni si quiera son incorrectas conforme al derecho ecuatoriano, y mucho menos que están fuera de lo jurídicamente posible. Respecto de la desestimación con base al abandono, no hubo aplicación retroactiva. El periodo de abandono de dos años ya había estado en vigor como

parte de la Ley de 1997 que Modifica la Ley Orgánica de la Función Judicial, la cual como ley “orgánica” y “especial” que aplica a los casos de primera instancia de la Corte Suprema, tiene prioridad sobre cualquier disposición incongruente del Código de Procedimiento Civil. La Demandada también cita un número de sentencias que ha presentado en este arbitraje sobre este punto y declara que la simple existencia de otras sentencias aplicando las reglas de abandono ecuatorianas de la misma manera, prueba que la desestimación cae dentro de lo jurídicamente posible.

63. Las desestimaciones por prescripción tampoco son del todo incorrectas ni injustas. Los casos de TexPet caen dentro de la categoría de “acciones especiales” de acuerdo con la naturaleza pública de las disputas que surgen de la Ley de Hidrocarburos ecuatoriana y del hecho de que los casos se realizan por “procedimientos orales sumarios”. Como no existe una categoría clara de “acción especial” dentro de la cual se encuentren los casos de TexPet, el juez tuvo que determinar período de prescripción aplicable por analogía. El juez por tanto aplicó la regla de prescripción de dos años que aplica a los “proveedores” (y no sólo a “pequeñas ventas al por menor”), y la cual es congruente con los períodos de prescripción generalmente cortos en los “procedimientos orales sumarios” y los casos contra el gobierno.
64. La Demandada reclama que las reclamaciones de los Demandados de acuerdo con los estándares específicos de protección del TBI se encuentran completamente incluidas dentro de su reclamación por denegación de justicia. Estas disposiciones no crean obligaciones distintas de la prohibición general de denegación de justicia conforme al derecho internacional. En este caso, la falta de agotamiento de los recursos locales evita cualquier reclamación basada en la mala administración de justicia o en la violación de la obligación de establecer un sistema justo. Por lo tanto, la reclamación por denegación de justicia fracasa y las reclamaciones conforme al TBI deben fracasar también.
65. Más específicamente, la Demandada afirma que el artículo II(7) del TBI de ninguna manera reduce el umbral en comparación con la denegación de justicia en el derecho internacional consuetudinario y, en cualquier caso, sólo garantiza “atributos del sistema” o protege contra la interferencia extrema del Estado de sede en los procedimientos judiciales. Los Demandantes tampoco han probado que los tribunales ecuatorianos incumplieran los

estándares de “tratamiento justo y equitativo” y “protección y seguridad plenas” de acuerdo con el artículo II(3)(a). En el momento en que los Demandantes realizaron sus inversiones, estaban bien al tanto de la congestión judicial y de que un proceso contencioso nacional podría durar 20 años. Además, el poder judicial ecuatoriano ha mejorado infinitamente desde entonces. Por último, respecto del alegado incumplimiento de la prohibición de “medidas arbitrarias o discriminatorias” conforme al artículo II(3)(b), la Demandada sostiene que los Demandantes no han probado la existencia de un tratamiento distinto en comparación con otros litigantes en situaciones similares ante los tribunales ecuatorianos.

66. De acuerdo con la Demandada, los Demandantes no han proporcionado pruebas para sus reclamaciones sobre el acuerdo de inversión propuestas, formuladas éstas como nuevas “reclamaciones combinadas” por incumplimiento de contrato conforme al derecho interno combinado con una denegación de justicia conforme al derecho internacional consuetudinario, ni mucho menos una explicación convincente de cómo estas reclamaciones difieren de su reclamación de denegación de justicia. Como tal, las reclamaciones deben fracasar por las mismas razones que sus reclamaciones de denegación de justicia. A pesar de esto, la Demandada sostiene que de hecho, las reclamaciones, tal y como están formuladas ahora, ya fueron rechazadas por el Laudo Interino del Tribunal.
67. Con respecto a las varias reclamaciones basadas en el TBI, la Demandada sostiene que todas ellas requieren de un hallazgo básico de denegación de justicia según el derecho internacional consuetudinario. Según la Demandada, una denegación de justicia, como una condena al poder judicial de un Estado como un todo, no puede surgir a menos que los recursos locales se hayan agotado. Sin el agotamiento, las reclamaciones por denegación de justicia de los Demandantes carecen del elemento esencial de la finalidad para establecer la Responsabilidad del Estado por los actos de su poder judicial.
68. En el presente caso, dos de los siete casos judiciales ecuatorianos han sido apelados ante el máximo tribunal. Sin embargo, las otras cinco de las siete presentes reclamaciones de los Demandantes están basadas solamente en los actos de los tribunales ecuatorianos de primera instancia y los Demandantes no han aprovechado los diferentes recursos procesales disponibles a su alcance, incluyendo “audiencias en estrado”, escritos de conclusiones,

acciones disciplinarias contra los jueces, mociones de recusación de los jueces, y demandas civiles contra los jueces. Las reclamaciones por demora indebida no están eximidas del requerimiento de la finalidad siempre que exista un potencial recurso contra la demora. En el presente caso, los Demandantes no sólo no buscaron los recursos disponibles, sino que se limitaron a hacer lo mínimo para mantener sus reclamaciones candentes.

69. Según la Demandada, la aseveración de los Demandantes de que estos recursos serían (o habrían sido) inútiles es falsa. Se presume que los recursos son eficaces y un demandante no está exento de buscar recursos disponibles porque espera como resultado una injusticia o porque son recursos “indirectos” para la demora. Además, los Demandantes alegan que su denegación de justicia se habría consumado antes de que la pretendida “crisis judicial” ecuatoriana surgiese. La “crisis judicial” es por lo tanto irrelevante. Además, los Demandantes han admitido que ninguna de las acciones del Gobierno del Ecuador durante ese periodo fueron dirigidas específicamente a TexPet y a sus casos. Pese a esto, las alegadas reclamaciones sobre la inutilidad debido a la falta de independencia judicial no resisten el examen de los hechos. La comunidad internacional ha reconocido la imparcialidad, independencia y la capacidad profesional de la Corte Suprema del Ecuador en muchas ocasiones posteriores al rechazo y el reemplazo de los jueces que constituye la base del argumento de la inutilidad afirmado por los Demandantes.
70. Según los principios de buena fe y *estoppel*, la Demandada argumenta que debería impedirse a los Demandantes que aleguen ahora esa conducta inapropiada por parte de los tribunales ecuatorianos o la inutilidad de seguir intentando ejercitar recursos contra estos. Según la Demandada, con el fin de apoyar la adecuación de los tribunales ecuatorianos en conexión con el caso *Aguinda*, los Demandantes presentaron alegatos y declaraciones juradas dando fe de la imparcialidad y competencia de los tribunales ecuatorianos, en directa contradicción con los demandantes de *Aguinda* y un Informe del Departamento de Estado de los EE.UU. criticando el sistema judicial ecuatoriano. Los Demandantes además se apoyaron en la decisión de *Aguinda* sustentando la desestimación de *Doe c. Texaco, Inc.* – después de presentar la notificación de intención de iniciar las presentes reclamaciones. Cuando los Demandantes tomaron esta posición en el litigio de *Aguinda*, eran conscientes de los veinte años de trabajo atrasado de casos en los tribunales ecuatorianos y los siete casos subyacentes

a la presente reclamación fueron citados específicamente por los Demandantes como evidencia de la equidad de los tribunales ecuatorianos. La Demandada por lo tanto sostiene que debido a sus declaraciones contradictorias, debe impedirse a los Demandantes que actúen en contra de sus propios actos. Alternativamente, el cambio total de opinión de los Demandantes está motivado por fines posteriores relacionados con una estrategia de litigio global en torno a su defensa en los casos *Lago Agrio* y *Aguinda* contra ellos. El abuso de estos casos para sustentar una demanda arbitral – desconectada de cualquier deseo legítimo de tener éxito ante los tribunales ecuatorianos en las reclamaciones subyacentes – constituye un abuso de proceso que imposibilita las reclamaciones relacionadas con la adecuación del poder judicial ecuatoriano.

71. La Demandada además argumenta que en un caso de denegación de justicia, la pérdida es la perdida por los demandantes de la oportunidad de que sus casos se hubiesen decidido ante el poder judicial local. En consecuencia, el Tribunal no puede simplemente adoptar su propia interpretación de los Acuerdos de 1973 y 1977. El Tribunal debe determinar qué hubiera hecho un tribunal ecuatoriano, aplicando el derecho ecuatoriano, en estos casos. Conforme a lo anterior, la Demandada argumenta que los Demandantes no han y no pueden cumplir con su carga de la prueba de demostrar que es más probable que improbable que hubieran vencido en sus casos ante los tribunales ecuatorianos. Además, incluso si los Demandantes pueden probar que hubiesen vencido ante los tribunales ecuatorianos, el Tribunal debería emplear el principio de la “pérdida de oportunidad” para adjudicar sólo los daños correspondientes a la probabilidad de éxito de que TexPet sí hubiese vencido sobre el fondo de sus casos ante los tribunales ecuatorianos. Finalmente, los Demandantes tienen la obligación de mitigar sus daños en los siete casos y han fracasado al no intentar activamente hacer avanzar sus casos y agotar los recursos locales.
72. La Demandada se opone de forma general al fondo de las siete reclamaciones judiciales de TexPet en este arbitraje. La Demandada argumenta que las reclamaciones malinterpretan las respectivas obligaciones de TexPet y del Ecuador bajo el Acuerdo de 1973 y el derecho ecuatoriano, y que cualquier referencia al Acuerdo de 1977 es totalmente inapropiada. En los casos subyacentes, TexPet y el Ecuador disienten sobre sus respectivas obligaciones respecto del crudo residual del proceso de refinación, en particular sobre si la Demandada tenía

derecho a exportarlo sin compensar a TexPet con el precio del mercado internacional o reconociendo a TexPet los barriles equivalentes de crudo contra sus obligaciones de mercado interno. La Demandada sostiene que los argumentos de TexPet malinterpretan de manera fundamental sus obligaciones de contribución conforme al Acuerdo de 1973. Por lo tanto, el Ecuador habría debidamente vencido en esos casos. Como mínimo, existía una controversia real que debía ser procesada y los Demandantes no pueden probar con ningún grado de certeza que ellos habrían vencido.

73. Según la Demandada, el Acuerdo de 1973 apenas consagra el régimen general de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos de 1971, la cual establecía para las empresas contratantes una obligación general, sin restricciones e ineludible, de suministrar crudo a las refinerías del país y permitía a los contratistas explotar las reservas de crudo del Ecuador y exportar sus participaciones de crudo para su beneficio, pero sólo después de que las necesidades del país se hubiesen satisfecho primero. En particular, el Acuerdo de 1973 le daba al Ecuador el derecho a requerir una contribución “de cualquier volumen de petróleo crudo que fuese necesario para la producción de derivados destinados al consumo interno del país”.
74. En 1977, el Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos del Ecuador insistía sobre una expansión de la exploración y producción del Consorcio que requeriría un incremento significativo de la inversión de TexPet. Por ello, TexPet y el Ecuador iniciaron negociaciones en el contexto del Programa de Trabajo Anual del Consorcio de 1978. Según la Demandada, TexPet apalancó su compromiso de expandir sus actividades e inversiones para obtener mejoras significativas más allá del Acuerdo de 1973. En particular, TexPet buscaba establecer que debía obtener un crédito contra sus demandas de consumo interno por cualquier producto exportado, en lugar de solamente para el crudo exportado. Aunque las negociaciones se centraron en el Programa de Trabajo Anual de 1978, lo que normalmente no se habría establecido contractualmente, el resultado fue presentar un contrato, es decir, el Acuerdo de 1977. Esto se realizó para exigir a TexPet su compromiso de incrementar su inversión y su ámbito de operaciones. A pesar de su forma contractual, la Demandada cita los documentos internos de TexPet y las cartas al Ministerio ecuatoriano que reconocen que el Acuerdo de 1977 sólo tenía la intención de ser un programa de trabajo de un año que establecía solamente para dicho año los “nuevos parámetros económicos” para las

operaciones de TexPet. Por lo tanto, de acuerdo con la Demandada, para el periodo del programa de trabajo de un año, el Acuerdo de 1977 cambió la definición anterior conforme al Acuerdo de 1973 desde una refinación local a un consumo local.

75. El periodo de un año del Acuerdo de 1977 queda evidenciado por las numerosas referencias a un “periodo anual”, un periodo de “12 meses”, y a actividades que fueron estipuladas que se desarrollarían dentro del periodo de un año. Esas referencias abarcan todas las secciones del acuerdo y del Anexo. Sólo la sección titulada “Petróleo destinado para el Consumo Interno” no contiene una referencia explícita. La Demandada alega, sin embargo, que no era posible que una sección del Contrato pudiese tener un término diferente a menos que dicho resultado estuviese expresamente establecido. Finalmente, el Programa de Trabajo de 1978 llegó a su fin y las negociaciones no lograron renovarlo. Así, el Ecuador promulgó una Resolución Ministerial cancelando el Acuerdo de 1977 y reestableciendo el Acuerdo de 1973 para el 1979 y en adelante. Cuando dicha resolución fue aplicada de forma retroactiva al año cubierto por el Acuerdo de 1977, TexPet presentó una queja ante el Ministerio. Sin embargo, TexPet no cuestionó la validez de la nueva resolución presentada, ni tampoco alegó un incumplimiento del Acuerdo de 1977. Ni siquiera en los casos subyacentes se alegó un incumplimiento directo del Acuerdo de 1977, sólo que era un medio suplementario de interpretación para el Acuerdo de 1973. Dado que el Acuerdo de 1977 no fue relevante en las reclamaciones subyacentes, las alegaciones de los Demandantes de que la invalidez del Acuerdo de 1977 no se planteó hasta que este proceso de arbitraje fue iniciado, son equívocas.
76. En las reclamaciones de la Refinería Esmeraldas (Caso 23-91 y 152-93), y las reclamaciones de la Refinería Amazonas (Casos 7-92 y 153-93), la Demandada objetaba a las reclamaciones de TexPet de que éste había contribuido con crudo en exceso conforme a sus obligaciones de mercado interno cuando el residuo del proceso de refinación estaba mezclado con diesel y era subsiguientemente exportado. La Demandada argumenta que todo el crudo recibido y procesado en las refinerías era necesario para generar suficiente producto refinado para satisfacer las necesidades de consumo interno del país, y que cualquier residuo resultante pertenecía al Ecuador para disponerlo como desease. La Demandada insiste en que, aunque el Acuerdo de 1973 permanece silencioso respecto del residuo del proceso de refinación, de

ninguna manera requiere que la República pague un precio internacional por el residuo que es un sub-producto necesario de la producción de petróleo refinado para el consumo interno. Si el crudo era “necesario para la producción de derivados para el consumo interno del país”, el crudo debía ser suministrado al precio doméstico.

77. Según la Demandada, el Acuerdo de 1977, si fuese interpretado tal y como lo sugieren los Demandantes, violaría las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos del Ecuador y, en consecuencia, no sería ejecutable. El derecho ecuatoriano también establece formalidades estrictas a las que hay que adherirse para crear un contrato ejecutable con el Gobierno, en particular en el sector de los hidrocarburos. Por lo tanto, el Acuerdo de 1977 también estaría en conflicto con el derecho ecuatoriano y no sería ejecutable si pretendiese ser un “acuerdo de inversión” a largo plazo en lugar de simplemente un programa de trabajo anual. La Demandada además cita la decisión a favor del Ecuador en el segundo caso de la refinería del Amazonas (Caso 153-93), emitido después de que los Escritos pos-audiencia de las Partes fuesen presentados.
78. En el caso de los Productos Importados (Case 154-93), la Demandada en primer lugar rechaza la reclamación en base a que la Cuenta OPAH era simplemente un mecanismo contable, no la base para requerir el crudo, lo cual en cambio se hacía basándose en las proyecciones de refinación y consumo reales y las disposiciones expresas del Acuerdo de 1973. En segundo lugar, los productos refinados importados eran suministrados directamente por el Gobierno a los minoristas tras la importación, ni CEPE/PetroEcuador ni las refinerías recibieron nunca ningún producto importado ni hicieron ninguna venta de productos importados a los minoristas. En tercer lugar, TexPet no tenía derecho a que se le acreditara el beneficio de los ingresos de los vendedores al por menor porque el crudo exportado ya se había comprado a TexPet como parte del sistema del Crudo de Compensación. En general, la Demandada sostiene que la premisa fundamental de la reclamación de los Productos Importados de los Demandantes es la proposición de que la importación de los productos derivados para el consumo interno iba a estar financiada con recursos diferentes a los de TexPet y a los del suministro de Crudo de Compensación al precio de mercado interno rebajado por otros productores. Esto iría claramente en contra de las disposiciones expresas del Acuerdo de 1973, la Ley de Hidrocarburos de 1971, y otras disposiciones del derecho

ecuatoriano. La Demandada también señala la reciente sentencia del Juzgado Provincial de Pichincha en el caso de los Productos Importados (Caso 154-93) como evidencia de que las reclamaciones de TexPet son infundadas.

79. La Demandada también rechaza el fondo del caso de Fuerza Mayor (Caso 8-92). Durante el periodo de fuerza mayor, se requirió a los productores que entregaran cualesquiera cantidades de petróleo que pudieran entregar a través de un oleoducto alternativo. Sin embargo, esta cantidad era mucho menor de la necesaria para satisfacer el consumo interno. En su reclamación, TexPet alegó que su obligación de contribuir con crudo para el consumo interno era contingente a su propia producción de crudo y, por lo tanto, alegó que su propia capacidad reducida durante el periodo de fuerza mayor conllevó una reducción concomitante en sus contribuciones requeridas. La Demandada alega que en ningún lugar existe apoyo para establecer que las obligaciones de contribución de TexPet son condicionales. Este argumento contradice directamente la cláusula 19 del Acuerdo de 1973 y el artículo 30 de la Ley de Hidrocarburos, que establece que la exportación de petróleo por TexPet sólo estará autorizada “una vez satisfechas las necesidades del país”. Además, el argumento de que esto constituyó un requerimiento “retroactivo” del crudo ignora la discreción concedida al Ministerio para requerir crudo cuando lo juzgue “necesario”.
80. La Demandada además argumenta que esta obligación absoluta de contribución tampoco se ve frustrada por la doctrina de fuerza mayor conforme a la legislación ecuatoriana. Según la Demandada, conforme a la legislación ecuatoriana, la doctrina de fuerza mayor simplemente aplaza el deber de TexPet de contribuir al consumo interno, pero no elimina la obligación en sí misma. La Demandada argumenta que la conducta de las partes respecto del Acuerdo de 1973 posterior al periodo de fuerza mayor confirma esta interpretación respecto de las obligaciones de TexPet tras el terremoto y la conducta de TexPet, de hecho, equivale a una renuncia conforme al derecho ecuatoriano que prevendría la indemnización a TexPet en cualquier caso.
81. Respecto del caso de Refinanciación (Caso 983-03), la Demandada sostiene que no estaba obligada a pagar interés por su pago tardío durante el periodo de fuerza mayor. En una fase de apelación posterior, la Demandada también sostuvo que el juez sentado en el Juzgado

Primero de lo Civil en Pichincha no tenía jurisdicción sobre el caso porque, conforme a la Ley de Hidrocarburos de 1971, el Ministro de Energía y Minas es el juez de Hidrocarburos Especial con jurisdicción originaria para decidir todas las controversias que puedan surgir como resultado de la aplicación de la Ley de Hidrocarburos. La Demandada observa, sin embargo, que los Demandantes han ganado ese caso y, contrariamente a sus reclamaciones respecto de los obstáculos técnicos, nada les impide el cobro de la sentencia.

82. Volviendo al tema de los daños, la Demandada rechaza la suposición de los Demandantes de que conforme a una teoría de denegación de justicia, los daños serían automáticamente iguales a los daños reclamados por TexPet en las acciones subyacentes. La Demandada alega que los análisis del Sr. Borja realizados como perito de los Demandantes en los casos de los tribunales ecuatorianos carecen de independencia y toman como premisa suposiciones legales incorrectas. Los Peritos de Valuación de la Demandada también han identificado varias deficiencias en la evaluación de los Demandantes realizada por Navigant. Con respecto a las reclamaciones de las Refinerías de Esmeraldas y del Amazonas, los peritos de la Demandada principalmente critican el hecho de que los cálculos de los Demandantes están basados en el volumen total de residuo producido en las refinerías en lugar del volumen de residuos que en realidad se exportó.
83. La Demandada también sostiene que los Demandantes han cometido múltiples errores en sus cálculos de interés. Primero, conforme a la legislación ecuatoriana los Demandantes no tienen derecho a los intereses devengados antes del inicio de las acciones judiciales. Cuando en un contrato no se prevé el interés moratorio, una parte no es responsable de abonar ese interés hasta que sea puesta en mora por medio de una demanda. Segundo, la aplicación de la Tasa Activa Referencial para el periodo 1995-2004, es inapropiada, porque dicha tasa está diseñada específicamente para obligaciones contraídas en Suces. De manera similar, la Demandada rechaza el uso de la tasa de interés arbitraria escogida por los peritos de los Demandantes para el periodo que transcurre a partir de 2004 hasta la fecha. En ausencia de riesgos particulares, no existe motivo para utilizar una tasa más alta que una tasa libre de riesgos como la tasa preferencial de Nueva York. Como mucho, debería utilizarse el costo histórico de la deuda de TexPet, el cual compensaría por completo el costo de oportunidad de no tener en posesión el alegado lucro cesante. Por último, los Demandantes no tienen derecho

a un interés compuesto dado que el interés compuesto está prohibido en la legislación ecuatoriana, que está aceptado que gobierna los Acuerdos de 1973 y 1977. En cualquier caso, salvo en casos excepcionales que comúnmente se relacionan con demandas por expropiación, el interés simple sigue siendo la norma en el arbitraje de tratados de inversión.

84. La Demandada también observa que los Demandantes no ajustaron para imposición tributaria los ingresos que TexPet habría tenido que pagar por la exportación de los supuestos barriles contribuidos en exceso. El estándar de la indemnización íntegra previsto en el derecho internacional requiere que se reponga a los Demandantes en la situación que hubiera prevalecido en caso de no haber ocurrido la denegación de justicia. Queda claro que, si la Demandada hubiese actuado conforme al Acuerdo de 1973 como los Demandantes argumentan que debió hacer, se hubieran deducido impuestos con el completo conocimiento y consentimiento de TexPet. Los ingresos de los Demandantes habrían estado sujetos al Impuesto Unificado sobre hidrocarburos a una tarifa del 87,31%. La Demandada además observa que las obligaciones fiscales de TexPet eran también obligaciones contractuales según el Acuerdo de 1973. Además, ningún tribunal ecuatoriano habría dejado de considerar la situación fiscal en su sentencia. Finalmente, dictar una sentencia que no deduce impuestos, en realidad otorgaría a los Demandantes una enorme ganancia inesperada de la cual no habrían disfrutado ni aunque toda su teoría sobre el caso fuese aceptada.
85. La Demandada por lo tanto solicita al Tribunal que deduzca el 87,31% del monto que de otro modo habría adjudicado teniendo en cuenta los impuestos. Alternativamente, la Demandada solicita al Tribunal que disponga que una primera parte de cualquier Laudo (12,69%) sería directamente pagadera a TexPet y una segunda parte (87,31%) correspondiente a la responsabilidad fiscal, sería pagadera al Servicio de Rentas Internas (SRI) del Ecuador como fidecomiso para que TexPet satisfaga sus obligaciones tributarias.
86. Finalmente, la Demandada también rechaza la reclamación de “gastos legales desperdiciados” por el litigio ante los tribunales del Ecuador, y presenta inquietudes sobre la posibilidad de una doble indemnización. La Demandada argumenta que los Demandantes habrían incurrido sus supuestos “gastos legales desperdiciados” aun en ausencia de la alegada denegación de justicia. La Demandada señala que también es posible que las decisiones

favorables a TexPet se dicten en los tribunales después de que el Tribunal dicte un laudo, con el consiguiente riesgo de una doble indemnización.

4. El Laudo Parcial del Tribunal sobre el Fondo

87. El Tribunal emitió su Laudo Parcial sobre el Fondo el 30 de marzo de 2010. A la vista de los razonamientos expuestos en el laudo, el Tribunal decidió lo siguiente:

- 1. Del Laudo Interino del 1 de diciembre de 2008, el Tribunal recuerda las siguientes decisiones:**
 - 1. Las objeciones de la Demandada son desestimadas.**
 - 2. El Tribunal dispone de jurisdicción respecto a las demandas tal como las formularon los Demandantes en su segundo Escrito pos-audiencia con fecha del 12 de agosto de 2008 en el párrafo 116.**
- 2. La Demandada incumplió el artículo II(7) del TBI debido a una demora indebida por parte de los tribunales de Ecuador en dictar sentencia sobre siete casos presentados por TexPet, y es responsable por los daños resultantes que afectan a los Demandantes debido a ello.**
- 3. Los Demandantes no han cometido un abuso del proceso y no existe impedimento para que presenten esta reclamación contra la Demandada.**
- 4. En vista del fallo del Tribunal en la anterior sección 2 en cuanto al incumplimiento del artículo II(7) del TBI, y dado que la indemnización solicitada por los Demandantes con respecto a las reclamaciones adicionales no va más allá de la indemnización derivada de la reclamación sobre el artículo II(7), el Tribunal no requiere emitir un fallo sobre las reclamaciones de los Demandantes sobre otros incumplimientos del TBI o del derecho internacional consuetudinario.**
- 5. Como resultado de la decisión del Tribunal en la anterior sección 2 sobre que la Demandada ha incumplido el artículo II(7) del TBI, la Demandada es responsable de los daños causados a los Demandantes por tal incumplimiento. El total de estos daños se decidirá por el Tribunal con la ayuda de un procedimiento dispuesto separadamente en una Orden Procesal del Tribunal para determinar qué impuestos, de existir, habrían sido debidos a la Demandada si no hubiera ocurrido el incumplimiento del artículo II(7) del TBI.**

- 6. La Demandada es responsable del pago del interés compuesto anterior al laudo conforme a la Tasa Preferencial de Nueva York (anual) sobre el monto final a ser pagado por la Demandada de conformidad con la anterior sección 5, desde el 22 de diciembre de 2006 y hasta la fecha en que este monto sea pagadero por la Demandada.**
- 7. La Demandada será responsable del pago de un interés compuesto después del fallo conforme a la Tasa Preferencial de Nueva York (anual) sobre el monto fijado por el Tribunal, desde la fecha en que éste ordene el pago a la Demandada hasta la fecha en que dicho pago se realice.**
- 8. El fallo relativo a los costos del arbitraje se difiere a una etapa posterior de este procedimiento.**
- 9. Se rechazan las demás reclamaciones.**

C.III. La Fase de la Cuantía

88. Las cuestiones que surgen en la presente fase del procedimiento se centran en la determinación de la cuantía de los daños a adjudicar a los Demandantes como cálculo de la pérdida real de los Demandantes, teniendo en cuenta la legislación tributaria ecuatoriana aplicable. Para determinar la cuantía que debe ser adjudicada, el Tribunal invitó a los peritos nombrados por las partes a intentar alcanzar un acuerdo sobre la cuantía, de existir, que debería ser descontada del total establecido en el párrafo 549 del Laudo Parcial con base en cualquier legislación fiscal ecuatoriana aplicable, a la luz de los principios establecidos en el Laudo Parcial.
89. Los peritos nombrados por las partes emitieron su Informe Pericial Conjunto el 20 de octubre de 2010, concluyendo que el 87,31% del Impuesto Unificado es el impuesto aplicable sobre la cuantía correspondiente a los “Daños Directos” y que el 25% del Impuesto a la Renta es aplicable a la cuantía de “Intereses”, puesto que esta era la legislación tributaria aplicable en el momento en que los incumplimientos tuvieron lugar y en la fecha en que la Notificación de arbitraje fue presentada. Adjunto al mismo Informe Pericial Conjunto, el Dr. Javier Cordero Ordóñez, el perito designado por la Demandada, emitió una Opinión Individual declarando que los “Daños Directos” efectivos sólo ascenderían a 44.993.428,60 USD como monto neto después de la aplicación del 87,31% del Impuesto Unificado a los ingresos petroleros de TexPet y no al monto bruto de 354.558.145 USD. El Dr. Cordero complementó su Opinión Individual el 26 de octubre de 2010, declarando que el valor de los Daños Directos que TexPet habría recibido habría sido sólo el 12,69% de los valores indicados en el párrafo 549 en el Laudo Parcial, reduciendo por lo tanto en un 87,31% la base sobre la que se calcula el interés simple es calculado y posteriormente sujeto a imposición en un 25%.

D. Antecedentes Procesales

90. Por medio de una Notificación de arbitraje de 21 de diciembre de 2006, Chevron y Texaco iniciaron el presente procedimiento de arbitraje contra el Ecuador en virtud del artículo VI(3)(a)(iii) del TBI. El artículo VI(3)(a)(iii) del TBI dispone que las diferencias que surjan conforme al Tratado pueden someterse a un tribunal arbitral constituido en virtud del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.
91. La Notificación de arbitraje presenta una controversia que se dice haber surgido de siete casos comerciales contra el Ecuador presentados por TexPet ante los tribunales ecuatorianos entre 1991 y 1994. Estas demandas surgen de alegaciones de incumplimientos contractuales respecto de la compensación debida a TexPet conforme al Acuerdo de 1973 y al Acuerdo de 1977 respectivamente.
92. Los Demandantes alegan que los tribunales han rehusado decidir sus casos a causa de prejuicios en contra de ellos y a favor de la Demandada. Los Demandantes alegan que esto constituye una violación de las obligaciones del Ecuador en virtud del TBI.
93. El 16 de enero de 2007, los Demandantes nombraron al honorable Charles N. Brower como árbitro.
94. Según carta de 26 de febrero de 2007 al SG-CPA, los Demandantes solicitaron formalmente que el SG-CPA designara una autoridad nominadora dado que la Demandada no había nombrado un árbitro dentro del plazo de treinta días otorgado en el artículo 7(2) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Mediante carta de 2 de marzo de 2007, el SG-CPA invitó a la Demandada a presentar sus comentarios respecto de la solicitud para la designación de una autoridad nominadora antes del 16 de marzo de 2007. No se presentaron comentarios por la Demandada. El 20 de marzo de 2007 el SG-CPA designó al Dr. Robert Briner como autoridad nominadora.

95. Mediante carta de 21 de marzo de 2007, los Demandantes solicitaron que el Dr. Briner, en su capacidad de autoridad nominadora, nombrara al segundo árbitro en nombre de la Demandada.
96. Mediante carta de 26 de marzo de 2007, la Demandada nombró al profesor Albert Jan van den Berg como segundo árbitro. Mediante carta de 13 de abril de 2007, el Dr. Briner informó a las Partes de que aun no había podido realizar ningún nombramiento en nombre de la Demandada en su capacidad de autoridad nominadora y consideró que el asunto se había vuelto irrelevante.
97. Mediante carta de 8 de mayo de 2007, los dos árbitros nombrados por las Partes confirmaron, con el consentimiento de las Partes, su nombramiento del profesor Dr. Karl-Heinz Böckstiegel como Árbitro Presidente.
98. El 22 de mayo de 2007, el recientemente constituido Tribunal emitió la OP I, entre otras cosas, permitiendo a la Demandada presentar una breve Respuesta a la Notificación de arbitraje antes del 30 de junio de 2007 y ordenando que la CPA actuara como registro en el caso. La OP I también convocó una Reunión Procesal que tendría lugar en La Haya el 2 de agosto de 2007.
99. Mediante carta de 13 de junio de 2007, la Demandada solicitó que la fecha límite para la presentación de la Respuesta a la Notificación de arbitraje se prorrogara hasta por lo menos el 27 de agosto de 2007 y que la Reunión Procesal se pospusiera hasta por lo menos el 17 de septiembre de 2007. Mediante carta de 15 de junio de 2007, el Tribunal invitó a los Demandantes a comentar las solicitudes de la Demandada. Mediante carta de 20 de junio de 2007, los Demandantes expresaron su opinión de que el procedimiento debería seguir el calendario fijado en la OP I y de que se rechazaran las solicitudes de la Demandada. Mediante carta de 25 de junio de 2007, el Tribunal prorrogó la fecha límite para la presentación de la Respuesta a la Notificación de arbitraje hasta el 27 de agosto de 2007 y pospuso la Reunión Procesal hasta el 2 de octubre de 2007.
100. Mediante carta de 20 de agosto de 2007, los abogados recientemente nombrados por la Demandada informaron al Tribunal de un acuerdo entre las Partes sobre un calendario para el

procedimiento, incluyendo una prórroga adicional de la fecha límite para la presentación de la Respuesta a la Notificación de arbitraje hasta el 28 de septiembre de 2007. El Tribunal admitió el acuerdo entre las Partes y cambió la fecha para la presentación de la Respuesta a la Notificación de arbitraje hasta el 28 de septiembre de 2007, con los demás detalles del calendario quedando como tema para discusión en la Reunión Procesal. Mediante carta de 17 de septiembre de 2007, el Tribunal distribuyó un Orden del Día con Anotaciones para la reunión. Mediante carta de 26 de septiembre de 2007, los Demandantes comunicaron otro acuerdo entre las Partes respecto del calendario del procedimiento.

101. La Reunión Procesal tuvo lugar en La Haya el 2 de octubre de 2007. El 9 de octubre de 2007, la CPA distribuyó, en nombre del Tribunal, un Borrador de OP II a las Partes solicitando sus comentarios.
102. Acusando recibo de los comentarios de las Partes sobre el borrador, el Tribunal emitió la OP II el 19 de octubre de 2007, ordenando, entre otras cosas, que el inglés y español serían los idiomas oficiales del arbitraje (con el inglés siendo entre ellos el idioma que tendría autoridad), que el lugar del arbitraje sería La Haya, Países Bajos, y que la Audiencia sobre la jurisdicción tendría lugar en San José, Costa Rica. La OP II también estableció el calendario del procedimiento, tomando en cuenta los acuerdos previos de las Partes y las discusiones que tuvieron lugar en la Reunión Procesal del 2 de octubre de 2007. Para mayor facilidad, las disposiciones pertinentes de la OP II se reproducen por completo a continuación:

Esta Orden Procesal No. 2 registra los resultados de la discusión y del acuerdo entre las Partes y el Tribunal en la 1ª Reunión Procesal que tuvo lugar el día martes, 2 de octubre de 2007, en la Pequeña Sala de Justicia del Palacio de la Paz de La Haya, Países Bajos:

1. Reunión Procesal

- 1.1 Los nombres de todos los participantes en la reunión han sido mencionados anteriormente y en lo sucesivo, están indicados en las secciones 1.2 y 1.3.

La representación de las Partes en la Reunión Procesal fue la siguiente:

Demandantes

Sr. R. Doak Bishop (King & Spalding)
Dr. Alejandro Ponce Martínez (Quevedo & Ponce)
Sr. Wade M. Coriell (King & Spalding)
Dra. Ana Belén Posso (Quevedo & Ponce)
Sra. Deborah Scott (Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company)
Sr. Ricardo Reis Veiga (Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company)

Demandada

Sr. Eric W. Bloom (Winston & Strawn LLP)
Sr. Ricardo E. Ugarte (Winston & Strawn LLP)
Sr. Mark A. Clodfelter (Winston & Strawn LLP)
Sra. Karen S. Manley (Winston & Strawn LLP)
Sr. Carlos Venegas Olmedo (República de Ecuador)
Sra. Christel Gaibor (República de Ecuador)

Los miembros del Tribunal y los otros participantes de la Reunión Procesal fueron los siguientes:

Tribunal

El honorable Charles N. Brower
El profesor Albert Jan van den Berg
El profesor Karl-Heinz Böckstiegel (Presidente)

Corte Permanente de Arbitraje

Sr. Brooks W. Daly
Sra. Rocío Digón
Sra. Evelien Pasman

Asistente Jurídico del honorable Charles N. Brower

Sr. Peter Prows

Ponentes/Intérpretes (ALTO International)

Ponentes:

Sra. Carmen Preckler Galguera
Sra. María Raquel Banos
Sra. Laura Evens
Sra. Michaela Philips

Intérpretes:

Sr. Jon Porter
Sr. Javier Ferreira Ramos
Sra. Ute Sachs

2. Fallos anteriores

- 2.1. Los fallos anteriores del Tribunal siguen siendo válidas a menos que se les modifique explícitamente. El Tribunal recuerda en particular los artículos siguientes de la Orden Procesal No. 1 e incluye todo suplemento y modificación hecho durante la Reunión Procesal:

2.2. **7. Comunicaciones**

Después de la Reunión, se ha suprimido el párrafo 7.1 de la Orden Procesal No. 1 y se ha modificado la numeración de las secciones.

- 7.1. Las Partes no comunicarán de ninguna forma con ningún miembro del Tribunal ex parte en relación con el caso del arbitraje.
- 7.2. Las Partes mandarían cada comunicación a cada miembro del Tribunal por correo electrónico y después las confirmarían por correo expreso, con copia a los abogados de la otra Parte. Si la comunicación no excede las 15 páginas, se puede confirmar por facsímil en vez de correo expreso
- 7.3. Copia de cada comunicación debe ser mandada al Registro.
- 7.4. Para facilitar citaciones y word processing, Memoriales y otras presentaciones largas tienen que estar producidos en Microsoft Word y precedidos por una Tabla de Materias.
- 7.5. Todos los documentos de las presentaciones tienen que ser entregados sin encuadernar, en carpetas de anillos y separados de los Memoriales y precedidos de un listado de documentos numerados de manera consecutiva en presentaciones posteriores (C-1, C-2 etc. para las Demandantes; R-1, R-2 etc. para la Demandada). Si posible, además, los documentos deberán estar presentados en forma electrónica (la preferencia es en Microsoft Word, sino en Adobe Acrobat).
- 7.6. Todas las comunicaciones escritas estarán consideradas como válidamente presentadas si enviadas a:
- Demandantes: a la dirección del abogado estipulada arriba.
Demandada: a la dirección estipulada arriba.
Como la Demandada ha nombrado ahora su abogado para este caso, desde ahora, las comunicaciones serán enviadas a Winston & Strawn LLP (Winston) oficinas de Nueva York y Washington DC (EE.UU.) como se ha indicado en sus cartas.
- Tribunal: a las direcciones estipuladas arriba.
Registro: a las direcciones estipuladas arriba.
- 7.7. Las Partes deben enviar copias de la correspondencia entre ellos al Tribunal solo si está relacionado a un asunto en el cual el Tribunal debe actuar en alguna forma, o tiene que estar avisado de algún acontecimiento relacionado con el caso.
- 7.8. Cada cambio de nombre, descripción, dirección, número de teléfono, número de facsímil o dirección de correo electrónico tiene que ser comunicado por la Parte o miembro del Tribunal a todos los demás destinatarios mencionados en los párrafos 1, 3 y 7.

Después de la discusión tenida durante la Reunión Procesal, se ha añadido la siguiente aclaración en materia de confidencialidad:

7.9. Cada Parte puede divulgar públicamente los informes hechos en estos debates a menos que el Tribunal hubiese decidido lo contrario. Las peticiones de tratamiento confidencial de cualquier documento comunicado en estos debates pueden ser sometidas por cada una de las Partes a la decisión del Tribunal, en cuyo caso ningún documento sometido a tal petición podrá ser divulgado públicamente a menos que el Tribunal lo decida.

2.3. 8. Idioma del arbitraje

Tras haber consultado las Partes durante la Reunión Procesal, el Tribunal determinará el idioma o idiomas que deberán utilizarse durante los debates, de conformidad con el artículo 17(1) del Reglamento CNUDMI.

Después de la discusión tenida durante la Reunión Procesal y de la presentación de ulteriores comentarios de las Partes después de la Reunión, se ha decidido lo siguiente:

8.1. El inglés y el español serán los idiomas oficiales del arbitraje y, entre estos, el inglés será el idioma que tendrá autoridad.

8.2. Las comunicaciones del Tribunal (incluso las ordenes, fallos y laudos), así como todos los informes y comunicaciones de las Partes estarán en inglés, incluso las traducciones completas de toda declaración de testigos preparada en español y las traducciones de la parte pertinente de la prueba documental y de los documentos legales que estuvieren en un idioma diferente del inglés.

8.3. Las traducciones españolas de todos los textos mencionados en el párrafo 8.2 que todavía no estuvieren en español serán sometidas o comunicadas con los textos o, lo antes posible después, pero en ningún caso después de tres semanas de su sometimiento o comunicación, excepto las traducciones españolas de cualquier laudo o escrito de alegaciones de los Demandantes sobre el fondo y el contraescrito de alegaciones de la Demandada sobre el fondo que puede ser sometido hasta seis semanas después de tal laudo o sometimiento.

8.4. Todos los debates orales serán interpretados simultáneamente y transcritos en inglés y español.

2.4. 9. Lugar del arbitraje

Tras haber consultado las Partes durante la Reunión Procesal, el Tribunal determinará el lugar de arbitraje de conformidad con el artículo 16(1) del Reglamento de la CNUDMI.

Después de la discusión tenida durante la Reunión Procesal y del sometimiento de ulteriores comentarios de las Partes por escrito, se ha decidido lo siguiente: La Haya, Países Bajos es el lugar de arbitraje.

En este contexto, se recuerda que, de acuerdo con el artículo 16.2 del Reglamento de la CNUDMI, las Audiencias pueden tener lugar en otros sitios.

3. Calendario

- 3.1. Dada la propuesta de las Partes sometida por los Demandantes, en su carta del 26 de septiembre de 2007, y la discusión tenida durante la Reunión Procesal, el calendario será el siguiente:
- 3.2. El 19 de octubre de 2007,

Escrito de demanda de los Demandantes
- 3.3. El 19 de noviembre de 2007,

Escrito de defensa de la Demandada (con todas las objeciones jurisdiccionales)
- 3.4. El 25 de enero de 2008,

El escrito de alegaciones de la Demandada en materia de jurisdicción, que deberá ser sometido junto con todas las pruebas (documentos, así como declaraciones de testigos y declaraciones de expertos, si fuese el caso) en las que desea confiar la Demandada, de conformidad con las secciones sobre la prueba indicadas más abajo.
- 3.5. El 25 de marzo de 2008,

La contramemoria de los Demandantes en materia de jurisdicción, que deberá ser sometida junto con todas las pruebas (documentos, así como declaraciones de testigos y declaraciones de expertos, si fuese el caso) en las que desean confiar los Demandantes, de conformidad con las secciones sobre la prueba indicadas más abajo.
- 3.6. El 8 de abril de 2008,

El escrito de alegaciones de los Demandantes sobre el fondo, que deberá ser sometido junto con todas las pruebas (documentos, así como declaraciones de testigos y declaraciones de expertos, si fuese el caso) en las que desean confiar los Demandantes, de conformidad con las secciones sobre la prueba indicadas más abajo.
- 3.7. El 19 de mayo de 2008,

Audiencia de un día sobre la jurisdicción; si se necesitara el examen de testigos o expertos, el Tribunal podrá prolongar esta audiencia a dos días y medio tras haber consultado las Partes; en este caso, tendrá lugar el 19-21 de mayo de 2008.
- 3.8. Lo antes posible, después de la Audiencia sobre la jurisdicción, el Tribunal decidirá sobre la manera de examinar el asunto de la jurisdicción e informará a las Partes mediante orden, laudo o bien, de otra manera.

3.9. El 22 de agosto de 2008,

El contraescrito de alegaciones de la Demandada sobre el fondo, que deberá ser sometido junto con todas las pruebas (documentos, así como declaraciones de testigos y declaraciones de expertos, si fuese el caso) en las que desea confiar la Demandada, de conformidad con las secciones sobre la prueba indicadas más abajo.

3.10. En estos debates, las Partes no prevén la necesidad de peticiones de documentos y el Tribunal, de acuerdo con esto, no toma ninguna disposición para tratar dichas peticiones en esta Orden. Cada una de las Partes puede solicitar al Tribunal, llegado el caso, un nuevo examen de este asunto.

3.11. El 24 de octubre de 2008, el escrito de alegaciones de respuesta de los Demandantes sobre el fondo con toda prueba adicional (documentos, declaraciones de testigos, declaraciones de expertos) pero sólo como prueba contraria al 1er contraescrito de alegaciones de la Demandada sobre el fondo.

3.12. El 26 de diciembre de 2008, el escrito de réplica de la Demandada sobre el fondo con toda prueba adicional (documentos, declaraciones de testigos, declaraciones de expertos) pero sólo como prueba contraria al escrito de alegaciones de respuesta de los Demandantes.

3.13. Después de esto, no se podrá someter ninguna nueva prueba, a menos que las Partes lo convengan entre ellas o que el Tribunal lo autorice explícitamente.

3.14. El 23 de enero de 2009, las Partes someterán

- * las notificaciones de los testigos y expertos presentadas por estos mismos o por la otra Parte que desean se examine en la Audiencia,
- * y una lista cronológica de todas las pruebas con indicaciones sobre el lugar en que se puede encontrar los documentos respectivos en el archivo.

3.15. En una fecha que queda por decidir, se deberá tener una Conferencia preliminar a la audiencia entre las Partes y el Tribunal, si este último lo considera necesario, ya sea en persona o por teléfono.

3.16. Lo antes posible, después de esto, el Tribunal emitirá una Orden Procesal sobre los detalles de la Audiencia sobre el fondo.

3.17. La Audiencia final sobre el fondo se tendrá del 20 al 24 de abril de 2009 y, si el Tribunal lo considerase necesario, tras haber consultado las Partes, se continuará del 27 al 29 de abril de 2009.

3.18. A las fechas definidas al final de la Audiencia, tras haber consultado las Partes, éstas someterán:

- * Las Actas de la audiencia, de hasta 50 páginas (ningún nuevo documento está autorizado),
- * y las Demandas de costas de arbitraje.

4. Pruebas

Las Partes y el Tribunal pueden utilizar, como directiva suplementaria, las “Reglas de la IBA sobre la Práctica de Pruebas en el Arbitraje Comercial Internacional”, siempre sujetas a los cambios considerados por el Tribunal como apropiados en este caso.

5. Pruebas documentales

5.1. Se someterán con los escritos de alegaciones todos los documentos (que incluirán los textos de todas las disposiciones legales, casos y documentos) considerados como pertinentes por las Partes, según se estipula en el Calendario.

5.2. Se someterán todos los documentos con las traducciones, tal como se estipula más arriba en la sección relativa al idioma, y en la forma prevista antes en la sección sobre las comunicaciones.

5.3. No se permitirá de ninguna manera nuevas acusaciones ni pruebas factuales después de las fechas respectivas para la presentación del escrito de alegaciones de prueba contraria indicado más arriba en el Calendario, a menos que lo convengan las Partes entre ellas o que el Tribunal lo autorice explícitamente.

5.4. A menos que una Parte haga una objeción en el curso de las cuatro semanas siguientes a la recepción de un documento o que se encuentre una objeción posterior justificada por el Tribunal:

- * se acepta un documento proveniente de la fuente indicada en el documento;
- * se acepta una copia de una comunicación enviada sin prueba adicional cuando haya sido recibida por el destinatario; y
- * se acepta como correcta una copia de un documento y su traducción al inglés o al español, si la hubiese.

6. Pruebas de testigos

6.1. Se someterán las Declaraciones escritas de todos los testigos junto con los escritos de alegaciones mencionados más arriba en los límites de tiempo estipulados en el Calendario. Aunque no anticipadas en este momento, se debe someter las Declaraciones de testigos junto con los informes de las Partes sobre la jurisdicción; cada una de las Partes puede solicitar que el Tribunal decida un calendario para el sometimiento de las declaraciones de testigos de prueba contraria.

6.2. Para hacer un uso más eficiente del tiempo en la Audiencia, se utilizará generalmente Declaraciones de testigo escritas en lugar de un examen oral directo, aunque el Tribunal pueda admitir excepciones. Por lo tanto, en la medida en que, en la Audiencia, tales testigos son invitados por la Parte que hace la presentación o son solicitados por la otra Parte, el tiempo de audiencia disponible debe estar reservado principalmente al examen cruzado y al examen directo, así como a las preguntas de los Árbitros.

7. Pruebas de expertos

Si las Partes desean presentar el testimonio de un experto, se aplicará el mismo procedimiento que para los testigos.

8. Audiencias

En función de los cambios con miras al procedimiento hasta las Audiencias, se establece lo siguiente:

8.1. Las fechas están definidas de acuerdo al Calendario presentado más arriba.

8.2. Ningún nuevo documento podrá ser presentado en las Audiencias, excepto con la anuencia del Tribunal. Pero se podrá presentar documentos demostrativos utilizando los documentos sometidos anteriormente de conformidad con el Calendario.

8.3. Se hará una transcripción simultánea de las Audiencias, que será entregada a las Partes y a los Árbitros. La CPA como Registro tomará las disposiciones necesarias a este respecto.

8.4. Audiencia en materia de jurisdicción:

8.4.1. Después de haber discutido en la Reunión y de que las Partes hubiesen sometido por escrito los comentarios adicionales, se decide que la audiencia sobre la jurisdicción tendrá lugar en San José, Costa Rica.

8.4.2. Suponiendo que no se deberán examinar testigos ni expertos en esta Audiencia sobre la jurisdicción, el Orden del día será aquel indicado más abajo. Si se debiese escuchar a testigos en la Audiencia sobre la jurisdicción, se modificará la Orden del día.

1. Breve introducción por parte del Presidente del Tribunal.
2. Declaración de apertura por parte de la Demandada, hasta 1 hora.
3. Declaración de apertura por parte de los Demandantes, hasta 1 hora.
4. Preguntas por parte del Tribunal y sugerencias relativas a los asuntos particulares que se deberán examinar en más detalle en las Presentaciones de la 2ª sesión de las Partes.
5. Presentación de la 2ª sesión por parte de la Demandada, hasta 1 hora.
6. Presentación de la 2ª sesión por parte de los Demandantes, hasta 1 hora.

7. Preguntas finales por parte del Tribunal.
8. Discusión sobre si se considera necesario permitir la sumisión de escritos pos-audiencia y sobre cualquier otro asunto para el procedimiento ulterior.

Los miembros del Tribunal pueden formular preguntas en cualquier momento considerado adecuado.

8.5. Audiencia sobre el fondo:

- 8.5.1. Si fuese necesaria una Audiencia sobre el fondo, se definirá de manera más detallada después de la Audiencia sobre la jurisdicción y tras haber consultado las Partes.
- 8.5.2. Dado el tiempo disponible durante el periodo atribuido a la Audiencia en el Calendario, el Tribunal intenta establecer periodos de tiempo máximos iguales de los que podrán disponer ambas Partes (Demandantes y la Demandada). Se puede modificar ese principio a más tardar en el momento de la Conferencia preliminar a la audiencia.

9. Prórrogas de las fechas límites y otras decisiones de procedimiento

- 9.1. Se puede convenir pequeñas prórrogas entre las Partes, con la condición de que éstas no afecten las fechas ulteriores del Calendario y que se informe el Tribunal antes del vencimiento de la fecha original.
- 9.2. Sólo el Tribunal concederá prórrogas de las fechas límites en situaciones excepcionales y con la condición de que se le someta una petición inmediatamente después del acontecimiento que impidiese a una Parte cumplir con la fecha límite.
- 9.3. El Tribunal indicó a las Partes, y éstas tomaron nota de ello, que dados los viajes y otros compromisos de los Árbitros, puede ocurrir que éstos tomen cierto tiempo para responder a los informes de las Partes y a decidir sobre ellos.
- 9.4. Las decisiones de procedimiento serán emitidas por el Presidente del Tribunal tras haber consultado con sus coárbitros o, en casos de urgencia o si no hubiese contacto con los coárbitros, por él solo.

10. Costas del Tribunal

La cifra de remuneración por hora del Tribunal por todo el tiempo pasado en este asunto será de €500, importe al que se añadirá el IVA aplicable, de conformidad con el párrafo 11 de la Orden Procesal No. 1.

103. Los Demandantes presentaron su Escrito de demanda el 19 de octubre de 2007. La Demandada presentó su Escrito de defensa el 20 de noviembre de 2007.

104. Mediante carta de 24 de enero de 2008, la Demandada informó al Tribunal de un acuerdo entre las Partes para prorrogar la fecha límite para la presentación del Escrito de alegaciones de la Demandada en materia de jurisdicción cinco días hasta el 30 de enero de 2008, y de forma correspondiente, prorrogar la fecha límite para la presentación de la Contramemoria de los Demandantes en materia de jurisdicción y del Escrito de alegaciones de los Demandantes sobre el fondo cinco días cada una, hasta el 30 de marzo de 2008 y el 13 de abril de 2008 respectivamente. El Tribunal corrigió el calendario en la OP II según lo acordado.
105. La Demandada presentó su Escrito de alegaciones en materia de jurisdicción por correo electrónico de 31 de enero de 2008 y una traducción al español del mismo por correo electrónico recibida el 21 de febrero de 2008.
106. Los Demandantes presentaron su Contramemoria en materia de jurisdicción por correo electrónico de 1 de abril de 2008 y una traducción al español de la misma por correo electrónico de 22 de abril de 2008.
107. Los Demandantes presentaron su Escrito sobre el fondo por correo electrónico de 14 de abril de 2008 y una traducción al español del mismo por correo electrónico de 24 de mayo de 2008.
108. Mediante correo electrónico de 10 de abril de 2008, se distribuyó un borrador de OP III entre las Partes solicitando sus comentarios. Mediante cartas de 17 de abril de 2008, tanto los Demandantes como la Demandada presentaron sus comentarios. La Demandada planteó una objeción alegando que la Contramemoria de los Demandantes en materia de jurisdicción incluía nuevas reclamaciones que no se habían presentado en el Escrito de demanda. La Demandada solicitó que el Tribunal no admitiera las nuevas demandas en virtud del artículo 20 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI o que la Audiencia sobre la jurisdicción se pospusiera para otorgar más tiempo a la Demandada para responder a las nuevas reclamaciones alegadas.
109. Acusando recibo de los comentarios de las Partes respecto al borrador, el Tribunal emitió el 21 de abril de 2008 la OP III tratando el desarrollo de la Audiencia sobre la jurisdicción. El Tribunal admitió de forma provisional las presuntas nuevas reclamaciones en virtud del

artículo 20 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, pero reservó su decisión final al respecto para una fecha posterior. La solicitud de la Demandada de posponer la Audiencia sobre la jurisdicción fue rechazada. Para mayor facilidad, las disposiciones pertinentes de la OP III se reproducen por completo a continuación:

1. Introducción

- 1.1. Esta Orden recuerda los **acuerdos y fallos anteriores** del Tribunal, en especial en la Orden Procesal No. 2, secciones 3.7. y 8.4.
- 1.2. A fin de facilitar las referencias a los documentos a los que se remitan las Partes en sus presentaciones orales, y en vista del gran número de documentos presentados por las Partes, con el fin de evitar que cada miembro del Tribunal tenga que llevarlos todos consigo a la Audiencia, se invita a las Partes a llevar a la Audiencia:

para la otra Parte y para **cada** miembro del Tribunal: **carpetas de audiencia** con dichos documentos o con las partes de los mismos a los que tengan la intención de remitirse en sus presentaciones orales en la audiencia, junto con un índice de materias completo y separado de las carpetas de audiencia de cada Parte,

para el uso del Tribunal, **un juego completo de todos los documentos** que las Partes hayan sometido en este procedimiento, junto con un índice de materias completo y separado de dichos documentos.

2. Hora y lugar de la Audiencia

- 2.1. La Audiencia tendrá lugar

en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Avenida 10, Calles 45 y 47 Los Yoses, San Pedro
Apartado Postal 6906-1000, San José, Costa Rica
Teléfono: (506) 2234 0581
Fax: (506) 2234 0584

Como habrá que examinar a testigos y a peritos, se reservarán dos días y medio y la Audiencia

empezará el 19 de mayo de 2008, a las 10.00 h
finalizará, a más tardar, a las 13.00 h del 21 de mayo de 2008.

- 2.2. Para que las Partes y los Árbitros tengan tiempo suficiente para prepararse y evaluar cada parte de las Audiencias, las sesiones diarias no superarán el período entre las 10.00 h y las 18.00 h. Sin embargo, el Tribunal, de acuerdo con las Partes, podrá cambiar el horario durante el transcurso de las Audiencias.

3. Desarrollo de la Audiencia

- 3.1. No se podrá presentar ningún documento nuevo en la Audiencia, a menos que así lo hayan acordado las Partes o lo haya autorizado el Tribunal. Pero se podrán presentar documentos demostrativos utilizando los documentos sometidos anteriormente de conformidad con el calendario.
- 3.2. Para hacer un uso más eficiente del tiempo en la Audiencia, se utilizarán generalmente las declaraciones de testigo escritas en lugar de interrogatorios orales directos, aunque el Tribunal podrá admitir excepciones. Por lo tanto, en la medida en que, en la Audiencia, tales testigos sean invitados por la Parte que hace la presentación o sean solicitados por la otra Parte, la Parte que hace la presentación podrá introducir al testigo por no más de 10 minutos, pero el tiempo de audiencia restante estará reservado al contra-interrogatorio y al segundo interrogatorio directo, así como a las preguntas de los Árbitros.
- 3.3. Si un testigo cuya declaración ha sido presentada por una Parte y cuyo interrogatorio en la Audiencia ha sido solicitado por la otra Parte no se presenta a la Audiencia, su declaración no se tomará en cuenta por el Tribunal. Cada Parte podrá solicitar, con razones que lo justifiquen, una excepción a dicha regla.
- 3.4. Si las Partes solicitan un interrogatorio oral de un experto, se aplicarán las mismas normas y el mismo procedimiento que para los testigos.

4. Orden del día de la Audiencia

- 4.1. En vistas de los interrogatorios de testigos y expertos, se establece el siguiente orden del día de la Audiencia:
 1. Introducción por el Presidente del Tribunal.
 2. Declaración de apertura de no más de 30 minutos cada uno para
 - a) La Demandada,
 - b) Los Demandantes.
 3. A menos que las Partes acuerden lo contrario: interrogatorios de testigos y expertos presentados por la Demandada. Para cada uno:
 - a) Afirmación del testigo o experto de que dirá la verdad.
 - b) Breve introducción por la Demandada. (Esto podrá incluir un breve interrogatorio directo sobre nuevos acontecimientos desde la última declaración por escrito del testigo o experto.)
 - c) Contra-interrogatorio por los Demandantes.
 - d) Segundo interrogatorio directo por la Demandada, pero sólo sobre temas que se hayan planteado en el contra-interrogatorio.
 - e) Segundo contra-interrogatorio por los Demandantes.
 - f) Preguntas restantes de los miembros del Tribunal, pero pueden formular preguntas en cualquier momento.

4. Interrogatorios de los testigos y expertos presentados por los Demandantes. Para cada uno: viceversa según los incisos de a) a f) precedentes.
 5. Los testigos o expertos sólo podrán ser convocados nuevamente para un examen de refutación por una Parte o por los miembros del Tribunal, si dicha intención se anuncia con tiempo suficiente para garantizar la disponibilidad del testigo y del experto durante el tiempo de la Audiencia.
 6. Argumentos de refutación de no más de 1 hora cada uno para
 - a) La Demandada,
 - b) Los Demandantes.
 - c) Preguntas adicionales de los miembros del Tribunal, de haberlas.
 7. Argumentos finales de no más de 45 minutos cada uno para
 - a) La Demandada,
 - b) Los Demandantes.
 - c) Preguntas restantes de los miembros del Tribunal, de haberlas.
 8. Discusión relativa a los escritos pos-audiencia y cualquier otro asunto de procedimiento.
- 4.2. Los interrogatorios de testigos y expertos tendrán lugar en el orden acordado por las Partes. Si no se hubiese llegado a un acuerdo sobre ello, a menos que el Tribunal decida lo contrario, se escuchará primero a los testigos y expertos de la Demandada, en el orden decidido por la Demandada, y después se escuchará a los testigos y expertos de los Demandantes, en el orden decidido por los Demandantes.
 - 4.3. A menos que las Partes acuerden lo contrario o que así lo dicte el Tribunal, los testigos y expertos podrán estar presentes en la sala de Audiencia durante el testimonio de otros testigos y expertos.
 - 4.4. Como ya se había previsto en la Orden Procesal No. 2 para la audiencia sobre el fondo, en vista de los interrogatorios de testigos y expertos también para esta Audiencia sobre la Jurisdicción, tomando en cuenta el tiempo disponible durante el periodo previsto para la Audiencia en el calendario, el Tribunal establece periodos de tiempo máximo iguales, de los que las Partes podrán disponer para sus presentaciones e interrogatorio y contra-interrogatorio de todos los testigos y expertos. Tomando en cuenta el cálculo del tiempo de audiencia adjunto a esta Orden, el tiempo máximo total disponible para las Partes (incluidas sus declaraciones iniciales y finales) será el siguiente:

5 horas para los Demandantes
5 horas para la Demandada

Los límites temporales “por no más de” para los puntos que constan más arriba en el Orden del día se considerarán orientativos. Sin embargo, se deja a criterio de las Partes, sujeto a la sección 3.2. más arriba, cuánto del tiempo total asignado

quieren destinar a los puntos del Orden del día en la sección 4.1. más arriba, las subsecciones 2., 3. b, c, d, y e, y 4., 6. y 7., siempre que respeten el tiempo total que se les ha asignado.

- 4.5. Las partes prepararán sus presentaciones y exámenes en la Audiencia basándose en los límites temporales establecidos en esta Orden Procesal.

5. **Otros asuntos**

- 5.1. La CPA ha organizado

la disponibilidad **del estenógrafo y de la traducción,**

que haya **micrófonos** para todos los que hablen en la sala de Audiencia a fin de garantizar que se les entienda fácilmente por los altavoces y a efectos de traducción,

y, tomando en cuenta el número de personas asistiendo de cada lado, un suministro suficiente de agua en las mesas y de café y té para los dos **recesos** cada día .

- 5.2. El Tribunal podrá cambiar cualquiera de los fallos de esta orden, después de consultarlo con las Partes, si lo considera apropiado de acuerdo con las circunstancias.

110. Mediante carta de 23 de abril de 2008, la Demandada solicitó clarificaciones adicionales sobre las decisiones del Tribunal en relación con la OP III. Primero, solicitó que el Tribunal no considerase el contenido del Escrito de los Demandantes sobre el fondo durante la Audiencia sobre la jurisdicción y en la decisión final del Tribunal en materia de jurisdicción. La Demandada también dio a conocer su intención de presentar un Escrito de defensa adicional respecto a las presuntas nuevas reclamaciones de los Demandantes y su intención de solicitar permiso para presentar escritos pos-audiencia respecto a estos asuntos.
111. Mediante cartas, ambas de 28 de abril de 2008, las Partes informaron al Tribunal de que no tenían intención de presentar a ninguno de sus testigos ni de solicitar la presencia de ningún testigo de la parte contraria. En su carta, la Demandada también solicitó permiso para presentar declaraciones de testigos y peritos de réplica de conformidad con los artículos 6.1 y 7 de la OP II. Mediante carta de 30 de abril de 2008, el Tribunal modificó el orden del día de la audiencia para suprimir los puntos tratando el tema de testigos e invitó a las Partes a presentar declaraciones de testigos y peritos de réplica hasta el 9 de mayo de 2008.

112. Mediante carta de 9 de mayo de 2008, la Demandada solicitó permiso para presentar un número limitado de documentos adicionales de réplica antes de la Audiencia sobre la jurisdicción con el propósito de replicar a los presuntos nuevos asuntos y alegaciones de hecho contenidos en la Contramemoria de los Demandantes en materia de jurisdicción. Mediante carta de 8 de mayo de 2008, el Tribunal autorizó la presentación de documentos de réplica por la Demandada antes del 13 de mayo de 2008. Los Demandantes fueron autorizados a presentar una contestación a esos documentos de réplica antes del 17 de mayo de 2008.
113. La Demandada presentó tres declaraciones de testigos de réplica, incluyendo una nueva declaración de un testigo, por correo electrónico de 10 de mayo de 2008. La Demandada presentó documentos de réplica por correo electrónico de 14 de mayo de 2008. Los Demandantes presentaron documentos de réplica en contestación por correo electrónico de 17 de mayo de 2008. La Demandada también presentó una serie de autoridades legales de réplica por correo electrónico con fecha de 18 de mayo de 2008.
114. La Audiencia sobre la jurisdicción tuvo lugar en San José, Costa Rica los días 19 y 20 de mayo de 2008.
115. El Tribunal emitió la OP IV el 23 de mayo de 2008. El Tribunal autorizó dos rondas de Escritos pos-audiencia que debían presentarse simultáneamente el 22 de julio de 2008 y el 12 de agosto de 2008, respectivamente. El Tribunal invitó a las Partes a analizar todos los argumentos y pruebas que quedaban sin responder hasta ese momento. Para mayor precisión y facilidad, las disposiciones pertinentes de la OP IV se reproducen por completo a continuación:

Tomando en cuenta la discusión y los acuerdos entre las Partes al fin de la Audiencia sobre Jurisdicción en San José el 20 de mayo de 2008, el Tribunal emite esta Orden Procesal No. 4 como sigue:

1. Escritos después de la Audiencia

- 1.1. **A más tardar el 22 de julio de 2008**, las Partes someterán simultáneamente Escritos pos-audiencia conteniendo lo siguiente:
 - 1.1.1. Los fallos solicitados por las Partes respecto tanto a jurisdicción como el fondo;
 - 1.1.2. Cualquier comentario que tengan sobre,
 - a) asuntos planteados en las sumisiones del otro lado a las cuales no se ha respondido hasta ahora;
 - b) asuntos planteados durante la Audiencia sobre la jurisdicción;
 - 1.1.3. Secciones aparte respondiendo en particular a las siguientes preguntas:
 - a) Expliquen porque la inversión alegada en el caso presente es o no es una inversión “existente en el momento de su entrada en vigor” del Tratado.
 - b) Que es exactamente el caso planteado por los Demandantes respecto a un “acuerdo de inversión” bajo el artículo VI(1)(a) del Tratado?
- 1.2. Las secciones de los Escritos pos-audiencia pedidos en 1.1.2 y 1.1.3 más arriba incluirán cortas referencias a todas las secciones en las sumisiones anteriores de esa Parte, tanto así como a las pruebas (incluso autoridades legales, declaraciones de testigos y declaraciones de expertos) y a las transcripciones de las audiencias sobre las cuales dependen respecto al asunto en particular. Para eliminar cualquier duda, el Tribunal desea recibir de cada Parte,
 - 1.2.1. Una exposición relatando cada enunciado de derecho que se desea ver aceptado por el Tribunal; y
 - 1.2.2. Una exposición de cada hecho pertinente a jurisdicción que se desea ver aceptado por el Tribunal.
- 1.3. Nuevas pruebas solamente serán sometidas adjuntas a los Escritos pos-audiencia si son necesarios para hacer prueba contraria a hechos o cuestiones legales planteadas por el otro lado en sus sumisiones escritas a las cuales todavía no se ha respondido durante la Audiencia sobre la Jurisdicción.
- 1.4. **A más tardar el 12 de agosto de 2008**, las Partes someterán simultáneamente una segunda serie de Escritos pos-audiencia, pero solamente para hacer prueba contraria a la primera serie de Escritos pos-audiencia del otro lado.

2. Procedimiento sobre el fondo

- 2.1. Como discutido y acordado en la Audiencia sobre la Jurisdicción y para evitar cualquier malentendido, el horario antedicho no cambia el Horario acordado entre las Partes y el Tribunal para el procedimiento sobre el fondo expuesto en las secciones 3.6 a 3.18 de la Orden Procesal No. 2. Esto se estipula sin perjuicio de la decisión del Tribunal respecto a jurisdicción prevista en la sección 3.8 de la Orden Procesal No. 2.

116. Mediante carta de 13 de junio de 2008, la Demandada solicitó una prórroga de sesenta días de la fecha límite para la presentación de su Contraescrito sobre el fondo. Mediante carta de 17 de junio de 2008, los Demandantes se opusieron a que se otorgara esta prórroga. Mediante carta de 18 de junio de 2008, el Tribunal otorgó una prórroga de un mes.
117. Las Partes presentaron su primera ronda de Escritos pos-audiencia por sendos correos electrónicos de 23 de julio de 2008, con traducciones al español presentadas los días 22 y 28 de agosto de 2008 por los Demandantes y la Demandada, respectivamente.
118. Las Partes presentaron su segunda ronda de Escritos pos-audiencia en materia de jurisdicción por correos electrónicos de 13 de agosto de 2008, con traducciones al español presentadas los días 3 y 18 de septiembre de 2008 por los Demandantes y la Demandada, respectivamente.
119. La Demandada presentó su Contraescrito sobre el fondo por correo electrónico de 23 de septiembre de 2008 y una traducción al español de éste el 3 de noviembre de 2008.
120. Los Demandantes presentaron su Escrito de réplica por correo electrónico de 25 de noviembre de 2008, junto con una traducción al español remitida por correo electrónico de 16 de diciembre de 2008.
121. El Tribunal emitió su Laudo Interino el 1 de diciembre de 2008. A la vista de los razonamientos expuestos en el laudo, el Tribunal decidió lo siguiente:
 1. **Las objeciones de la Demandada son desestimadas.**
 2. **El Tribunal dispone de jurisdicción respecto a las demandas tal como las formularon los Demandantes en su segundo Escrito pos-audiencia con fecha del 12 de agosto de 2008 en el párrafo 116.**
 3. **La decisión respecto a las costas del arbitraje se pospone hasta una fase posterior del presente procedimiento.**

4. El procedimiento a seguir en este caso será objeto de una Orden Procesal del Tribunal aparte.

122. Mediante carta de 12 de enero de 2009, el Tribunal confirmó que la Audiencia sobre el fondo se celebraría del 20 al 24 de abril de 2009, con una posible extensión del 27 al 29 de abril de 2009, y observó y confirmó el acuerdo de las Partes sobre Washington, D.C., EE.UU., como lugar de la Audiencia. El Tribunal invitó a las Partes a presentar comentarios sobre el lugar y la duración de la Audiencia en Washington, D.C. hasta el 19 de enero de 2009.
123. Mediante carta de 16 de enero de 2009, la Demandada presentó ante el Tribunal sus comentarios sobre el lugar y la duración de la Audiencia. La Demandada solicitó al Tribunal que reservase el periodo completo previamente acordado y propuso extender la Audiencia durante dos días adicionales, en concreto el 30 de abril y 1 de mayo de 2009.
124. Mediante carta de 19 de enero de 2009, los Demandantes presentaron ante el Tribunal sus comentarios sobre el lugar y la duración de la Audiencia, proponiendo que la Audiencia se extendiese oficialmente hasta el 29 de abril de 2009. Mediante carta de 29 de enero de 2009 los Demandantes indicaron que creían que la prórroga de dos días más de la Audiencia, hasta el 1 de mayo de 2009, propuesta por la Demandada no sería necesaria.
125. La Demandada presentó su Escrito de réplica sobre el fondo por correo electrónico de 27 de enero de 2009, junto con su traducción al español por correo electrónico de 16 de febrero de 2009.
126. Mediante carta de 30 de enero de 2009, el Tribunal informó a las Partes de que el calendario original del 20 al 24 de abril de 2009 y del 27 a 29 de abril de 2009, se mantenía. Además, el Tribunal indicó que los dos días adicionales del 30 de abril y el 1 de mayo de 2009 serían reservados por el Tribunal para el caso de que se probase que son absolutamente necesarios. En ese contexto, el Tribunal informó a las Partes de que se emitiría una Orden Procesal con los detalles de la Audiencia e invitó a las Partes a intentar llegar a un acuerdo sobre los detalles relevantes respecto del desarrollo de la Audiencia sobre el fondo.
127. Mediante carta de 6 de febrero de 2009, el Tribunal remitió a las Partes la traducción al español del Laudo Interino de 1 de diciembre de 2008.

128. Mediante correos electrónicos de 13 de febrero de 2009, las Partes informaron al Tribunal de que habían alcanzado un acuerdo sobre el uso de las oficinas de Washington, D.C. de los letrados de la Demandada como lugar para la Audiencia sobre el fondo.
129. Mediante carta de 23 de febrero de 2009, los Demandantes entregaron al Tribunal una Lista Consolidada de Pruebas.
130. Mediante carta de 24 de febrero de 2009, la Demandada entregó al Tribunal una Lista Consolidada de Pruebas e Informes Periciales.
131. El 27 de febrero de 2009 se celebró una conferencia telefónica previa a la Audiencia entre las Partes y la CPA. Entre otros asuntos, las Partes acordaron las disposiciones logísticas para la Audiencia, incluyendo un horario diario para la Audiencia y confirmaron que (1) enviarían una lista de los testigos que deseaban interrogar durante la Audiencia el 9 de marzo de 2009, y (2) enviarían una lista de los asistentes a la Audiencia el 20 de marzo de 2009.
132. Mediante cartas de 9 de marzo de 2009, tanto los Demandantes como la Demandada presentaron sus comentarios sobre la organización y horario de la Audiencia sobre el fondo así como una lista de los testigos que pretendían interrogar. Mediante cartas de 10 de marzo así como posteriores cartas de 11 de marzo de 2009, las Partes presentaron comentarios adicionales sobre la organización de la Audiencia.
133. Acusando recibo de los comentarios de las Partes, el Tribunal emitió la OP V el 19 de marzo de 2009 en relación con el desarrollo de la Audiencia sobre el fondo. Para mayor facilidad, las disposiciones pertinentes de la OP V se reproducen por completo a continuación:

1. Introducción

- 1.1. Esta Orden recuerda los **acuerdos y fallos anteriores** del Tribunal, y en especial toma en cuenta las sumisiones y cartas recientes de las Partes.
- 1.2. A fin de facilitar las referencias a los documentos a los que se remitan las Partes en sus presentaciones orales, y en vista del gran número de documentos presentados por las Partes, con el fin de evitar que cada miembro del Tribunal tenga que llevarlos todos consigo a la Audiencia, se invita a las Partes a llevar a la Audiencia:

para la otra Parte y para **cada** miembro del Tribunal: **carpetas de audiencia** con dichos documentos o con las partes de los mismos a los que tengan la intención

de remitirse en sus presentaciones orales en la audiencia, junto con un índice de materias completo y separado de las carpetas de audiencia de cada Parte,

para el uso del Tribunal, **un juego completo de todos los documentos** que las Partes hayan sometido en este procedimiento, junto con un índice de materias completo y separado de dichos documentos.

2. Hora y lugar de la Audiencia

- 2.1. La Audiencia tendrá lugar en

Winston & Strawn LLP
1700 K Street, NW
Washington, D.C. 20006-3817
USA
Tel: +1 202 282 5000
Fax: +1 202 282 5100

Como se había acordado, se reservarán ocho días y la Audiencia empezará a las 10.00 h del 20 de abril de 2009, finalizará, a más tardar, a las 18.00 h del 29 de abril de 2009

- 2.2. Dos días extras, el 30 de abril y 1 de mayo, también se reservarán como contingencia en caso de que el Tribunal decida que es absolutamente necesario prolongar la Audiencia.
- 2.3. Para que las Partes y los Árbitros tengan tiempo suficiente para prepararse y evaluar cada parte de las Audiencias, las sesiones diarias no superarán el período entre las 10.00 h y las 18.00 h. Sin embargo, el Tribunal, de acuerdo con las Partes, podrá cambiar el horario durante el curso de las Audiencias.
- 2.4. A más tardar el 20 de marzo de 2009, las Partes someterán notificaciones de las personas quienes estarán presentes en la Audiencia en sus lados respectivos.

3. Desarrollo de la Audiencia

- 3.1. No se podrá presentar ningún documento nuevo en la Audiencia, a menos que así lo hayan acordado las Partes o lo haya autorizado el Tribunal. Pero se podrán presentar documentos demostrativos utilizando los documentos sometidos anteriormente de conformidad con el calendario.
- 3.2. Documentos como prueba contraria a declaraciones de testigos recientes a los cuales la otra Parte no ha tenido oportunidad de responder pueden ser presentados, juntos con una corta nota explicativa a más tardar el 1 de abril de 2009.
- 3.3. Para hacer un uso más eficiente del tiempo en la Audiencia, se utilizarán generalmente las declaraciones de testigo escritas en lugar de interrogatorios orales directos, aunque el Tribunal podrá admitir excepciones. Por lo tanto, en la medida en que, en la Audiencia, tales testigos sean invitados por la Parte que hace la presentación o sean solicitados por la otra Parte, la Parte que hace la presentación podrá introducir al testigo por no más de 10 minutos, o, respecto a nuevos

acontecimientos desde la última declaración del testigo, por no más de 20 minutos, pero el tiempo de audiencia restante estará reservado al contra-interrogatorio y al segundo interrogatorio directo, así como a las preguntas de los Árbitros. Argumentación de cualquier Parte sólo podrá presentarse durante las declaraciones de apertura o finales como establecidos en la Orden del día.

- 3.4. Si un testigo cuya declaración ha sido presentada por una Parte y cuyo interrogatorio en la Audiencia ha sido solicitado por la otra Parte no se presenta a la Audiencia, su declaración no se tomará en cuenta por el Tribunal. Cada Parte podrá solicitar, con razones que lo justifiquen, una excepción a dicha regla.
- 3.5. Si las Partes solicitan un interrogatorio oral de un experto, se aplicarán las mismas normas y el mismo procedimiento que para los testigos.

4. Orden del día de la Audiencia

- 4.1. En vista de los interrogatorios de testigos y expertos, se establece el siguiente orden del día de la Audiencia:
 1. Introducción por el Presidente del Tribunal.
 2. Declaración de apertura de no más de 2 horas cada una para
 - a) Los Demandantes,
 - b) La Demandada.
 3. A menos que las Partes acuerden lo contrario: interrogatorios de testigos o expertos presentados por los Demandantes. Para cada uno:
 - a) Afirmación del testigo o experto de que dirá la verdad.
 - b) Breve introducción por los Demandantes. (Esto podrá incluir un breve interrogatorio directo sobre nuevos desarrollos desde la última declaración por escrito del testigo o experto.)
 - c) Contra-interrogatorio por la Demandada.
 - d) Segundo interrogatorio directo por los Demandantes, pero sólo sobre temas que se hayan planteado en el contra-interrogatorio.
 - e) Segundo contra-interrogatorio por la Demandada.
 - f) Preguntas restantes de los miembros del Tribunal, pero pueden formular preguntas en cualquier momento.
 4. Para cada interrogatorio de un testigo o experto presentado por la Demandada: viceversa según de a) a f) precedentes.
 5. Los testigos o expertos sólo podrán ser convocados nuevamente para un interrogatorio de refutación por una Parte o por los miembros del Tribunal, si dicha intención se anuncia con tiempo suficiente para garantizar la disponibilidad del testigo y del experto durante el tiempo de la Audiencia.

6. Argumentos finales de no más de 2 horas cada uno para
 - a) Los Demandantes
 - b) La Demandada
 - c) Preguntas restantes de los miembros del Tribunal, de haberlas
 7. Discusión relativa a sumisiones después de la audiencia y cualquier otro asunto de procedimiento.
- 4.2. Los interrogatorios de testigos y expertos tendrán lugar en el orden acordado por las Partes. Si no se hubiere llegado a un acuerdo sobre ello, a menos que el Tribunal decida lo contrario, se escuchará primero a los testigos y expertos de los Demandantes, en el orden decidido por los Demandantes, y después se escuchará a los testigos y expertos de la Demandada, en el orden decidido por la Demandada.
 - 4.3. A menos que las Partes acuerden lo contrario o que así lo dicte el Tribunal, los testigos y expertos podrán estar presentes en la sala de Audiencia durante el testimonio de otros testigos y expertos.
 - 4.4. Como ya se había previsto en la Orden Procesal No. 2 para la audiencia sobre el fondo, dados los interrogatorios de testigos y expertos, tomando en cuenta el tiempo disponible durante el período previsto para la Audiencia en el calendario, el Tribunal establece períodos de tiempo máximo iguales, de los que las Partes podrán disponer para sus presentaciones y interrogatorio y contra-interrogatorio de todos los testigos y expertos. Tomando en cuenta el cálculo del tiempo de audiencia adjunto a esta Orden, el tiempo máximo total disponible para las Partes (excluidas sus declaraciones iniciales y finales) será lo siguiente:

16.25 horas para los Demandantes

16.25 horas para la Demandada

Se deja a criterio de las Partes cuánto del tiempo total asignado quieren destinar a los puntos del Orden del día en las secciones 3, 4 y 5 más arriba, siempre que respeten el tiempo total que les ha sido asignado.

A más tardar el 1 de abril de 2009, las Partes podrán someter una notificación adicional indicando si no tienen intención de examinar a cualquiera de los testigos ya notificados. Después de la dicha notificación, el Tribunal re-determinará si, tomando en cuenta el número de testigos que se examinarán de cada lado, es necesario cambiar los períodos asignados a cada Parte. Si una Parte no convoca a un testigo para contra-interrogatorio, esto no será considerado como una aprobación del testimonio de ese testigo.

- 4.5. Las Partes prepararán sus presentaciones y exámenes en la Audiencia basándose en los límites temporales establecidos.

5. Otros asuntos

- 5.1. La CPA ha organizado la disponibilidad del estenógrafo y de la interpretación.

- 5.2. Los Representantes de la Demandada se asegurarán de que hayan micrófonos para todos los que hablen en la sala de Audiencia a fin de garantizar que se les entienda fácilmente por los altavoces y a efectos de traducción.
 - 5.3. Los Representantes de la Demandada, tras consultar a los Representantes de los Demandantes y la CPA, organizará del servicio de almuerzos y, tomando en cuenta el número de personas asistiendo de cada lado, un suministro suficiente de agua en las mesas y de café y té para los dos recesos cada día.
 - 5.4. El Tribunal podrá cambiar cualquiera de los fallos de esta Orden, después de consultarlo con las Partes, si lo considera apropiado de acuerdo con las circunstancias.
134. Mediante carta de 20 de marzo de 2009, la Demandada comunicó su lista de asistentes a la Audiencia sobre el fondo.
 135. Mediante carta de 23 de marzo de 2009, la Demandada objetó ante ciertas disposiciones de la OP V. En su carta la Demandada solicitaba una modificación del orden del día de la Audiencia sobre el fondo y una oportunidad para presentar comentarios adicionales en contestación a cualquier comentario presentado por los Demandantes en virtud de la OP V. Mediante carta de 24 de marzo, el Tribunal informó a las Partes de que el orden del día dispuesto en la OP V se mantenía pero que la Demandada estaba autorizada para presentar documentos de réplica hasta el 8 de abril 2009.
 136. Mediante sendas cartas, ambas de 1 de abril de 2009, la Demandada entregó una lista actualizada de asistentes a la Audiencia sobre el fondo y una lista actualizada de los testigos a los que pretendía interrogar.
 137. Mediante sendas cartas, ambas de 1 de abril de 2009, los Demandantes presentaron sus documentos de réplica y entregaron su lista de asistentes a la Audiencia sobre el fondo así como una lista actualizada de los testigos a los que tenía intención de interrogar.
 138. Mediante carta de 2 de abril de 2009, los Demandantes comunicaron al Tribunal que dos testigos que no habían sido citados por la Demandada acudirían a la Audiencia como posibles testigos de réplica. Los Demandantes también entregaron al Tribunal una lista de pruebas adicional y actualizada.

139. Mediante carta de 6 de abril de 2009, la Demandada se opuso a la notificación de los Demandantes sobre sus dos posibles testigos de réplica. La Demandada también solicitó que, como resultado de que los Demandantes habían presentado diversas pruebas de réplica sin traducción al inglés, el Tribunal otorgara a la Demandada una prórroga del plazo hasta el 12 de abril de 2009 para presentar documentos de réplica adicionales. Los Demandantes presentaron las restantes traducciones al inglés de sus documentos de réplica el 6 de abril de 2009, y notificaron al Tribunal que estaban de acuerdo con el plazo del 12 de abril de 2009 para que la Demandada presentara sus documentos de réplica.
140. Mediante carta de 7 de abril de 2009, los Demandantes respondieron a la objeción de la Demandada sobre la notificación de sus dos posibles testigos de réplica.
141. Mediante carta de 7 de abril de 2009, el Tribunal notificó a las Partes que aceptaba la notificación de los Demandantes sobre sus dos posibles testigos de réplica y que la Demandada disponía hasta el 12 de abril de 2009 para notificar cualquiera de sus propios testigos o expertos para testimonios de réplica y para presentar documentos de réplica.
142. Mediante carta de 9 de abril de 2009, el Tribunal entregó a las Partes un cuadro sobre los casos judiciales ecuatorianos relevantes para este arbitraje y solicitó que cualquier sugerencia de las Partes para la modificación del cuadro se enviara hasta el 15 de abril de 2009.
143. Mediante carta de 10 de abril de 2009, la Demandada solicitó una extensión adicional hasta el 14 de abril de 2009 para la presentación de sus documentos de réplica debido a ciertos días festivos en el Ecuador, observando que los letrados de los Demandantes habían dado su conformidad a la extensión del plazo.
144. Mediante carta de 13 de abril de 2009, la Demandada comunicó que deseaba reservar su derecho a solicitar testimonio adicional de réplica de cualquiera de sus testigos, incluyendo aquellos que fueran interrogados por los Demandantes.
145. Mediante carta de 14 de abril de 2009, la Demandada entregó sus documentos adicionales de réplica.

146. Mediante carta de 15 de abril de 2009, la Demandada entregó sus sugerencias para la modificación del cuadro sobre los casos ecuatorianos y expresó su preocupación respecto del contenido del cuadro.
147. Mediante correo electrónico de 18 de abril de 2009, los Demandantes entregaron sus sugerencias para la modificación del cuadro sobre los casos ecuatorianos.
148. Mediante carta de 18 de abril de 2009, el Tribunal respondió a la preocupación de la Demandada sobre el contenido del cuadro sobre los casos ecuatorianos.
149. Mediante carta de 19 de abril de 2009, los Demandantes solicitaron al Tribunal que ordenara el aislamiento de los testigos que iban a ser interrogados y que el Tribunal eliminara la declaración testifical de un testigo fallecido. Mediante carta también de 19 de abril de 2009, la Demandada se opuso a ambas solicitudes de los Demandantes.
150. Mediante correo electrónico de 20 de abril de 2009, la Demandada entregó al Tribunal una lista actualizada de pruebas e informes periciales.
151. La Audiencia sobre el fondo tuvo lugar en Washington, D.C., EE.UU desde el 20 hasta el 24 de abril y los días 27 y 28 de 2009.
152. Teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados con las Partes durante la Audiencia sobre el fondo, el Tribunal emitió la OP VI el 30 de abril de 2009. El Tribunal autorizó que se presentaran dos rondas de Escritos pos-audiencia simultáneamente el 19 de junio de 2009 y el 15 de julio de 2009, respectivamente. El Tribunal también autorizó dos rondas de Escritos sobre costas que debían presentarse simultáneamente el 7 de agosto de 2009, y el 21 de agosto de 2009, respectivamente. El Tribunal también solicitó a las Partes que trataran ciertas cuestiones especificadas en la Orden en sus Escritos pos-audiencia. Para mayor facilidad, las disposiciones pertinentes de la OP VI se reproducen por completo a continuación:

Tomando en cuenta la discusión y los acuerdos entre las Partes en la audiencia sobre el fondo que tuvo lugar en Washington, D.C. desde el 20 a 24 y 27 a 28 de abril de 2009, el Tribunal emite esta Orden Procesal No. 6 como sigue:

- 1. Escritos pos-audiencia**

- 1.1. **A más tardar el 19 de junio de 2009**, las Partes someterán simultáneamente Escritos pos-audiencia, limitados a un máximo de 80 páginas (a doble espacio) de largo, conteniendo lo siguiente:
 - 1.1.1. Cualquier comentario que tengan sobre asuntos planteados durante la Audiencia sobre el fondo;
 - 1.1.2. En la medida en que no se respondieron en forma plena y completa durante la Audiencia sobre el fondo, secciones aparte contestando en particular a las preguntas planteadas por el Tribunal durante la Audiencia sobre el fondo tanto como a las planteadas en la sección 3 más abajo.
- 1.2. Las secciones de los Escritos pos-audiencia pedidos en 1.1.1 y 1.1.2 más arriba incluirán cortas referencias a todas las secciones en las sumisiones anteriores de esa Parte tanto como a las pruebas (incluso autoridades legales, declaraciones de testigos y declaraciones de expertos) y a las transcripciones de las audiencias sobre las cuales depende respecto al asunto en particular.
- 1.3. Ningún nuevo documento será sometido adjunto a los Escritos pos-audiencia a menos que se haya autorizado expresamente de antemano por el Tribunal.
- 1.4. **A más tardar el 15 de julio de 2009**, las Partes someterán simultáneamente una segunda serie de Escritos pos-audiencia, limitados a un máximo de 40 páginas (a doble espacio) de largo, pero solamente para refutar a la primera serie de Escritos posaudiencia del otro lado.

2. Demandas por costas

- 2.1. **A más tardar el 7 de agosto de 2009**, las Partes someterán simultáneamente Demandas por costas presentando brevemente las costas en que incurrieron cada lado. No se precisa adjuntar documentación acreditativa a dichas Demandas por costas.
- 2.2. **A más tardar el 21 de agosto de 2009**, las Partes someterán simultáneamente cualquier comentario que tengan respecto a la Demanda por costas sometida por el otro lado.

3. Preguntas

Además de proveer comentarios adicionales sobre las preguntas ya presentadas durante la Audiencia sobre el fondo, las Partes son pedidas responder a las siguientes preguntas en los Escritos pos-audiencia:

- 3.1. ¿Qué estándar es aplicable según el artículo II(7) del TBI (“medios eficaces para hacer valer las reclamaciones y respetar los derechos”)? ¿Es ese estándar menos exigente que el estándar de denegación de justicia?
- 3.2. ¿Aún si cae a los Demandantes la carga de la prueba de demostrar una denegación de justicia, resulta pertinente examinar cuales de los 7 casos fueron procesados por los tribunales del Ecuador antes de que los Demandantes hayan sometido su Notificación de arbitraje en diciembre del 2006 y cuales de ellos fueron procesados después de esa fecha?

- 3.3. ¿Respecto a la orden de pagar al representante legal de TexPet en el caso respecto al Acuerdo de Refinanciamiento, qué exactamente le impide a TexPet de cobrar el monto dictado? ¿Porqué no puede TexPet designar a su abogado local como su representante legal para cobrar el monto dictado en el caso respecto al Acuerdo de Refinanciamiento?
- 3.4. ¿Hasta qué punto se le permite al Tribunal aplicar su propia interpretación de los tres contratos pertinentes?
- 3.5. ¿Hasta qué punto son pertinentes en nuestro contexto las conclusiones de los expertos nombrados por los tribunales en los siete casos? ¿Tiene algún efecto sobre la cuestión de la probabilidad de éxito o del resultado probable en los tribunales ecuatorianos?
- 3.6. ¿Puede un Estado alegar la invalidez de un contrato a pesar de que fue firmado por su propios Ministros?
- 3.7. ¿Qué es la razón por la cual los Demandantes piden específicamente una declaración que los Acuerdos de 1973 y 1977 fueron incumplidos como parte de su Petitorio?
- 3.8. ¿Qué es la pertinencia del tratamiento recibido por los casos de TexPet (1) por los tribunales ecuatorianos antes de la Notificación de arbitraje en diciembre del 2006 en comparación a (2) después de la presentación de la Notificación de arbitraje? ¿Existe alguna diferencia?
- 3.9. ¿Aparte de,
 - (1) las referencias a “el período comprendido entre la fecha de la firma de este convenio hasta 12 meses posteriores a esa fecha” en la Sección 1 (“Trabajos de Geología y Geofísica”) y en las Secciones 3 y 3(c) (“Producción”),
 - (2) la referencia a “el período comprendido entre los 12 meses del programa de trabajo” en la Sección 3(g) (“Producción”), y
 - (3) la referencia a “este período anual” en la Sección 1.2 (“Normas Generales que Regularán la Producción”), contiene el Acuerdo de 1977 algún indicio sugiriendo que se limita a una vigencia de un año, tomando en cuenta en particular el objeto del Acuerdo de 1977 como expuesto en la sección preliminar que lleva por título “Objeto del Convenio”?
- 3.10. ¿En el caso que el Tribunal considerare una indemnización monetaria, para asegurar el pago por los Demandantes de impuestos debidamente cobrados en relación con dicha indemnización, que mecanismo considerarían las Partes como una alternativa aceptable a que el Tribunal dedujere los impuestos directamente de cualquier monto de indemnización?

153. Las Partes presentaron su primera ronda de Escritos pos-audiencia sobre el fondo por correos electrónicos de 20 de junio de 2009, junto con sus traducciones al español a continuación el 9 de julio y el 8 de julio de 2009, de los Demandantes y la Demandada, respectivamente.

154. Las Partes presentaron su segunda ronda de Escritos pos-audiencia sobre el fondo por correos electrónicos de 16 de julio de 2009, junto con sus traducciones al español a continuación el 6 de agosto de 2009.
155. Mediante carta de 16 de julio de 2009, los Demandantes se opusieron a la introducción de nuevas pruebas por la Demandada en su segundo Escrito pos-audiencia sobre el fondo sin autorización previa del Tribunal de conformidad con la OP VI. Mediante carta de 17 de julio de 2009, el Tribunal invitó a la Demandada a presentar una respuesta a esta objeción. Mediante carta de 22 de julio la Demandada contestó a la objeción de los Demandantes.
156. El Tribunal emitió la OP VII el 24 de julio de 2009, tratando la admisibilidad de las pruebas de la Demandada que acompañaban su Escrito pos-audiencia. Para mayor facilidad, las disposiciones pertinentes de la OP VII se reproducen por completo a continuación:

Tomando en cuenta la carta de los Demandantes con fecha del 16 de julio de 2009, la carta de la Demandada con fecha del 22 de julio y el párrafo 1.3 de la Orden Procesal No. 6 del Tribunal que dispone:

Ningún nuevo documento será sometido adjunto a los Escritos pos-audiencia a menos que se haya autorizado expresamente de antemano por el Tribunal[.]

el Tribunal emite esta Orden Procesal No. 7 como sigue:

1. La dicha orden en el párrafo 1.3. se refiere a todo “documento” y por consiguiente es aplicable también a las autoridades. La Demandada, por lo tanto, no debería de haber sometido las pruebas R-1020 a R-1033 sin haber obtenido “de antemano” la autorización del Tribunal.
2. El Tribunal toma nota de que la carta de los Demandantes del 16 de julio de 2009, mientras contiene una objeción general a todas las nuevas pruebas sometidas por la Demandada, solamente expone motivos detallados respecto a las pruebas R-1022, 1023, 1025, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031 y 1033.
3. Dado que el Tribunal quiere asegurarse de que tiene a mano todas las pruebas y autoridades consideradas pertinentes por las Partes para cuando tiene sus deliberaciones sobre el Laudo sobre el fondo, y dado que el calendario de la Orden Procesal No. 6 todavía permite dos series de sumisiones respecto a las costas así que ningún retraso es creado por series adicionales de sumisiones breves, el Tribunal falla como sigue:
 - 3.1. **Antes del 7 de agosto de 2009**, el Demandante podrá someter un Escrito breve adicional comentando sobre los nuevos documentos sometidos por la Demandada y podrá adjuntar a este Escrito cualquier documento adicional como refutación a los nuevos documentos de la Demandada.

3.2. Si la Demandada fuera a querer someter cualquier documento nuevo de refutación a tales documentos adicionales sometidos por el Demandante, podrá someter una solicitud motivada **antes del 14 de agosto de 2009**, pero sin incluir ningún nuevo documento adjunto, y el Demandante podrá comentar respecto a dicha solicitud **antes del 21 de agosto de 2009**.

157. Mediante carta de 27 de julio de 2009, la Demandada informó de que se había emitido una sentencia en el segundo caso de la Refinería Amazonas (Caso 153-93) y solicitaba permiso para presentar la sentencia y dos escritos como prueba. La Demandada también presentó una descripción de la sentencia y su relevancia.
158. Mediante carta de 28 de julio de 2009, el Tribunal invitó a los Demandantes a presentar comentarios respecto de la comunicación de la Demandada de 27 de julio de 2009, hasta el 31 de julio de 2009.
159. Mediante carta de 29 de julio de 2009 los Demandantes solicitaron permiso para presentar los comentarios respecto de la carta de la Demandada de 27 de julio de 2009, el 6 de agosto de 2009. El Tribunal accedió a la solicitud de los Demandantes el 30 de julio de 2009.
160. Mediante carta de 6 de agosto de 2009, los Demandantes presentaron sus comentarios en respuesta a la solicitud de la Demandada de 27 de julio de 2009 de admitir la sentencia ecuatoriana y los dos escritos. Los Demandantes objetaron a la admisión de la sentencia ecuatoriana como prueba. Sin embargo, en el caso de que el Tribunal accediera a la solicitud de la Demandada de que se admita la sentencia y los dos escritos, los Demandantes solicitaban que se les permitiese presentar un escrito adicional así como pruebas que lo sustenten.
161. Por correo electrónico de 8 de agosto de 2009, y por carta de 7 de agosto de 2009, los Demandantes y la Demandada presentaron sus respectivos Escritos sobre costas.
162. Por correo electrónico de 8 de agosto de 2009, los Demandantes presentaron un Escrito en respuesta a las nuevas pruebas de la Demandada, comentando las fuentes citadas en el segundo Escrito pos-audiencia de la Demandada.

163. Mediante carta de 11 de agosto de 2009, la Demandada respondió a los comentarios de los Demandantes de 6 de agosto de 2009, y se opuso a la presentación por parte de los Demandantes de documentos adicionales para el Tribunal.
164. El 14 de agosto de 2009, la Demandada presentó su contestación al Escrito de los Demandantes de 8 de agosto de 2009.
165. Mediante correo electrónico de 22 de agosto de 2009, la Demandada presentó su contestación al Escrito sobre costas de los Demandantes.
166. Mediante correo electrónico de 22 de agosto de 2009, los Demandantes presentaron su contestación al Escrito sobre costas de la Demandada y una réplica en respuesta a las nuevas pruebas de la Demandada.
167. Mediante carta de 24 de agosto de 2009, el Tribunal informó a las Partes de que aceptaba todas las pruebas presentadas por las Partes. El Tribunal también concedía a la Demandada permiso para presentar todos los documentos respecto de los que se había pedido permiso para presentar en el escrito de réplica de la Demandada de 14 de agosto de 2009, observando que el procedimiento estaba cerrado salvo para la presentación aprobada. Por último, el Tribunal notificó a las Partes que las informaría si tuviese preguntas adicionales, incluyendo cualquier cuestión sobre los Escritos sobre costas de las Partes.
168. Mediante correo electrónico de 28 de agosto de 2009, la Demandada presentó las pruebas para las cuales le había dado permiso el Tribunal en su comunicación de 24 de agosto de 2009.
169. Mediante carta de 15 de septiembre de 2009, la Demandada informó que se había emitido una sentencia en el Caso de los Productos Importados (Caso 154-93) y solicitó permiso para presentar la sentencia como prueba ante el Tribunal.
170. Mediante carta de 17 de septiembre de 2009, los Demandantes se opusieron a la admisión de la sentencia ecuatoriana como prueba. Mediante carta de 18 de septiembre de 2009, la Demandada presentó comentarios en contestación a la objeción de los Demandantes.

171. Mediante comunicación de 28 de septiembre de 2009, el Tribunal informó a las Partes de que, a pesar de que el procedimiento se mantenía cerrado, excepcionalmente admitía la nueva sentencia ecuatoriana a los autos. El Tribunal concedió permiso a la Demandada para presentar la sentencia junto con una breve nota explicando su relevancia hasta el 5 de octubre de 2009. El Tribunal también concedió permiso a los Demandantes hasta el 19 de octubre de 2009 para presentar comentarios sobre la relevancia de la sentencia para el presente caso.
172. Mediante carta de 2 de octubre de 2009, la Demandada presentó la sentencia de 10 de septiembre de 2009 en el Caso de los Productos Importados (Caso 154-93) y presentó comentarios sobre su relevancia. Mediante carta de 19 de octubre de 2009, los Demandantes presentaron sus comentarios sobre la relevancia de la sentencia.
173. El Tribunal emitió su Laudo Parcial sobre el fondo el 30 de marzo de 2010. A la vista de los razonamientos expuestos en el laudo, el Tribunal decidió lo siguiente:
1. **Del Laudo Interino del 1 de diciembre de 2008, el Tribunal recuerda las siguientes decisiones:**
 1. **Las objeciones de la Demandada son desestimadas.**
 2. **El Tribunal dispone de jurisdicción respecto a las demandas tal como las formularon los Demandantes en su segundo Escrito pos-audiencia con fecha del 12 de agosto de 2008 en el párrafo 116.**
 2. **La Demandada incumplió el artículo II(7) del TBI debido a una demora indebida por parte de los tribunales de Ecuador en dictar sentencia sobre siete casos presentados por TexPet, y es responsable por los daños resultantes que afectan a los Demandantes debido a ello.**

3. **Los Demandantes no han cometido un abuso del proceso y no existe impedimento para que presenten esta reclamación contra la Demandada.**
4. **En vista del fallo del Tribunal en la anterior sección 2 en cuanto al incumplimiento del artículo II(7) del TBI, y dado que la indemnización solicitada por los Demandantes con respecto a las reclamaciones adicionales no va más allá de la indemnización derivada de la reclamación sobre el artículo II(7), el Tribunal no requiere emitir un fallo sobre las reclamaciones de los Demandantes sobre otros incumplimientos del TBI o del derecho internacional consuetudinario.**
5. **Como resultado de la decisión del Tribunal en la anterior sección 2 sobre que la Demandada ha incumplido el artículo II(7) del TBI, la Demandada es responsable de los daños causados a los Demandantes por tal incumplimiento. El total de estos daños se decidirá por el Tribunal con la ayuda de un procedimiento dispuesto separadamente en una Orden Procesal del Tribunal para determinar qué impuestos, de existir, habrían sido debidos a la Demandada si no hubiera ocurrido el incumplimiento del artículo II(7) del TBI**
6. **La Demandada es responsable del pago del interés compuesto anterior al laudo conforme a la Tasa Preferencial de Nueva York (anual) sobre el monto final a ser pagado por la Demandada de conformidad con la anterior sección 5, desde el 22 de diciembre de 2006 y hasta la fecha en que este monto sea pagadero por la Demandada.**
7. **La Demandada será responsable del pago de un interés compuesto después del fallo conforme a la Tasa Preferencial de Nueva York (anual) sobre el monto fijado por el Tribunal, desde la fecha en que éste ordene el pago a la Demandada hasta la fecha en que dicho pago se realice.**
8. **El fallo relativo a los costos del arbitraje se difiere a una etapa posterior de este procedimiento.**
9. **Se rechazan las demás reclamaciones.**

174. El Tribunal emitió su OP VIII el 31 de marzo de 2010, respecto el Procedimiento Pericial sobre Impuestos. El Tribunal invitó a las Partes a acordar la cuantía, de existir, que debería ser descontada del total dispuesto en Laudo Parcial del Tribunal. El Tribunal también estableció un procedimiento para el nombramiento de peritos en derecho tributario ecuatoriano para que decidan sobre dichos asuntos tributarios, en caso de que las Partes fuesen incapaces de llegar a un acuerdo. Para mayor facilidad, las disposiciones pertinentes de la OP VIII se reproducen por completo a continuación:

1. Laudo Parcial sobre el fondo

El Tribunal reitera, de su **Laudo Parcial sobre el fondo de 29 de marzo de 2010**:

1.1. De sus Decisiones en la Sección I:

Como resultado de la decisión del Tribunal en la anterior sección 2 sobre que la Demandada ha incumplido el artículo II(7) del TBI, la Demandada es responsable de los daños causados a las Demandantes por tal incumplimiento. El total de estos daños se decidirá por el Tribunal con la ayuda de un procedimiento dispuesto separadamente en una Orden Procesal del Tribunal para determinar qué impuestos, de existir, habrían sido debidos a la Demandada si no hubiera ocurrido el incumplimiento del artículo II(7) del TBI.

1.2. De las consideraciones del Tribunal en la Sección H.VII, en particular:

[L]a determinación final de la cuantía de los daños que deberán concederse deberá ser analizada a través de un procedimiento que el Tribunal dispondrá en una orden independiente. Debe observarse que el objeto de tal procedimiento es determinar la cuantía de los daños de las Demandantes teniendo en cuenta la legislación fiscal ecuatoriana aplicable. El objeto no es establecer la cuantía de impuestos que impondrían las autoridades ecuatorianas hoy en día a un laudo arbitral.

2 Período de negociación

2.1. Se invita a las Partes a que intenten acordar la cuantía, de existir, que debería ser descontada del total dispuesto en la Tabla en el párrafo 549 del Laudo Parcial del Tribunal con base en cualquier legislación fiscal ecuatoriana aplicable, a la vista de los principios dispuestos en dicho Laudo Parcial.

2.2. En el caso de que las Partes sean incapaces de alcanzar un acuerdo antes del 31 de mayo de 2010, el Tribunal procederá con el procedimiento pericial detallado a continuación.

3 Procedimiento Pericial

3.1. En el caso de que no se llegara a un acuerdo conforme a la anterior sección 2 entre las Demandantes y la Demandada, cada parte nombrará a un experto en legislación fiscal ecuatoriana antes del 30 de junio de 2010.

3.2. El Tribunal también puede considerar nombrar a un experto en su nombre, cuyas atribuciones se determinarán en el momento de tal nombramiento de conformidad con el objeto de este procedimiento y el artículo 27 del Reglamento CNUDMI.

- 3.3. Los expertos nombrados por las Partes y el experto nombrado por el Tribunal, en el caso de que se nombre uno, colaborarán e intentarán presentar una propuesta conjunta al Tribunal en cuanto a la cuantía, de existir, que debe ser descontada del total dispuesto en la Tabla en el párrafo 549 de su Laudo Parcial con base en cualquier legislación fiscal ecuatoriana aplicable.
- 3.4. En el caso de que los anteriores expertos sean incapaces de presentar una propuesta conjunta antes del 30 de agosto de 2010, el Tribunal podrá solicitar propuestas individuales de cada experto o de cualquiera de ellos de acuerdo con las instrucciones que se establecerán por el Tribunal en ese momento.

4 Decisión del Tribunal sobre los Daños

Tras concluir los anteriores procedimientos, tomando sus resultados en consideración, el Tribunal tiene intención de decidir los daños que deben ser concedidos con base en su Laudo Parcial.

175. El 8 de abril de 2010, la CPA depositó una copia original del Laudo Parcial del Tribunal en la Corte del Distrito de La Haya.
176. Mediante correo electrónico de 1 de junio de 2010, los Demandantes transmitieron una solicitud en nombre de las Partes para prorrogar dos semanas las fechas en el calendario establecido en la OP VIII. Mediante carta de 2 de junio de 2010, el Tribunal confirmó la prórroga acordada por las Partes.
177. Mediante carta de 14 de junio de 2010, el Tribunal circuló una traducción en español del Laudo Parcial entre las Partes.
178. Mediante correo electrónico de 15 de junio de 2010, la Demandada informó al Tribunal de que las Partes no habían acordado una resolución sobre la cuestión de los impuestos planteada por el Tribunal en el Laudo Parcial y la OP VIII.
179. Mediante carta de 16 de junio de 2010, el Tribunal informó a las Partes de que procedería con el procedimiento de los peritos establecido en la OP VIII y que las Partes tenían hasta el 14 de julio de 2011 para identificar a sus respectivos peritos.
180. Mediante carta de 12 de julio de 2010, la Demandada, con el consentimiento de los Demandantes, solicitó al Tribunal que concediese una prórroga de dos semanas para que las

partes nombraran a sus respectivos peritos. Mediante carta de 13 de julio de 2010, el Tribunal concedió la prórroga solicitada.

181. Mediante correo electrónico de 28 de julio de 2010, los Demandantes proporcionaron al Tribunal una copia de cortesía del escrito presentado por la Demandada ante el Corte del Distrito de La Haya, solicitando la anulación del Laudo Interino y del Laudo Parcial del Tribunal.
182. Mediante cartas de 28 de julio de 2010, los Demandantes y la Demandada informaron al Tribunal de su nombramiento de Dr. Diego Almeida Guzmán y Dr. Javier Cordero Ordóñez, respectivamente, como sus peritos en derecho tributario ecuatoriano.
183. Mediante carta de 29 de septiembre de 2010, el Tribunal observó que no se había realizado propuesta por los peritos nombrados de parte dentro del plazo previsto en el párrafo 3.4 de la OP VIII (modificada) y que estaba considerando el nombramiento de peritos para que aconsejaran al Tribunal. El Tribunal también adjuntó un borrador de OP IX, estableciendo las atribuciones de los peritos del tribunal y el posterior procedimiento pericial. El Tribunal finalmente invitó a las Partes a presentar comentarios respecto de los peritos propuestos y el borrador de la OP IX antes del 8 de octubre de 2010, e invitó a los peritos nombrados de parte a comenzar de inmediato con la preparación sus informes individuales sobre impuestos.
184. Mediante correo electrónico de 29 de septiembre de 2010, los Demandantes, en nombre de las Partes, solicitaron al Tribunal prorrogar 15 días, hasta el 12 de octubre de 2010, la fecha límite para una propuesta conjunta por los peritos nombrados por las partes y que el plazo para comentar el borrador de la OP IX así como todos los demás plazos establecidos en el borrador de la OP IX se prorrogasen el mismo periodo. Los Demandantes también informaron al Tribunal de que las Partes podrían solicitar una prórroga adicional de 15 días si, antes del 12 de octubre de 2010, ambas Partes creían razonablemente que los peritos nombrados de parte podían alcanzar un acuerdo sobre una propuesta conjunta para el Tribunal.

185. Mediante carta de 29 de septiembre de 2010, el Tribunal informó a las Partes de que se concedía la prórroga solicitada de 15 días para presentar la propuesta conjunta por los peritos nombrados por las partes así como de los demás plazos.
186. Mediante correo electrónico de 1 de octubre de 2010, la Demandada informó al Tribunal del cambio de dirección de Mark Clodfelter, uno de los abogados de la Demandada.
187. Mediante carta de 7 de octubre de 2010, la CPA observó ciertos cambios realizados en los datos de contacto de los abogados de ambas partes conforme a las solicitudes de las Partes.
188. Mediante correo electrónico de 8 de octubre de 2010, los Demandantes, con la autorización de la Demandada, solicitaron que el Tribunal concediese una prórroga de 15 días, hasta el 26 de octubre de 2010, de la fecha límite para que los peritos nombrados por las partes acordaran una propuesta conjunta así como una prórroga idéntica de todos los plazos pendientes.
189. Mediante carta de 11 de octubre de 2010, el Tribunal informó a las Partes de que se concedía la extensión de 15 días de la fecha límite para la presentación de una propuesta conjunta por los peritos nombrados por las partes así como una prórroga idéntica de todos los demás plazos.
190. Mediante correo electrónico de 21 de octubre de 2010, los peritos nombrados por las partes, el Dr. Diego Almeida Guzmán y el Dr. Javier Cordero Ordóñez, presentaron una versión en español de su Informe Pericial Conjunto de fecha de 20 de octubre de 2010, incluyendo una Opinión Individual del perito nombrado por la Demandada, el Dr. Javier Cordero Ordóñez.
191. Mediante carta de 26 de octubre de 2010, el Tribunal solicitó a las Partes que presentasen cualesquiera comentarios que pudiesen tener respecto del Informe Pericial Conjunto, y en particular de la Opinión Individual del Dr. Javier Cordero Ordóñez antes del 10 de noviembre de 2010.
192. Mediante carta de 26 de octubre de 2010, el Dr. Javier Cordero Ordóñez emitió una clarificación adicional a su Opinión Individual.

193. Mediante correo electrónico de 29 de octubre de 2010, los peritos nombrados por las partes presentaron traducción al inglés de su Informe Pericial Conjunto de 20 de Octubre de 2010.
194. Mediante correo electrónico de 9 de noviembre de 2010, la Demandada, con la autorización de los Demandantes, solicitó que el Tribunal concediese una prórroga de siete días, hasta el 17 de noviembre de 2010, para que las Partes presentasen sus respectivos comentarios sobre el Informe Pericial Conjunto de los peritos nombrados por las partes.
195. Mediante carta de 10 de noviembre de 2010, el Tribunal concedió la prórroga solicitada sobre el plazo para los comentarios de las Partes sobre el Informe Pericial Conjunto.
196. Mediante cartas de 17 de noviembre de 2010, las Partes presentaron sus respectivos comentarios al Informe Pericial Conjunto. La Demandada observó que su presentación se realizaba sin perjuicio de las posiciones que ésta había tomado en la acción de anulación presentada ante los tribunales de los Países Bajos.
197. Mediante correo electrónico de 19 de noviembre de 2010, la Demandada proporcionó al Tribunal pruebas apoyando sus comentarios al Informe Pericial Conjunto y el índice correspondiente.
198. Mediante carta de 22 de noviembre de 2010, los Demandantes proporcionaron copias impresas de las pruebas y autoridades legales apoyando sus comentarios sobre el Informe Pericial Conjunto.
199. Mediante carta de 22 de noviembre de 2010, el Tribunal invitó a las Partes a que presentaran cualesquiera comentarios que éstas pudiesen tener sobre los comentarios recibidos de la otra Parte sobre el Informe Pericial Conjunto, así como una indicación de la cuantía a adjudicar por el Tribunal conforme a sus respectivas posiciones, antes del 3 de diciembre de 2010.
200. Mediante correo electrónico de 1 de diciembre de 2010, la Demandada solicitó, con la autorización de los Demandantes, que el Tribunal concediese una semana de prórroga, hasta el 10 de diciembre de 2010, para que las Partes presentasen sus comentarios en respuesta a los comentarios de la otra parte sobre el Informe Pericial Conjunto

201. Mediante carta de 1 de diciembre de 2010, el Tribunal concedió la extensión solicitada para la presentación de los comentarios de las Partes en respuesta a los comentarios de la otra parte sobre el Informe Pericial Conjunto.
202. Mediante carta de 10 de diciembre de 2010, las Partes presentaron sus respectivos comentarios en respuesta a los comentarios de la otra parte sobre el Informe Pericial Conjunto. La Demandada observó que su presentación se realizaba sin perjuicio de las posiciones que ésta había tomado en la acción de anulación presentada ante los tribunales de los Países Bajos.
203. Mediante carta de 17 de diciembre de 2010, la CPA informó a las Partes y al Tribunal de que ésta había sido informada de un cambio en el dominio de todas las direcciones de correo electrónico de la Oficina de la Procuraduría General de la República del Ecuador.
204. Mediante carta de de 4 de marzo de 2011, los Demandantes informaron al Tribunal del hecho de que el Dr. Javier Cordero Ordóñez, perito tributario del Ecuador había sido nombrado Conjuez Permanente de Justicia de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador.

E. Petitorio de las Partes

E.I. Petitorio de los Demandantes

205. Como se dispone en la Carta de los Demandantes de 10 de diciembre de 2010, los Demandantes solicitan al Tribunal que adjudique a los Demandantes el monto de 649.786.333 USD, incluyendo el interés compuesto hasta el 31 de diciembre de 2010 (C XVI, p. 13).

E.II. Petitorio de la Demandada

206. Como se dispone en la Carta de la Demandada de 10 de diciembre de 2010, la Demandada “solicita respetuosamente que el Tribunal no emita un Laudo Final que calcule la ‘pérdida real’ de los Demandantes a partir del 21 de diciembre de 2006 en una cantidad mayor a 50.534.097,20 USD” (R XV, ¶86).

F. Antecedentes de Hecho

207. Sujeto a mayor detalle en secciones posteriores en relación con cada asunto en particular, lo siguiente es un resumen de los hechos relevantes del presente arbitraje.
208. En 1964, el Gobierno ecuatoriano otorgó derechos a la explotación y producción de petróleo a TexPet mediante un contrato de concesión con la filial local de TexPet. Con el consentimiento del Gobierno, TexPet asignó la mitad de su interés propietario en la concesión a Gulf, formando así el Consorcio. TexPet sirvió como operadora de las actividades del Consorcio.
209. En septiembre del 1971, el Ecuador formó una entidad gubernamental, CEPE, que fue reemplazada en 1989 por una compañía estatal que la sucedió PetroEcuador.
210. El 6 de agosto de 1973, TexPet y Gulf celebraron un nuevo contrato de concesión, esto es, el Acuerdo de 1973, Exh. R-570, con el Ecuador y CEPE. Este nuevo acuerdo reemplazó el contrato de concesión de 1964. Según el Acuerdo de 1973, CEPE ejerció la opción de adquirir una participación del 25% en el Consorcio. Más adelante, también compró la participación de Gulf, llegando así a una participación del 62,5% en el Consorcio. TexPet era dueño del 37,5% restante, pero TexPet siguió actuando como operadora del Consorcio.
211. El Acuerdo de 1973 permitía a TexPet explorar y explotar las reservas petroleras en la región del Amazonas del Ecuador, pero requería que TexPet proveyera un porcentaje de su producción de petróleo crudo al Gobierno para ayudar a satisfacer la necesidad ecuatoriana de consumo interno. La República tenía derecho a fijar el precio doméstico al que adquiriría las contribuciones exigidas de TexPet. Una vez satisfecha la obligación de contribuir petróleo para consumo interno, TexPet tenía derecho a exportar el resto de su petróleo al precio de mercado internacional actual que siempre era significativamente más alto que los precios domésticos. Si el petróleo se utilizaba para otros propósitos que para satisfacer la necesidad de consumo doméstico, TexPet tenía derecho a recibir compensación al precio del mercado

internacional. Los apartados relevantes del Acuerdo de 1973 en su original en español y en la traducción al inglés acordada por las Partes se exponen a continuación:

Original en español	Traducción al inglés
<p>CLAUSULA DECIMA-NOVENA: ABASTECIMIENTO INTERNO</p> <p>19.1 Para el abastecimiento de las plantas refinadoras e industriales establecidas o que se establecieron en el País, el Ministerio del Ramo podrá exigir a los contratistas, cuando lo juzgue necesario, el suministro de un porcentaje uniforme del petróleo que les pertenece y efectuar entre ellos las compensaciones económicas que estime convenientes para que esas plantas se abastezcan con el petróleo crudo que sea el más adecuado, en razón de su calidad y ubicación.</p> <p>El porcentaje a que se refiere el inciso anterior se aplicará a todos los productores del País, incluyendo a CEPE y se determinará trimestralmente dividiendo el consumo interno nacional en barriles por día entre la producción total que corresponde a dichos productores, también expresada en barriles por día y multiplicando el resultado por cien.</p> <p>Se entiende que no existe obligación alguna para utilizar el petróleo que corresponde al Estado según el Artículo cuarenta y seis de la Ley de Hidrocarburos, en el consumo interno del País.</p> <p>19.2 Los contratistas se comprometen a suministrar, si el ministerio del Ramo lo pidiere, su parte proporcional, de cualquier volumen [sic] de petróleo crudo que fuese necesario para la producción de derivados destinados al consumo interno del País, calculada de acuerdo a lo previsto en el numeral anterior de esta cláusula. Esta obligación de los contratistas no será limitada por las disposiciones del numeral 19.3 de esta cláusula.</p> <p>19.3 En el caso de que las plantas refinadoras, industriales o petroquímicas ubicadas en el País elaboren derivados para la exportación y si para el efecto fuere necesario el suministro de un volumen [sic] adicional de crudo, después de haberse utilizado en dichas plantas todo el petróleo que corresponde al Estado de acuerdo con el Artículo cuarenta y seis de la Ley de Hidrocarburos y el que produzca o corresponda a CEPE por cualquier</p>	<p>CLAUSE 19: LOCAL SUPPLY</p> <p>19.1 For the supply of refining and industrial plants established or which may be established in the country, the respective Ministry may require from the contractors, when it deems it necessary, the supply of a uniform percentage of the oil belonging to them, and make the economic compensations it considers appropriate between them in order that such plants may be supplied with the crude oil which is the most appropriate by reason of its quality and location.</p> <p>The percentage referred to in the preceding paragraph shall be applied to all producers in the country, including CEPE, and will be determined quarterly by dividing the national domestic consumption in barrels per day by the total production corresponding to such producers, also expressed in barrels per day, and multiplying the result by 100.</p> <p>It is understood that there is no obligation whatsoever to use oil corresponding to the State pursuant to Article 46 of the Hydrocarbons Law in the internal consumption of the country.</p> <p>19.2 The contractors agree to supply, if the respective Ministry so requests, their proportionate part of whatever quantity of crude oil may be necessary for the production of derivatives for the internal consumption of the country, calculated in accordance with the provisions of the preceding numbered paragraph of this clause. This obligation of the contractors shall not be limited by the provisions of paragraph 19.3 of this clause.</p> <p>19.3 In the event that the refining, industrial or petrochemical plants located in the country manufacture derivatives for export and if the supply of an additional quantity of crude should be necessary for that purpose, after all oil corresponding to the State in accordance with Article 46 of the Hydrocarbons Law and that which is produced by or corresponds to CEPE for any reason has been utilized in said plants, the</p>

<p>concepto, el Ministerio del Ramo podrá exigir a los contratistas, del crudo que les pertenece, un porcentaje uniforme en relación al exigido a los demás productores del País. Tal porcentaje será calculado dividiendo el mencionado volumen [sic] adicional, expresado en barriles por día, para la producción total del País, después de deducir el volumen [sic] total que produzca o corresponda a CEPE por cualquier concepto, también expresado en barriles por día y multiplicando el resultado por cien. Tal porcentaje se aplicará a la producción total del área de los contratistas excluyendo la participación parcial o total que haya ejercido CEPE, según la cláusula quincuagésima segunda de este Contrato y el volumen [sic] resultante, será tal que permita disponer, para la exportación por parte de los contratistas, de un volumen de crudo de no menos del cuarenta y nueve por ciento del petróleo total producido en el área del contrato.</p> <p>19.4 El Estado autorizará a los contratistas la exportación del petróleo que les corresponda, una vez satisfechas las necesidades del País de acuerdo con lo establecido en los numerales anteriores de esta cláusula y en la 26.1.</p> <p>CLAUSULA VIGESIMA: PRECIOS DEL PETROLEO PARA REFINERIAS O INDUSTRIAS</p> <p>20.1 Los precios de los diversos tipos de petróleo crudo que se requieran para las refinerías o industrias de hidrocarburos establecidas en el País, destinadas al consumo interno de derivados, serán los señalados por el Ministerio del Ramo y para su determinación se tomarán en cuenta los costos de producción incluyendo las amortizaciones, tarifas de transporte y una utilidad razonable.</p> <p>20.2 Los precios de los diversos tipos de petróleo crudo que se requieran para las refinerías o industrias de hidrocarburos establecidas en el País, destinados a la elaboración de derivados o productos de exportación, serán convenidos de acuerdo a los precios del petróleo crudo en el mercado internacional.</p> <p>(Exh. C-4)</p>	<p>respective Ministry may require of the contractors, from the crude that belongs to them, a percentage equal to that required of the other producers in the country. Such percentage shall be calculated by dividing the said additional quantity, expressed in barrels per day, by the total production of the country, after deducting the total quantity produced by or corresponding to CEPE for any reason, also expressed in barrels per day, and multiplying the result by 100. Such percentage shall be applied to the total production from the contractors' area, excluding the partial or total participation elected by CEPE, pursuant to Clause 52 of this contract, and the resulting volume shall be such that will permit availability, for export by the contractors, of a volume of crude not less than 49% of the total oil produced in the contract area.</p> <p>19.4 The State will authorize the contractors to export the oil that corresponds to them once the requirements of the country are satisfied in accordance with the provisions of the preceding numbered paragraphs of this clause and paragraph 26.1.</p> <p>CLAUSE 20: OIL PRICES FOR REFINERIES OR INDUSTRIES</p> <p>20.1 Prices of the various types of crude oil required for hydrocarbon refineries or industries established in the country, for internal consumption of derivatives, shall be those determined by the respective Ministry, and for their determination production costs including amortization, transportation tariffs and a reasonable profit shall be taken into account.</p> <p>20.2 Prices of the various types of crude oil required for the hydrocarbon refineries or industries established in the country for the production of derivatives or products for export shall be agreed upon in accordance with the prices of crude oil on the international market.</p> <p>(Exh. R-570; Tr. II at 947:19-949:5)</p>
---	---

212. El 16 de diciembre de 1977, la República, CEPE, y TexPet firmaron un acuerdo complementario al Acuerdo de 1973 (el Acuerdo de 1977, Exh. R-3). Los apartados relevantes del Acuerdo de 1977 en su original en español y en la traducción al inglés acordada por las Partes se exponen a continuación:

Original en español	Traducción al inglés
<p>OBJETO DEL CONVENIO.-</p> <p>El presente convenio tiene por objeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promover la exploración tendiente al descubrimiento de nuevas reservas de petróleo; - Desarrollar en forma integral el área del contrato de 6 de agosto de 1973, a fin de incorporar a la producción petrolera nacional nuevos campos hidrocarburíferos; - Continuar realizando un adecuado mantenimiento de los pozos productivos, de conformidad con las especificaciones que aconseja la técnica; - Incentivar la inversión del consorcio en programas de recuperación secundaria y métodos mejorados de producción; y, - Lograr un incremento de la producción de petróleo, siempre dentro de las normas de conservación de reservas establecidas por el Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos. <p>[...]</p>	<p>OBJECT OF THE AGREEMENT.-</p> <p>The herein agreement has the object of, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promoting the exploration tending to the discovery of new oil reserves; - Developing in an integral way, the area of the contract of August 6 of 1973, in order to incorporate new hydrocarbon fields to the national oil production; - Continuing with the performance of an appropriate maintenance of the productive wells, in accordance with the specifications that the technique advised; - Fostering the investment of the Consortium in programs of secondary recovery and improved methods of production; and, - Achieving an increase of the production of oil, always within the rules of conservation of reserves established by the Ministry of Energy and Natural Resources. <p>[...]</p>
<p><u>Petróleo destinado a Consumo Interno</u></p> <p>De conformidad con lo que dispone el artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos y la cláusula 19 del contrato de exploración y explotación de hidrocarburos suscrito entre el Gobierno Nacional y las compañías Texaco Petroleum Company y Ecuadorian Gulf Oil Company, el 6 de agosto de 1973, el consorcio CEPE-Texaco Petroleum Company suministrará las cantidades de petróleo crudo que sean necesarias para el consumo interno del país.</p> <p>La Dirección General de Hidrocarburos, en forma trimestral y con quince días hábiles de anticipación al inicio de cada trimestre fijará un</p>	<p><u>Oil destined to Internal Consumption</u></p> <p>In accordance with what is set forth in article 31 of the Hydrocarbons Law and clause 19 of the Contract of Exploration and Exploitation of Hydrocarbons, subscribed between the National Government and the Companies Texaco Petroleum Company and Ecuadorian Gulf Oil Company, on August 6 of 1973, the Consortium CEPE-Texaco Petroleum Company shall supply the crude oil amounts that are necessary for the internal consumption of the country.</p> <p>The General Hydrocarbons Directorate, quarterly and with fifteen business days in advance to the initiation of each quarter shall fix an estimate of</p>

<p>estimado del Consumo Nacional Interno. Esto es, el volumen de crudo a ser procesado en las refinerías, menos el volumen de productos exportables y más el crudo de compensación.</p> <p>El volumen de productos exportables será multiplicado por el cociente que resulte de dividir el precio promedio ponderado de las exportaciones de productos de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana en el trimestre anterior, por el precio promedio ponderado de las ventas de petróleo crudo realizadas en dicho trimestre anterior, por la misma Corporación Estatal.</p> <p>En ambos casos, los precios serán ajustados a pago al contado. (No más de 20 días laborales de crédito.) En los veinte días posteriores a la finalización de cada trimestre, la misma Dirección realizará la reliquidación respectiva del Consumo Nacional Interno según la definición que antecede, tomando para ello los datos reales durante el trimestre sujeto a reliquidación. Los saldos que resulten de tal reliquidación se imputarán a los 90 días siguientes a la fecha de tal reliquidación, haciéndose los ajustes que correspondan.</p> <p>Los productos exportables serán de propiedad exclusiva de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana.</p> <p>(Exh. R-3)</p>	<p>the National Internal Consumption. This is, the volume of crude to be processed in the refineries, less the volume of exportable products and plus the crude oil of compensation.</p> <p>The volume of exportable goods shall be multiplied by the coefficient that results from dividing the weighted average price of the exports of products of the Ecuadorian State Oil Company in the previous quarter, for [sic] the average weighted price of the sales of crude oil performed in such quarter above mentioned, by the same State Company.</p> <p>In both cases, the prices shall be adjusted to cash payment. (No more than 20 business days of credit). In the following twenty days to the end of each quarter, the same Directorate shall perform the corresponding reliquidation of the National Internal Consumption according to the definition above mentioned, taking for that the real data during the quarter subject to reliquidation. The balances that result of such reliquidation shall be allocated the [sic] to 90 following days to the date of such reliquidation, performing the corresponding adjustments.</p> <p>The exportable products shall be exclusive property of the Ecuadorian Oil State Company.</p> <p>(Exh. R-3; Tr. II at 949:1-10)</p>
---	--

213. El 5 de marzo de 1987 un terremoto golpeó el Ecuador. Este terremoto dañó el oleoducto Transecuatoriano y cortó efectivamente la conexión entre los campos petrolíferos del interior por un lado y las refinerías de la costa y el puerto de Balao por el otro. Como resultado, la producción de petróleo crudo por el Consorcio se “confinó” y por lo tanto disminuyó significativamente. El oleoducto Transecuatoriano se reparó y la producción normal se reinició en agosto de 1987.
214. Durante este periodo de aproximadamente seis meses, el Consorcio entregaba todo el petróleo que podía transportar a las apropiadas refinerías o al puerto de Balao a través de un oleoducto alternativo que se conocía como el oleoducto Colombiano. Estas entregas incluían toda la cantidad de petróleo crudo que se produjo durante este periodo y todo el petróleo crudo que estaba almacenado. La República, a través de CEPE, intercambiaba petróleo crudo

de la Refinería Esmeraldas de cara a conseguir productos derivados para cubrir el consumo doméstico durante este periodo.

215. Tras la reparación del oleoducto Transecuatoriano y el reinicio de la producción normal de petróleo crudo y el transporte, la República exigió a TexPet, entre otros productores, que entregara aproximadamente 1,4 millones de barriles de petróleo crudo, para utilizar los ingresos que generan para rembolsar a CEPE y al Gobierno por el costo del petróleo que CEPE había tenido que intercambiar durante el periodo de seis meses en que el oleoducto Transecuatoriano estuvo inoperativo. TexPet fue compensada conforme al precio doméstico por este crudo requisado.
216. En 1990, PetroEcuador asumió el cargo de operadora del Consorcio. A pesar de los esfuerzos de las partes, no pudo concluirse ningún acuerdo para prolongar el Acuerdo de 1973, que caducaba el 6 de junio de 1992. TexPet, PetroEcuador y la República iniciaron entonces negociaciones para alcanzar un acuerdo respecto de todos los asuntos relativos al Acuerdo de 1973 y su terminación. En ese momento, TexPet también comenzó a liquidar sus operaciones en el Ecuador.
217. Entre diciembre de 1991 y diciembre de 1993, durante las negociaciones para el acuerdo, TexPet presentó siete casos de incumplimiento de contrato contra el Gobierno del Ecuador ante los tribunales ecuatorianos en los cuales demandó más de 553 millones USD en daños.
218. Los casos alegaban incumplimientos por parte del Ecuador de sus obligaciones hacia TexPet según los Acuerdos de 1973 y 1977, así como violaciones asociadas de las leyes ecuatorianas. En cinco de estos casos los Demandantes alegaron que la Demandada presentó números falsos sobre la necesidad y el consumo doméstico y así se apropió de más petróleo del que tenía derecho a adquirir al precio de mercado interno según los Acuerdos de Concesión. Otro caso trataba un asunto de fuerza mayor y el último trataba una alegación de incumplimiento del Acuerdo de Refinanciamiento de 1986.
219. El 14 de diciembre de 1994, la República, PetroEcuador y TexPet llegaron a un acuerdo, contenido en el Memorando de 1994, Exh. R-22, resolviendo todas las demandas pendientes para reparación ambiental que la República o PetroEcuador podrían haber presentado contra

TexPet. También expuso las obligaciones de TexPet respecto de la reparación ambiental de ciertas áreas en la región Oriente donde el Consorcio había operado.

220. El 4 de mayo de 1995, la República, PetroEcuador y TexPet celebraron el Acuerdo de Reparación Ambiental de 1995, Exh. R-23, para reemplazar el Memorando de 1994 y clarificar las responsabilidades de reparación ambiental de TexPet y los términos de su finiquito. Adjunto al Acuerdo de Reparación Ambiental de 1995 había un calendario titulado “Ámbito de Trabajo” que TexPet y sus contratistas estaban obligados a seguir. En septiembre del 1995, el Ámbito de Trabajo fue detallado más ampliamente en el Plan de Acción de Reparación de 1995, Exh. R-25, aceptado por las partes. De conformidad con el Acuerdo de Reparación Ambiental de 1995 y el Plan de Acción de Reparación de 1995, los contratistas de TexPet llevaron a cabo reparaciones ambientales de las áreas especificadas entre 1995 y 1998.
221. El 17 de noviembre de 1995, la República, PetroEcuador y TexPet llegaron a un acuerdo que resolvía la mayoría de las cuestiones pendientes, esto es, la Transacción Global de 1995, Exh. R-27. En ese acuerdo, las Partes finiquitaron la una a la otra, la mayoría de sus obligaciones pendientes resultantes del Acuerdo de 1973. La Transacción Global de 1995 confirmó, en el artículo 2.2, que el Acuerdo de 1973 “terminó, por cumplimiento del plazo acordado, el seis de junio de mil novecientos noventa y dos”, y en el artículo 4.5, que “se extinguen todos los derechos y todas las obligaciones que cada una de las partes tenga con respecto a la otra, emanados del [Acuerdo de 1973]”. Sin embargo, el finiquito en la Transacción Global de 1995 excluyó las obligaciones ambientales que ya fueron resueltas en otros acuerdos. El finiquito también excluyó, en el artículo 4.6, todas aquellas reclamaciones pendientes “judicialmente existentes entre las partes”, que incluían los siete casos judiciales de TexPet.
222. El TBI entre los Estados Unidos y el Ecuador entró en vigor el 11 de mayo de 1997.
223. Anteriormente, en noviembre de 1993, durante las negociaciones transaccionales entre TexPet y la República, un grupo de residentes de la región donde TexPet había operado las concesiones presentó una demanda colectiva bajo el nombre *Aguinda v. Texaco, Inc.* ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (la “demanda *Aguinda*”); Texaco, Inc. era la empresa matriz en última instancia de TexPet. La demanda

reclamaba compensación por daños ambientales causados por TexPet, así como medidas equitativas significativas y un mandato judicial prohibiendo a TexPet participar en cualquier otra actividad que pudiera suponer un daño ambiental.

224. Los demandantes en *Aguinda* argumentaron que sólo podrían conseguir las medidas colectivas que reclamaban bajo las leyes de los Estados Unidos y de una corte en los Estados Unidos. TexPet presentó una moción para desestimar la demanda *Aguinda* basada en varias teorías, incluyendo la de *forum non conveniens*. Esto requirió que las partes del litigio debatieran si los tribunales ecuatorianos constituían un foro alternativo adecuado para la demanda *Aguinda*. Durante el curso de los debates jurisdiccionales en primera instancia y varios grados de apelación desde el 17 de diciembre de 1993 hasta el 7 de abril de 2000, los abogados de TexPet afirmaron mediante declaraciones de peritos y escritos, entre otras cosas, que los tribunales del Ecuador eran eficientes y justos. En el curso de las apelaciones adicionales hasta que se emitió la sentencia definitiva en 2002, TexPet siguió argumentando que los tribunales ecuatorianos constituían un foro alternativo adecuado. La demanda *Aguinda* fue finalmente desestimada por los tribunales estadounidenses sobre la base del *forum non conveniens*. Los mismos demandantes iniciaron entonces una demanda contra TexPet en el 2003 ante un tribunal situado en el pueblo de Lago Agrio, el Ecuador (la “demanda *Lago Agrio*”).

225. Desde que terminó la demanda *Aguinda*, han transcurrido una serie de eventos involucrando al poder judicial del Ecuador. El 25 de noviembre de 2004, el Congreso promulgó una resolución declarando que la Corte Constitucional y la Corte Electoral fueron ilegalmente nombradas en el 2003. Destituyó a los miembros de ambas. El 5 de diciembre de 2004, una sesión especial del Congreso del Ecuador destituyó a toda la Corte Suprema. En la misma sesión, el Congreso también acusó de alto delito a seis de los jueces recién destituidos de la Corte Constitucional. El 15 de abril de 2005, el Presidente Gutiérrez declaró un estado de emergencia, suspendiendo ciertos derechos civiles y destituyendo a todos los jueces recientemente nombrados de la Corte Suprema. El Presidente Gutiérrez fue luego desbancado y huyó del país. Durante este periodo, el Relator Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados fue enviado al Ecuador para evaluar la situación y hacer recomendaciones. La misión de la Organización de los Estados Americanos en el Ecuador

también envió representantes al país. Muy poco después, el Congreso del Ecuador anuló la resolución del 2004 que destituyó a los jueces de la Corte Suprema pero no reintegró a estos antiguos jueces a sus puestos.

226. El 25 de abril de 2005, el Congreso del Ecuador aprobó cambios a la Ley Orgánica de la Función Judicial que introdujo un nuevo sistema para nombrar a los jueces de la Corte Suprema. Miembros de la comunidad internacional monitorearon y apoyaron al nuevo proceso de nombramiento y se nombraron nuevos jueces de la Corte Suprema en noviembre del 2005. Algunos observadores, por ejemplo la Comunidad Andina y la Red De La Justicia, declararon que consideraban que estas reformas reestablecían la independencia e imparcialidad del poder judicial, mientras otros, incluyendo la Misión de la OEA en el Ecuador y el Relator Especial de la ONU en su informe preliminar, permanecieron críticos respecto de estos esfuerzos.¹
227. Tras la conclusión del proceso de reconstitución de la Corte Suprema, el Relator Especial de la ONU presentó un “Informe de Seguimiento” el 31 de enero de 2006, en el que daba una valoración generalmente positiva del proceso:

En virtud de las recomendaciones realizadas por el Relator Especial en su informe preliminar, las instituciones ecuatorianas han creado un Comité de Calificaciones que elige a los nuevos jueces de la Corte Suprema de manera transparente, con revisión pública, bajo la supervisión de cuerpos nacionales e internacionales y con la participación de jueces de otros países de la región.²

No obstante, el Relator Especial continuaba criticando ciertos aspectos del poder judicial ecuatoriano y subrayaba “la urgente necesidad de [seguir] reformar el poder judicial al completo”.³

¹ COMISIÓN INTER-AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, MISIÓN DE LA OEA EN ECUADOR, INFORME AL CONSEJO PERMANENTE SOBRE LA SITUACIÓN EN ECUADOR, 20 de mayo de 2005; LEANDRO DESPOUY, INFORME DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES Y ABOGADOS, INFORME PRELIMINAR EN UNA MISIÓN EN ECUADOR, 29 de marzo de 2005.

² LEANDRO DESPOUY, INFORME DE SEGUIMIENTO PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES Y ABOGADOS, MISIÓN DE SEGUIMIENTO EN ECUADOR, 31 de enero de 2006, en pág. 2.

³ *Id.* ¶36.

228. El 21 de diciembre de 2006, los Demandantes presentaron su Notificación de arbitraje, dando inicio así al presente procedimiento arbitral. En ese momento, seis de los siete casos de los Demandantes estaban pendientes en primera instancia. El séptimo había sido recientemente desestimado sobre la base de abandono. La desestimación se rechazó en apelación.
229. En enero del 2007, el recientemente elegido Presidente Rafael Correa hizo un llamamiento para un referendo para establecer una Asamblea Constituyente con el propósito de crear una nueva constitución. A pesar de una oposición inicial por parte del Congreso y de la Corte Electoral, al final se aprobó la celebración del referéndum. Pero cuando el Presidente Correa modificó la ley orgánica de la Asamblea Constituyente que debía ser propuesta en el referéndum y la Corte Electoral aprobó estos cambios, el Congreso destituyó al Presidente de la Corte Electoral en lo que parecía una tentativa de bloquear el referéndum. Apoyando al poder ejecutivo, las fuerzas armadas y la policía impidieron físicamente que el Congreso se reuniera en sesión para revocar la medida del Presidente Correa. Algunos de los diputados expulsados acudieron a la Corte Constitucional que finalmente dictó que su expulsión era ilegal. Los nuevos diputados que los habían reemplazado respondieron mientras tanto, destituyendo a la Corte Constitucional entera e inmediatamente después nombraron a un miembro del partido político del Presidente Correa como jefe de una nueva Corte Constitucional. En medio de los anteriores eventos, el 15 de abril de 2007, se votó el referéndum que resultó en un voto popular en favor del establecimiento de una Asamblea Constituyente.
230. El 30 de septiembre de 2007, se eligieron los diputados de la Asamblea Constituyente. El 27 de noviembre de 2007, la Asamblea Constituyente destituyó al Congreso y declaró que gozaba de autoridad absoluta. En particular, declaró que tenía el poder de destituir y sancionar a miembros del poder judicial que violaran sus decisiones. También adoptó un proyecto de reforma judicial, quejándose de la corrupción del poder judicial. El 14 de diciembre de 2007, la Asamblea Constituyente introdujo un tope en los salarios de todos los funcionarios públicos, ordenando que no podían ganar más que el Presidente. Esta medida tenía el efecto, entre otras cosas, de reducir los salarios de los jueces más del 50%. Como consecuencia, un número de jueces dimitió.

231. El 8 de enero de 2008, la Corte Constitucional desestimó un caso cuestionando el poder absoluto de la Asamblea Constituyente. La Corte Constitucional dictó que las decisiones de la Asamblea Constituyente no estaban sujetas al poder de ningún otro órgano de gobierno. En febrero del 2008, el Presidente actual de la Corte Suprema del Ecuador afirmó en declaraciones públicas que la Asamblea Constituyente goza de autoridad absoluta y que esto significa que en el Ecuador sólo existe parcialmente un estado de derecho: *“No podemos cubrir el sol con un dedo; la realidad jurídica y constitucional que vive el país es una realidad a medias, no vivimos en toda su plenitud en un estado de derecho”* [“We cannot deny it: the judicial and constitutional reality in our country is a partial reality; we are not fully living in a state of law”] (Exh. C-104).
232. De los siete casos de los Demandantes en cuestión, uno sigue pendiente en primera instancia, dos están pendientes de apelaciones en curso, dos han sido desestimados y están ahora archivados, y dos han sido objeto de sentencias recientes. Varios de los casos han sido objeto de actividad posterior a la entrega de la Notificación de arbitraje.

Tabla 1. Los Siete Casos de los Demandantes ante los Tribunales ecuatorianos⁴

Nº de Caso	Materia	Fecha de Presentación	Antecedentes Procesales	Estado Actual
23-91	Acuerdo de 1973 (Refinería Esmeraldas)	17 dic 1991	Etapa probatoria (hasta ago 1995) Auto para sentencia (13 dic 2002) Auto para sentencia (29 ene 2004) Sentencias de declaración de nulidad de 13 dec 2002 y 29 ene 2004(17 jun 2004) Desestimado-prescripción (29 ene 2007) Apelación presentada (9 feb 2007) Apelación desestimada (7 mar 2008) Casación presentada (4 abr 2008) Casación desestimada (14 mayo 2008) Apelación de hechos presentada (16 mayo 2008) Apelación de hechos desestimada (9 jun 2008)	Cerrado desde el 9 jun 2008

⁴ La información incluida en esta tabla refleja la última información facilitada por las Partes. Debería observarse que el orden de los casos expuestos en esta tabla difiere de la tabla que se encuentra en la sección equivalente en el Laudo Interino del Tribunal de 1 de diciembre de 2008. Una Tabla de Casos adicional, que contiene antecedentes procesales más detallados de los casos de TexPet ante los juzgados ecuatorianos se adjuntó al Laudo Parcial como Apéndice 1.

152-93	Acuerdos de 1973/1977 (Refinería Esmeraldas)	10 dic 1993	Etapa probatoria (hasta mediados de 1996) Auto para sentencia (22 may 2002)	Pendiente en primera instancia
7-92	Acuerdo de 1973 (Refinería Amazonas)	15 dic 1992	Fecha fijada para nombramiento de peritos (5 may 1993) Moción de recusación contra el Presidente de la Corte Suprema (4 mar 1994) Orden recusando al Presidente de la Corte Suprema (6 may 1994) Declarado abandonado (9 abr 2007) Apelación presentada (25 abr 2007) Apelación desestimada (20 may 2008) Casación presentada (27 may 2008) Casación desestimada (24 jun 2008) Apelación de hechos presentada (30 jun 2008) Apelación de hechos desestimada (16 jul 2008)	Cerrado desde el 16 jul 2008
153-93	Acuerdos de 1973/1977 (Refinería Amazonas)	14 dic 1993	Informes de peritos presentados (31 oct 1996) Auto para sentencia (12 oct 1998) Auto para sentencia (22 may 2002) Sentencia a favor del Gobierno de Ecuador (14 jul 2009)	Sentencia en primera instancia
154-93	Acuerdo de 1973 (Productos importados)	14 dic 1993	Etapa probatoria (8 jul 1997) Auto para sentencia (8 oct 1997) Auto para sentencia (21 may 2002) Sentencia a favor del Gobierno de Ecuador (10 sep 2009)	Sentencia en primera instancia
8-92	Acuerdo de 1973 (Fuerza mayor – terremoto)	15 abr 1992	Moción de recusación contra el Presidente de la Corte Suprema (4 mar 1994) Orden recusando al Presidente de la Corte Suprema (8 jun 1994) Etapa probatoria (hasta mar 1995) Auto para sentencia (18 jul 1995) Declarado abandonado (2 oct 2006) Anulado en apelación (22 ene 2008) Desestimado - prescripción (1 jul 2008) Apelación presentada (2 jul 2008)	Apelación pendiente
983-03 (antes 6-92)	Acuerdo de Re-financiamiento de 1986 (Intereses sin pagar)	15 abr 1992	Etapa probatoria (hasta mar 1995) Transferencia de tribunal (oct 2003) Auto para sentencia (6 feb 2007) Fallo a favor de TexPet (26 feb 2007) Apelación por CEPE (1 mar 2007) Apelación por TexPet (12 mar 2007)	Apelación pendiente

233. El primer caso de la Refinería Esmeraldas, Caso 23-91, se presentó el 17 de diciembre de 1991. A principios de agosto de 1995 se completó la fase probatoria. En diciembre de 2002 y enero de 2004, se emitieron autos para sentencia. El tribunal posteriormente desestimó el caso el 29 de enero de 2007, basándose en el periodo de prescripción de dos años dispuesto en una ley sobre venta al consumidor. El 9 de febrero de 2007, TexPet presentó una apelación a esa sentencia. El 7 de marzo de 2008, la desestimación por prescripción se confirmó en apelación. El 4 de abril de 2008, TexPet presentó un recurso de casación. Este fue desestimado el 14 de mayo de 2008. El 16 de mayo de 2008, TexPet presentó una apelación de hechos. Ésta fue desestimada el 9 de junio de 2008. El caso queda ahora cerrado por completo.
234. El segundo caso de la Refinería Esmeraldas, caso 152-93, se presentó el 10 de diciembre de 1993. La etapa probatoria fue completada a mediados de 1996 y el 22 de mayo de 2002 se dictó un auto para sentencia, indicando que el proceso se había cerrado y quedaba listo para dictar sentencia. Hasta la fecha no ha habido ninguna decisión en primera instancia.
235. El primer caso de la Refinería Amazonas, caso 7-92, fue presentado el 15 de abril de 1992. El 5 de mayo de 1993, el tribunal fijó una fecha para que los peritos aceptaran oficialmente sus nombramientos y llevaran a cabo la inspección judicial de documentos. La aceptación oficial no tuvo lugar. Entre julio de 1993 y febrero de 2007, TexPet solicitó en repetidas ocasiones que el tribunal fijara una nueva fecha para que los peritos aceptaran sus nombramientos y procedieran a la etapa probatoria. El caso fue desestimado el 9 de abril de 2007 por presunto abandono de la causa por los Demandantes. Los Demandantes presentaron una apelación contra esta desestimación el 25 de abril de 2007. El 20 de mayo de 2008, la apelación de TexPet fue desestimada. El 27 de mayo de 2008, TexPet presentó un recurso de casación. Este fue desestimado el 24 de junio de 2008. El 30 de junio de 2008, TexPet presentó una apelación sobre los hechos. Esta fue desestimada el 16 de julio de 2008. El caso está ahora cerrado.
236. El segundo caso de la Refinería Amazonas, caso 153-93, se presentó el 14 de diciembre de 1993. En este caso todas las declaraciones de peritos fueron presentadas antes del 31 de octubre de 1996 y se emitió un auto para sentencia el 12 de octubre de 1998 y otra vez el 22

de mayo de 2002. El 14 de julio de 2009, el Presidente de la Corte Provincial de Pichincha (anteriormente la Corte Superior de Quito) emitió una sentencia a favor del Gobierno del Ecuador.

237. El caso de los Productos Importados, caso 154-93, se presentó el 14 de diciembre de 1993. En ese caso, la etapa probatoria se completó el 8 de julio de 1997, y se emitió un auto para sentencia el 8 de octubre de 1997 y otra vez el 21 de mayo de 2002. El 10 de septiembre de 2009, el Presidente de la Corte Provincial de Pichincha (anteriormente la Corte Superior de Quito) emitió una sentencia a favor del Gobierno del Ecuador.
238. El caso de Fuerza Mayor, caso 8-92, se presentó el 15 de abril de 1992. En marzo del 1995, se completó la etapa probatoria. Se emitió un auto para sentencia en ese caso el 18 de julio de 1995. Después de la Notificación de arbitraje, el tribunal desestimó el caso el 2 de octubre de 2006 por abandono de la demanda. Esa desestimación fue revocada el 22 de enero de 2008 sobre la base de que ya se había emitido un auto para sentencia. El caso regresó al tribunal de primera instancia y el 1 de julio de 2008 fue desestimado de nuevo por prescripción fundada en una disposición de una ley sobre la venta al consumidor que fija un periodo de prescripción de dos años para ventas al por menor. El 2 de julio de 2008, TexPet presentó una apelación contra esta última sentencia y esa apelación sigue pendiente.
239. El último caso, presentado bajo el Acuerdo de Refinanciamiento, se presentó el 15 de abril de 1992 y originalmente fue numerado 6-92. La etapa probatoria fue completada en marzo del 1995. En octubre del 2003, el tribunal decidió que no era competente para conocer del caso y lo mandó a otro tribunal (y lo renombró Caso 983-03). El nuevo tribunal emitió un auto para sentencia el 6 de febrero del 2007. Después de la Notificación de arbitraje, el 26 de febrero de 2007, el tribunal dictó una sentencia a favor de TexPet. Sin embargo, la sentencia establecía que la cuantía debía abonarse al “representante legal”. Según los Demandantes esto les ha impedido cobrar la condena porque, conforme al derecho ecuatoriano, sólo las compañías nacionales pueden tener “representantes legales”, mientras que las compañías extranjeras sólo actúan a través de “representantes de hecho”. Ambas Partes han presentado apelaciones a la sentencia y esta apelación sigue pendiente.

G. Consideraciones del Tribunal

240. El Tribunal ha considerado los extensos argumentos legales y de hecho presentados por las Partes en sus presentaciones escritas y orales, los cuales el Tribunal ha encontrado todos útiles. En el presente Laudo, el Tribunal expone los argumentos de las Partes más relevantes para tomar sus decisiones. Las razones del Tribunal, sin repetir todos los argumentos presentados anteriormente por las Partes, tratan lo que el Tribunal mismo considera que son factores determinantes necesarios para decidir los asuntos en este caso.

G.I. El Informe Pericial Conjunto y la Opinión Individual

241. Los Peritos Tributarios nombrados por las Partes emitieron su Informe Pericial Conjunto sobre Cuestiones Tributarias el 20 de octubre de 2010. En su propuesta conjunta al Tribunal contenida en ese informe, el Dr. Diego Almeida Guzmán y el Dr. Javier Cordero Ordóñez, actuando como peritos tributarios nombrados por las partes en el presente arbitraje, concluyeron lo siguiente.

1. El Impuesto Aplicable a los Daños Directos

242. Los Peritos Tributarios concluyen que la Tarifa del Impuesto Unificado del 87,31% aplica al monto de “Daños Directos” que surge de los incumplimientos contractuales por el Ecuador. Los “Daños Directos” consisten en los ingresos petroleros que son aquellos que derivan de la exploración y explotación de hidrocarburos, calificados como “renta petrolera”, que TexPet habría recibido de no haberse producido los incumplimientos contractuales reclamados ante los tribunales ecuatorianos (Informe Pericial Conjunto, ¶16).
243. Según los Peritos Tributarios, en la fecha en que la Notificación de arbitraje fue presentada, la legislación vigente era (a) el Decreto Supremo No. 982, publicado en el Registro Oficial No. 945 del 4 de diciembre de 1975 (reformado) que estableció el “Impuesto Unificado” para

la actividad petrolera, con una tarifa del 87,31%; y (b) el Régimen Legal Tributario Interno (Informe Pericial Conjunto, ¶17).

244. Los Peritos Tributarios exponen que la Tarifa del Impuesto Unificado del 87,31% (a) es la ley aplicable puesto que se encontraba en vigor como parte de la legislación ecuatoriana en la fecha en que la demanda arbitral fue presentada; (b) aplica de manera particular a aquellos “Daños Directos” referidos en el Laudo Parcial puesto que constituyen, como se ha mencionado previamente, “renta petrolera” según las reclamaciones de TexPet ante los tribunales ecuatorianos; y (c) complementariamente, es también aplicable porque la Disposición Transitoria No. 5 del Régimen Legal Tributario Interno se refiere específicamente a “contratos suscritos” por Texaco Petroleum y prevé que “[l]as empresas *Texaco Petroleum Co. y City Investing Co. que han suscrito contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, pagarán el impuesto unificado a la renta del ochenta y siete punto treinta y uno por ciento*”. Los Peritos Tributarios ponen énfasis en que la Disposición Transitoria se refiere a “contratos suscritos” y no a “contratos vigentes” por lo que el Impuesto Unificado del 87,31% se encuentra en vigor y resulta aplicable al presente caso. Además, los Peritos Tributarios observan que, desde la fecha del Informe Pericial Conjunto, el Decreto Supremo No. 982 no ha sido derogado (Informe Pericial Conjunto, ¶¶18-19).
245. Por lo tanto, el monto de “Daños Directos” sufridos por TexPet está sujeto al Impuesto Unificado del 87,31% el cual se encontraba en vigor en ambas fechas en que se produjeron los incumplimientos del Acuerdo de 1973 y en que se presentó la Notificación de arbitraje (Informe Pericial Conjunto, ¶20).

2. El Impuesto Aplicable a los Intereses

246. Los Peritos Tributarios además concluyen que la Tarifa del Impuesto a la Renta del 25% aplica al monto de “Intereses” sobre los Daños Directos determinados por el Tribunal. Los Peritos Tributarios observan que el “Interés” consiste en interés simple según la Tasa Preferencial de Nueva York desde la fecha en que se presentaron los casos judiciales (esto es, la fecha en que el Ecuador fue puesto en mora) hasta la Notificación de arbitraje del 21 de diciembre de 2006. Este monto de intereses constituye la indemnización por la mora en el

pago conforme a los artículos 1567 y 1573 del Código Civil ecuatoriano (Informe Pericial Conjunto, ¶¶21-22).

247. Según los Peritos Tributarios, de conformidad con los artículos 1, 2, y 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno (codificación del 2004), los intereses constituyen ingresos de fuente ecuatoriana y, en virtud del artículo 37 del mismo cuerpo legal, resulta aplicable la Tarifa del Impuesto a la Renta del 25%. Los Peritos Tributarios sostienen que ellos no conocen ninguna disposición que conceda una exención tributaria a los intereses devengados establecidos en el Laudo Parcial sobre el Fondo (Informe Pericial Conjunto, ¶¶23-24).

3. La Opinión Individual del Dr. Cordero Ordóñez

248. Al final del Informe Pericial Conjunto, el Dr. Javier Cordero Ordóñez proporciona una Opinión Individual, declarando lo siguiente:

Yo, Dr. Javier Cordero Ordóñez, hago notar al Tribunal que de no haberse producido el incumplimiento contractual por parte de la República del Ecuador, a TexPet le hubiese correspondido recibir el valor monetario de sus exportaciones de petróleo (US\$ 345.558.145), neto del Impuesto Unificado de la Renta del 87,31% (US\$ 309.564.716,40), esto es solamente la suma de US\$ 44.993.428,60. Por lo tanto, es mi opinión que siendo esta suma la efectiva correspondiente a los Daños Directos, los Intereses deben ser calculados sobre este valor (US\$ 44.993.428,60) y no sobre el monto bruto de US\$ 345.558.145. Adicionalmente, advierto que de conformidad con la legislación ecuatoriana, no cabe liquidar intereses a favor de TexPet sobre valores que no le corresponden recibir.

(Informe Pericial Conjunto, p. 12)

249. En su carta de 26 de octubre de 2010, el Dr. Cordero además aclara su Opinión Individual de la siguiente manera:

Al final del informe conjunto, yo expreso mi opinión individual sobre como el 87.31% del Impuesto Unificado reduce el daño directo y, consecuentemente, disminuye la base sobre la cual el interés simple sería calculado, por lo tanto reduciendo el interés proporcionalmente (v.g. en un 87.31%)

Finalmente, el 25% sobre los intereses sería entonces aplicable a los intereses recalculados. En suma, los expertos no estamos de acuerdo solamente en cuanto a si el Tribunal nos permitió recalcular intereses sobre la nueva base de daños directos.

(Carta del Dr. Cordero Ordóñez de fecha 26 de octubre de 2010, pp. 1-2)

G.II. El Laudo Parcial y el Mandato de los Peritos Tributarios

1. Argumentos de los Demandantes

250. Preliminarmente, los Demandantes solicitan al Tribunal que ignore la Opinión Individual del Dr. Cordero y la carta de 26 de octubre de 2010, ya que exceden el mandato que el Tribunal le otorgó a éste y suponen un intento de reabrir asuntos que fueron enteramente y definitivamente decididos en su Laudo Parcial.
251. Los Demandantes alegan que, en su Laudo Parcial, el Tribunal ya cuantificó de manera definitiva las cantidades apropiadas de principal e intereses que un tribunal ecuatoriano habría adjudicado en una hipotética sentencia judicial en diciembre de 2006. El Tribunal también dictaminó que un tribunal ecuatoriano no habría deducido impuestos a partir de su sentencia. Los Demandantes acusan a la Demandada de tratar de evadir estas decisiones mediante la creación de una distinción artificial entre la aplicación de los impuestos por un tribunal ecuatoriano “en la determinación del monto de la sentencia” y “la aplicación judicial de los impuestos a los montos ya dictados en la sentencia”. Sin embargo, según los Demandantes, el Tribunal rechazó ambas metodologías en su Laudo Parcial (C XV, p. 2-3; CXVI, p. 4).
252. Los Demandantes observan que las Partes han presentado estas cuestiones de manera completa durante la fase del fondo del arbitraje y que, si la Demandada hubiese creído que TexPet no tenía derecho a percibir intereses sobre el monto total del principal o que un tribunal ecuatoriano habría sustraído el Impuesto Unificado como parte de su análisis del “lucro cesante”, esta habría presentado estos argumentos en ese momento. A pesar de haber presentado con anterioridad varias teorías diferentes respecto de la supuesta sustracción de impuestos sobre los daños por un tribunal ecuatoriano, la Demandada nunca argumentó que un tribunal ecuatoriano habría adjudicado intereses sobre una base después de impuestos. Para los Demandantes, al declarar que “un tribunal nacional ecuatoriano no habría deducido impuestos a partir de su sentencia”, el Tribunal estaba rechazando todas las teorías de la Demandada y aceptando los argumentos de los Demandantes (C XV, p. 3; C XVI, p. 4-6).

253. Los Demandantes además observan que el mandato del Tribunal a los peritos estaba limitado a “emitir una opinión sobre los impuestos—de existir—aplicables a una hipotética sentencia judicial ecuatoriana en diciembre de 2006 que *ya incluía* un cálculo final de intereses”. El intento del Dr. Cordero de reabrir el cálculo de intereses del Tribunal viola principios generales del derecho internacional como aquellos incorporados en el artículo 32 del Reglamento de la CNUDMI, el cual estipula que “el laudo se dictará por escrito y *será definitivo, inapelable y obligatorio para las partes*”. Los Demandantes además aluden a la doctrina general de que “los laudos arbitrales son definitivos y susceptibles de impugnación sólo en foros limitados, como procedimientos de anulación” y citan los casos *Amco c. Indonesia*⁵ y *Waste Management c. Mexico*⁶ (C XV, p. 4).
254. Según los Demandantes, la Demandada interpreta de manera errónea el párrafo 552 del Laudo Parcial cuando afirma que el alcance del mandato de los Peritos Tributarios consistía en la “cuantificación y evaluación de los daños” en el arbitraje. Los Demandantes sostienen que, en su Laudo Parcial, el Tribunal no estableció el mandato de los Peritos Tributarios sino que “simplemente estaba analizando los principios que *éste* aplicaría con respecto a los daños”. En cambio, es en la OP VIII donde el Tribunal estableció el mandato de los peritos de “intentar[án] presentar una propuesta conjunta al Tribunal en cuanto a la cuantía, de existir, que debe ser descontada del total dispuesto en la Tabla en el párrafo 549 de su Laudo Parcial con base en cualquier legislación fiscal ecuatoriana aplicable”. Según los Demandantes, el mandato concedido a los Peritos Tributarios era por tanto el de analizar las consecuencias fiscales de una sentencia ecuatoriana que adjudicó daños en un monto que el Tribunal ya había determinado. Los Demandantes sostienen que “incluso los peritos tributarios entendieron que ‘el Tribunal delimitó el alcance de los informes a ser emitidos por los Peritos Tributarios’ en la Orden Procesal No. 8, la cual ellos citan en su informe conjunto” (C XVI, pp. 3-4).

⁵ AMCO c. La República de Indonesia, Caso CIADI N° ARB/81/1, Caso presentado de nuevo, Decisión sobre Jurisdicción (10 de mayo de 1988), 3 ICSID REV.—FILJ 166, ¶30 (1988) [en adelante *Amco II*].

⁶ Waste Management, Inc. c. Estados Unidos Mexicanos, Caso CIADI N° ARB(AF)/00/3, Decisión sobre Objeción Preliminar de México relativa al Procedimiento Previo (26 de Junio de 2002), 6 ICSID REP. 549 (2004) [en adelante *Waste Management*].

255. Además, los Demandantes sostienen que al impugnar el Laudo Parcial ante los Tribunales holandeses, la Demandada ha reconocido que el Laudo y todo su contenido es ahora cosa juzgada conforme a la legislación holandesa. Esto es así porque el artículo 1059(1) del Código de Procedimiento Civil holandés establece que “[s]ólo un laudo final o parcialmente final es capaz de adquirir fuerza de cosa juzgada”. Mientras tanto, el artículo 1064(3) del Código de Procedimiento Civil holandés establece que “[u]na solicitud de anulación puede presentarse tan pronto como el laudo ha adquirido fuerza de cosa juzgada”. Por lo tanto, la Demandada ni siquiera habría podido presentar su acción de anulación del Laudo Parcial a menos que éste hubiese adquirido efecto de cosa juzgada conforme a la legislación holandesa. De hecho, mediante la interposición del recurso de anulación del Laudo Parcial en la Corte del Distrito de La Haya, “el Ecuador ha reconocido de manera efectiva que el laudo ha adquirido efecto de cosa juzgada entre las Partes” (C XV, p. 4).
256. Adicionalmente, el 4 de marzo de 2011, los Demandantes presentaron una carta informando al Tribunal de que el 28 de enero de 2011 el Dr. Cordero había sido nombrado como Conjuez Permanente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Los Demandantes observaron que el Dr. Cordero fue nombrado justo tres meses después de presentar su Opinión Individual y su carta aclarando esa opinión, la cual los Demandantes alegan “contenía graves errores y demostraba una fuerte tendencia a favor de reducir el monto del laudo sirviendo de ese modo a los intereses del Ecuador” (C XVII).

2. Argumentos de la Demandada

257. Según la Demandada, la Opinión Individual del Dr. Cordero se encuentra bien dentro del amplio mandato de los Peritos Tributarios. El párrafo 3.3 de la OP VIII no especifica en qué fase de los procedimientos ecuatorianos debe realizarse la deducción con base en la legislación tributaria ecuatoriana aplicable, y no excluye la consideración de cualesquiera deducciones que podrían formar parte del cálculo apropiado por un tribunal ecuatoriano de los daños por lucro cesante a adjudicar en su sentencia. El mandato de los Peritos Tributarios tal y como se estableció en la OP VIII era el de “colaborar e intentar presentar una propuesta conjunta al Tribunal *en cuanto a la cuantía, de existir, que debe ser descontada del total dispuesto en la Tabla en el párrafo 549* de su Laudo Parcial con base en cualquier legislación

fiscal ecuatoriana aplicable”. En ningún lugar el Tribunal “declaró que las cantidades de interés en la Tabla en el párrafo 549 [del Laudo Parcial] eran ‘un cálculo final de intereses’”. Más bien, el Tribunal informó de que “el total de estos daños *se decidirá por el Tribunal* con la ayuda de un procedimiento dispuesto separadamente en una Orden Procesal del Tribunal para determinar qué impuestos, de existir, habrían sido debidos a la Demandada si no hubiera ocurrido el incumplimiento del artículo II(7) del TBI” y “que el objeto de dicho procedimiento es establecer la cuantía de las pérdidas de los Demandantes, considerando las leyes tributarias aplicables del Ecuador”. El Tribunal afirma claramente que cualquier decisión final sobre los daños quedaba aplazada hasta, y dependería de, la conclusión de un procedimiento especial (R XV, ¶¶8-13).

258. Sin embargo, la Demandada observa que aun si las directrices del Laudo Parcial respecto de la cuantía fuesen vinculantes para los Peritos Tributarios, la Opinión Individual del Dr. Cordero es completamente coherente con ellas. No sólo el Tribunal ya discutió los montos que TexPet habría recibido en virtud de los Acuerdos de 1973 y 1977, de no haber ocurrido el incumplimiento contractual, sino que también dejó claro que dichos montos debían evitar adjudicar a TexPet una “ganancia inesperada”. El Tribunal dejó claro en varias partes de su Laudo Parcial que las cantidades en la Tabla en el párrafo 549 eran sólo un punto de partida y que los pasos siguientes a este punto de partida incluyen la aplicación de la legislación tributaria ecuatoriana con el fin de evitar una compensación en exceso:

Para calcular el daño causado a los Demandantes, el Tribunal *comienza desde* la suma principal que un juez de Ecuador honesto, imparcial e independiente habría obtenido por concepto de deuda en cada uno de los casos de TexPet, además de lo que habría encontrado por concepto de interés simple.

[...]

Sin embargo, *esto no concluye el análisis del Tribunal*. Ante la falta de un incumplimiento del TBI por parte de Ecuador, los Demandantes no podrían haber retenido el monto total *como si fuese el equivalente de su pérdida*. Para calcular la *pérdida real de los Demandantes*, dicho monto debe reducirse como si así lo dispusiera una ley tributaria aplicable de Ecuador. Si el Tribunal no tomase dichas leyes tributarias en consideración, *correría el riesgo de aumentar la pérdida sufrida por los Demandantes*, de modo que *los Demandantes serían compensados en exceso*. Dicho de otra manera, la pérdida sufrida por los Demandantes es el monto más el interés que hubiera recibido en los tribunales de *Ecuador neto de todos montos debidos en virtud de cualquier normativa tributaria ecuatoriana*. Al cuantificar y evaluar los daños, el

Tribunal no puede conceder un monto mayor al que los Demandantes *finalmente hubieran obtenido*.

(R XIV ¶7; R XV, ¶¶14-24; Laudo Parcial, ¶¶551-552)

259. La Demandada sostiene que el Tribunal también dejó “claro que el asunto de los impuestos en el presente caso se refiere al cálculo de la cuantía de la pérdida sufrida por los Demandantes” y que el “el objeto del procedimiento [pericial] es establecer la cuantía de las pérdidas de los Demandantes, considerando las leyes tributarias aplicables de Ecuador”. Por lo tanto, la Opinión Individual del Dr. Cordero cumple con las instrucciones del Tribunal de proponer la cantidad adecuada que se deducirá del total en el párrafo 549 considerando la legislación tributaria del Ecuador aplicable con el fin de determinar la “pérdida real” de TexPet neta de los montos debidos en virtud de cualquier ley tributaria ecuatoriana aplicable. Esto es “completamente distinto de un juzgado ecuatoriano ‘deduciendo impuestos a partir de su sentencia’”, una metodología que, en opinión de la Demandada, fue excluida por el Tribunal cuando éste “contempló la aplicación de impuestos en la *determinación del monto de la sentencia*, y no mediante la aplicación judicial de los impuestos a los montos ya dictados en la sentencia” (R XIV, ¶¶7-9; R XV, ¶¶18-20).
260. Adicionalmente, la Demandada sostiene que, al declarar en su Laudo Parcial que “[e]l propósito no es el de establecer el monto del impuesto que aplicarían las autoridades del Ecuador al día de hoy en un laudo arbitral” y que “[e]l Tribunal acepta también que un tribunal local del Ecuador no habría deducido impuestos a partir de su sentencia”, el Tribunal estaba demostrando claramente que “conocía la diferencia entre (a) deducir impuestos *a partir de una sentencia* y (b) dar cuenta de los impuestos (o costos evitados) para *llegar a la cantidad a adjudicar en una sentencia* (como en el caso *Blount Brothers*)”. Por lo tanto, tanto en la parte dispositiva como en la discusión sobre los impuestos, la pregunta de cómo los impuestos ecuatorianos afectarían a la “pérdida real” de los Demandantes se dejó más bien abierto (R XV, ¶¶23-24).

261. Además, la Demandada rechaza los argumentos de los Demandantes respecto de la doctrina de la cosa juzgada. La Demandada se refiere al artículo 4 de las Recomendaciones sobre Cosa Juzgada y Arbitraje de la *International Law Association*:⁷

Un laudo arbitral tiene un efecto conclusivo y preclusivo en la continuación del procedimiento arbitral respecto de:

4.1 determinaciones y petitorios contenidos en su parte dispositiva así como en todo el razonamiento necesario en el mismo;

4.2 cuestiones de hecho o derecho que han sido efectivamente arbitradas y decididas por éste, siempre que dichas decisiones fueron esenciales o fundamentales para la parte dispositiva del laudo arbitral.

(R XV, ¶27)

262. Sin embargo, tal y como se indica en varios comentarios a las Recomendaciones de la ILA⁸, el alcance de la cosa juzgada descrito en las Recomendaciones de la ILA es algo más amplio de lo que normalmente se permite en la práctica del derecho civil, donde el efecto de cosa juzgada tiende a estar reservado a la parte dispositiva o fallo de la sentencia o el laudo arbitral. La Demandada cita a Hanotiau para la proposición de que, en algunas jurisdicciones de derecho civil, “la cosa juzgada se puede unir a los motivos (es decir, el razonamiento), además de a la parte dispositiva, pero sólo cuando el razonamiento es necesario para la decisión y constituye la *ratio decidendi* (es decir, las razones para decidir) del laudo”⁹. Sin embargo, incluso esta moderada extensión del efecto de cosa juzgada no está universalmente aceptada en los países de derecho civil (R XV, ¶¶28-32).

263. Volviendo específicamente a la ley de arbitraje holandesa, la Demandada afirma que “el efecto de cosa juzgada se adhiere a las decisiones que se encuentran en el fallo del laudo [...] aunque a veces también se entiende como aproximado a aquellas decisiones en el cuerpo del

⁷ RESOLUTION NO. 1/2006, ANNEX 2, INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION RECOMMENDATIONS ON RES JUDICATA AND ARBITRATION, Toronto, art. 4 (2006).

⁸ Christophe Seraglini, *Brèves remarques sur les Recommandations de l'Association de droit international sur la litispendance et l'autorité de la chose jugée en arbitrage*, 2006(4) REVUE DE L'ARBITRAGE (EXAMEN DEL ARBITRAJE) 909, ¶4, 10; Filip de Ly & Audley Sheppard, *ILA Interim Report on Res Judicata and Arbitration*, 2009(1) ARB. INT'L 35, pág. 36.

⁹ Bernard Hanotiau, *L'autorité de chose jugée des sentences arbitrales*, BULLETIN CCI, SUPPLEMENT SPECIAL, L'ARBITRAGE COMPLEXE 45, ¶34 (2003).

laudo que constituyen la base necesaria para las decisiones expresadas en el fallo” (R XV, ¶35). Sin embargo, las “[d]ecisiones que se encuentren en otras partes a lo largo laudo que no son predicados necesarios (es decir, no constituyen el soporte necesario para) para los dictámenes en el fallo, por el contrario, no se benefician del efecto de cosa juzgada” (R XV, ¶¶33-36).

264. A la luz de lo anterior, la Demandada también rechaza la afirmación de que la Opinión Individual del Dr. Cordero contradiga cualquier asunto en el Laudo Parcial que tenga efecto de cosa juzgada. Para la Demandada, incluso en el caso de que la ley aplicable pudiese ampliar el efecto de cosa juzgada para cubrir el razonamiento contenido en el cuerpo del Laudo Parcial, las únicas frases del Laudo Parcial susceptibles de caer bajo el umbral de la cosa juzgada son aquellas que tratan sobre la responsabilidad de la Demandada por el incumplimiento del artículo II(7) del TBI en el párrafo 5 de las “Decisiones” del Tribunal. El resto del párrafo 5 de las “Decisiones” constituye una simple indicación de que “el Tribunal llevaría a cabo el ejercicio de cuantificación y no depende, para tener existencia o significado, de los asuntos tratados en otras partes en el Laudo Parcial” (R XV, ¶¶37-43).
265. La Demandada afirma que resulta irrelevante que el Laudo Parcial sea “final y vinculante” conforme al artículo 32 del Reglamento de la CNUDMI, porque “[l]a cuestión no consiste en si el Laudo Parcial en sí mismo se califica en general para ser tratado como cosa juzgada, sino más bien en la identificación de aquellos aspectos particulares en los que el Laudo Parcial está revestido con carácter de cosa juzgada”. De manera similar, la referencia al caso *Amco c. Indonesia II* no ayuda a los Demandantes, ya que el tribunal en ese caso concluyó que “[n]o queda del todo claro que la tendencia general en el derecho internacional sea la de aceptar el razonamiento, las decisiones preliminares o incidentales como parte de lo que constituye cosa juzgada”¹⁰ (R XV, ¶¶46-49). Además, el Profesor Vaughan Lowe no respalda la inclusión de la totalidad del razonamiento de un tribunal bajo el umbral de la cosa juzgada, sino que respalda la “formulación más prudente” de la regla del caso de *Orinoco Steamship Company* con el resultado de que “sólo una parte del razonamiento de un Tribunal podría beneficiarse del efecto de cosa juzgada”.¹¹ Por último, en respuesta a la referencia de los

¹⁰ *Amco II*, nota 5 anterior, ¶32.

¹¹ Vaughan Lowe, *Res Judicata and the Rule of Law in International Arbitration*, 8 AFR. J. INT’L & COMP. L. 38

Demandantes a *Waste Management v. Mexico*,¹² la Demandada sostiene que la porción de los daños del Laudo Parcial no cae bajo la regla *Waste Management*, porque el párrafo 5 de la parte dispositiva del Laudo Parcial expresamente aplaza la decisión sobre la cuantía de los daños hasta la conclusión del procedimiento pericial separado (R XV, ¶¶44-50).

266. Finalmente, mediante carta de 7 de marzo de 2011, la Demandada contestó a la carta de los Demandantes de 4 de marzo de 2011, respecto del reciente nombramiento del Dr. Cordero para la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. La Demandada cuestionó la motivación tras la carta de los Demandantes puesto que la carta “ni critica directamente, ni solicita petitorio al respecto, ni especifica la relevancia del reciente nombramiento del Dr. Cordero”, y objetó a la insinuación infundada contenida en la misma de que el nombramiento fue una recompensa por dar una opinión favorable a la Demandada.

3. El Tribunal

267. En primer lugar, el Tribunal comienza con las últimas presentaciones de las Partes respecto del reciente nombramiento del Dr. Cordero para la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. El Tribunal observa que los Demandantes, al referirse a la evidencia circunstancial de la parcialidad del Dr. Cordero, no han presentado un recurso formal contra el Dr. Cordero ni han solicitado petitorio adicional. De hecho, el Tribunal no ve razón para ignorar las opiniones expresadas o dudar sobre la credibilidad del Dr. Cordero a causa de su reciente nombramiento judicial. Tal y como argumenta la Demandada, sin mayor evidencia de la existencia de un vínculo inapropiado entre la Opinión Individual del Dr. Cordero y su reciente nombramiento para la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, el nombramiento judicial se podría en cambio considerar como una reafirmación de sus credenciales como perito. En cualquier caso, el razonamiento del Tribunal en el presente laudo hace referencia a, pero no adopta, la Opinión Individual del Dr. Cordero. Las únicas conclusiones del Dr. Cordero en las que el Tribunal confía específicamente en su decisión son aquellas que él compartió con el Dr. Almeida en su Informe Pericial Conjunto.

págs. 38-39 (1996).

¹² *Waste Management*, nota 6 anterior.

268. Volviendo a las respectivas posiciones de las Partes sobre la admisibilidad de la Opinión Individual del Dr. Cordero, surgen dos asuntos diferentes para la consideración del Tribunal. En primer lugar, el Tribunal debe determinar si el Laudo Parcial ya decidió definitivamente cualquier asunto relevante a los daños de manera que las sumas calculadas en el mismo sean ahora cosa juzgada. En segundo lugar, el Tribunal debe evaluar si la Opinión Individual cae fuera del mandato otorgado por el Tribunal a los Peritos Tributarios ecuatorianos nombrados por las Partes. El Tribunal comienza tratando el asunto de la cosa juzgada.
269. En el párrafo 552 del Laudo Parcial, que contiene un pasaje clave con respecto al asunto de los impuestos, el Tribunal estableció lo siguiente:

Ante la falta de un incumplimiento del TBI por parte de Ecuador, los Demandantes no podrían haber retenido el monto total como si fuese el equivalente de su pérdida. Para calcular la pérdida real de los Demandantes, dicho monto debe reducirse como si así lo dispusiera una ley tributaria aplicable de Ecuador. Si el Tribunal no tomase dichas leyes tributarias en consideración, correría el riesgo de aumentar la pérdida sufrida por los Demandantes, de modo que estos serían compensados en exceso. Dicho de otra manera, la pérdida sufrida por los Demandantes es el monto más el interés *que hubiera recibido en los tribunales de Ecuador neto de todos montos debidos en virtud de cualquier normativa tributaria del país*. Al cuantificar y evaluar los daños, el Tribunal no puede conceder un monto mayor al que los Demandantes hubieran obtenido en todo caso.

[énfasis añadido]

270. Este pasaje deja claro que el Tribunal Arbitral debe comenzar su análisis con la determinación de qué montos deberían haber adjudicado los tribunales ecuatorianos a los Demandantes. Tal y como argumentan los Demandantes, el Laudo Parcial de hecho determinó esas cantidades, resultando 354.558.145 USD como principal y 344.063.759,84 USD como intereses. Sin embargo, la misma frase también deja claro que para llegar a una cuantía final “neto de todos montos debidos en virtud de cualquier legislación tributaria del país”, el análisis del Tribunal debe ir un paso más allá que los tribunales ecuatorianos.

271. En su Opinión Individual, el Dr. Cordero propone el siguiente método para dicho cálculo:
- (i) el monto principal debería reducirse en un 87,31% de la tarifa del Impuesto Unificado acordada por los Peritos Tributarios, resultando en una cifra que es el 12,69% (esto es, 100% - 87,31%) del monto principal decidido en el Laudo Parcial;
 - (ii) el interés debería por lo tanto ser calculado sobre esta cantidad principal reducida, resultando en el 12,69% del interés decidido en el Laudo Parcial; y
 - (iii) el impuesto a la tarifa del 25% acordada por los Peritos Tributarios debería ser gravado sobre el monto reducido de interés calculado en (ii).
272. La cuestión por lo tanto es si el cuerpo o las secciones dispositivas del Laudo Parcial contienen razonamientos o decisiones relacionados con los puntos planteados por el Dr. Cordero que hayan podido adquirir efecto de cosa juzgada. La cuestión de la cosa juzgada surge principalmente en conexión con los argumentos de los Demandantes respecto del recurso al Laudo Parcial presentado por la Demandada ante los tribunales holandeses. Los Demandantes argumentan que el Laudo Parcial debe haber adquirido efecto de cosa juzgada a la luz del artículo 1063(4) del Código de Procedimiento Civil Holandés, el cual establece que “[u]na solicitud de anulación debe hacerse tan pronto como el laudo ha adquirido la fuerza de cosa juzgada”. Cabe mencionar también al artículo 1059(1) del Código de Procedimiento Civil holandés: “[s]ólo un laudo final o parcialmente final es capaz de adquirir fuerza de cosa juzgada. El laudo deberá poseer esa fuerza desde el día en que se emita”. Al mismo tiempo, la cosa juzgada es también invocada como un principio general del derecho internacional y también puede operar a ese nivel para evitar la reconsideración de asuntos previamente decididos.
273. Sin embargo, en ambas legislaciones, tanto la holandesa como la internacional, se discute si y en qué medida el razonamiento de un laudo arbitral puede tener el efecto de cosa juzgada de manera independiente de la parte dispositiva. De cualquier modo, en el presente caso, ni la sección de la parte dispositiva ni el razonamiento del Laudo Parcial cubren la cuestión planteada por el Dr. Cordero. Por el contrario, en ambas, la sección de la parte dispositiva y

el razonamiento, el Tribunal se reserva su decisión definitiva sobre la cuantía de los daños a una decisión posterior que considerará el efecto de los impuestos en esta determinación.

274. La sección dispositiva del Laudo deja de manera explícita el monto de los daños abierto para ser determinado en un laudo posterior:
5. Como resultado de la decisión del Tribunal en la anterior sección 2 sobre que la Demandada ha incumplido el artículo II(7) del TBI, la Demandada es responsable de los daños causados a los Demandantes por tal incumplimiento. *El total de estos daños se decidirá* por el Tribunal con la ayuda de un procedimiento dispuesto separadamente en una Orden Procesal del Tribunal para determinar qué impuestos, de existir, habrían sido debidos a la Demandada si no hubiera ocurrido el incumplimiento del artículo II(7) del TBI.
 6. La Demandada es responsable del pago del interés compuesto anterior al laudo conforme a la Tasa Preferencial de Nueva York (anual) *sobre el monto final a ser pagado por la Demandada de conformidad con la anterior sección 5*, desde el 22 de diciembre de 2006 y hasta la fecha en que este monto sea pagadero por la Demandada.
 7. La Demandada será responsable del pago de un interés compuesto después del fallo conforme a la Tasa Preferencial de Nueva York (anual) sobre el monto fijado por el Tribunal, desde la fecha en que éste ordene el pago a la Demandada hasta la fecha en que dicho pago se realice.

[énfasis añadido]

275. El párrafo 6 de las decisiones establece por lo tanto la tasa del interés compuesto anterior al laudo que será aplicada sobre *el monto final a ser pagado por la Demandada de conformidad con la anterior sección 5*. Mientras tanto, el párrafo 5 de las decisiones establece que un procedimiento posterior determinará los daños a adjudicar después de impuestos. El párrafo 6 por lo tanto no adjudica intereses sobre la totalidad del monto de los daños directos e interés anterior a la sentencia, sino sólo en el monto neto de impuestos. De ello se desprende que el mismo principio podría aplicarse, según la metodología del Dr. Cordero, a la cuestión del interés anterior a la sentencia desde la fecha de presentación ante los tribunales ecuatorianos hasta la Notificación de arbitraje.
276. Aun asumiendo que las decisiones operativas con fuerza de cosa juzgada se pueden encontrar en el razonamiento del laudo arbitral, ninguno de los párrafos relevantes en el cuerpo del Laudo Parcial constituyen decisiones definitivas sobre la cuantía de los daños que impedirían

el estudio de la cuestión planteada por el Dr. Cordero. En el párrafo 546 del Laudo Parcial, el Tribunal resuelve los distintos debates entre las Partes respecto del monto de los daños directos de los Demandantes ante los tribunales ecuatorianos, y establece los cálculos del Dr. Borja, a menos que sea revisado a la baja por Navigant, como base para los cálculos del Tribunal (véase Laudo Parcial, ¶¶499-501, 505, 513-515, vs. ¶¶518-532). El párrafo 548 decide la controversia sobre la fecha de comienzo y fin del interés anterior a la sentencia ante los tribunales ecuatorianos (véase Laudo Parcial, ¶511 vs. 536). El párrafo 549 establece posteriormente la Tasa Preferencial de Nueva York (en contraposición a la Tasa Activa Referencial defendida por los Demandantes) como la tasa de interés a aplicar durante este período (véase Laudo Parcial, ¶¶502, 512 vs. ¶¶534-535). El párrafo 550 suma entonces el monto principal de 354.558.145 USD anteriormente mencionado y la cantidad de interés de 344.063.759,84 USD para producir un total de 698.621.904,84 USD como la cantidad que el Tribunal determina que debería haberse adjudicado a TexPet por los tribunales ecuatorianos en la fecha de la Notificación de arbitraje.

277. El Tribunal vuelve entonces al asunto de los impuestos. En el párrafo 551, el Tribunal contempla el asunto de los impuestos en relación con la medida de los daños, declarando que “el Tribunal *comienza* desde la suma principal que un juez del Ecuador honesto, imparcial e independiente habría obtenido por concepto de deuda en cada uno de los casos de TexPet, además de lo que habría encontrado por concepto de interés simple” (énfasis añadido). El Tribunal además acepta el argumento de los Demandantes de “que un tribunal del Ecuador no habría deducido impuestos a partir de su sentencia” (véase Laudo Parcial, ¶509 vs. ¶541-542). El Tribunal decidió entonces que el monto que habría sido adjudicado a TexPet por los hipotéticos tribunales ecuatorianos no se habría visto afectado por la cuestión de los impuestos. Aun así el Tribunal advierte inmediatamente después que “[s]in embargo, esto no concluye el análisis del Tribunal”, y que el Tribunal debe ir más allá de la simple determinación de los montos que deberían haber sido adjudicados por los tribunales ecuatorianos.
278. En los pasajes clave de los párrafos 552-553, el Tribunal rechaza los argumentos de los Demandantes en cuanto a la irrelevancia de los impuestos y explica que, a pesar de que no forman parte del proceso de determinación de los daños de TexPet ante un tribunal

ecuatoriano, los impuestos no obstante deben ser tenidos en cuenta por el Tribunal en el contexto de la determinación de la pérdida causada a los Demandantes por el incumplimiento del TBI (véase Laudo Parcial, ¶¶506-507 vs. ¶¶540-541). Sin embargo, en el párrafo 554 el Tribunal continúa estableciendo un procedimiento posterior para la determinación del efecto preciso de los impuestos en este cálculo.

279. A partir de entonces, el párrafo 555 resuelve que, para los períodos subsiguientes a la Notificación de arbitraje, el Tribunal aplicará el interés compuesto (en contraposición al interés simple argumentado por la Demandada, véase Laudo Parcial, ¶¶503 vs. 537) a la Tasa Preferencial de Nueva York (en contraposición al costo de la deuda soberana del Ecuador propuesto por los Demandantes, véase Laudo Parcial, ¶512 c. ¶¶534-535). Por último, antes de que el Tribunal pase a sus decisiones, los párrafos 556 y 557 del Laudo Parcial rechazan la alegación de los Demandantes por “costos legales desperdiciados” y los argumentos de la Demandada con respecto a la doble indemnización (véase Laudo Parcial, ¶¶516-517 vs. ¶¶544-545).
280. Queda claro de lo anterior que el Tribunal decidió todos los asuntos controvertidos en relación con la cuantía, a excepción del asunto de cómo las leyes tributarias ecuatorianas podrían afectar al cálculo final. En cuanto a este asunto, el Tribunal se reservó ampliamente su competencia para decidir estas cuestiones a la luz de los argumentos de las Partes (véase Laudo Parcial, ¶510 vs. ¶¶540-541) y las presentaciones realizadas durante el posterior procedimiento de peritos previsto por el Tribunal. Esto fue así precisamente porque el asunto de cómo se podrían tener en cuenta los impuestos en la determinación de la cuantía “sea más complejo de lo que aparenta en primer lugar” (véase Laudo Parcial, ¶554). El Laudo Parcial, a la hora de discutir el procedimiento posterior respecto de la deducción de cantidades a cuenta de los impuestos aplicables, deja claro por tanto que el Tribunal no determinó la cuantía de la pérdida de los Demandantes e intentó hacerlo sólo después de las presentaciones adicionales para resolver la cuestión controvertida pendiente (véase Laudo Parcial, ¶554: “el objeto de dicho procedimiento es establecer la cuantía de las pérdidas de los Demandantes, considerando las leyes tributarias aplicables de Ecuador”). En consecuencia, el razonamiento del Laudo no contiene ninguna decisión final respecto del monto de los daños.

281. Por consiguiente, el Tribunal concluye que nada en el Laudo Parcial, ya sea en la parte dispositiva o en el razonamiento, ha adquirido el efecto de cosa juzgada que impediría al Tribunal admitir y considerar la Opinión Individual del Dr. Cordero.
282. Esto lleva a la cuestión de si el Tribunal debe no obstante, ignorar la opinión del Dr. Cordero por exceder el mandato de los Peritos Tributarios. En opinión del Tribunal, la Opinión Individual indudablemente se encuentra dentro del amplio mandato concedido a los peritos en el párrafo 2.1 de la OP VIII de “acordar la cuantía, de existir, que debería ser descontada del total dispuesto en la Tabla en el párrafo 549 del Laudo Parcial del Tribunal con base en cualquier legislación fiscal ecuatoriana aplicable, a la vista de los principios dispuestos en dicho Laudo Parcial”. Tal y como el Tribunal especificó en el Laudo Parcial, el propósito del procedimiento de los peritos no era el de realizar “un impuesto *de facto* aplicado por Ecuador sobre la sentencia del Tribunal”, ni “establecer el monto del impuesto que aplicarían las autoridades de Ecuador al día de hoy en un laudo arbitral” sino “establecer la cuantía de las pérdidas de los Demandantes, considerando las leyes tributarias aplicables de Ecuador”. Este cálculo iba a reflejar el hecho de que “[a]nte la falta de un incumplimiento del TBI por parte de Ecuador, los Demandantes no podrían haber retenido el monto total” que ellos reclamaban ante los tribunales ecuatorianos (véase Laudo Parcial, ¶¶553-554).
283. De acuerdo con el razonamiento del Tribunal en el Laudo Parcial, el procedimiento de los peritos iba a referirse a cualquier forma en la que los impuestos ecuatorianos aplicables podrían haber afectado al monto que los Demandantes habrían tenido el derecho a recibir finalmente en virtud de los principios establecidos en el Laudo Parcial. El mandato concedido a los peritos, era por tanto amplio y no menor en alcance que las decisiones sobre los daños que fueron reservadas por el Tribunal. El Tribunal además observa que, independientemente del mandato específico otorgado a los Peritos Tributarios, las Partes han dispuesto de dos rondas de presentaciones escritas posteriores a la recepción de la Opinión Individual del Dr. Cordero en las que tratar las cuestiones planteadas en la misma. Por lo tanto, no se ha producido perjuicio procesal para ninguna de las partes. Por consiguiente, el Tribunal no encuentra razón para excluir la Opinión Individual del Dr. Cordero sobre esta base.

284. A la luz de lo anterior, el Tribunal concluye que la Opinión Individual del Dr. Cordero es procesalmente admisible en este procedimiento. Respecto del contenido de la Opinión Individual del Dr. Cordero, sin embargo, cabe señalar que, incluso si se considerase inadmisibile, el Tribunal no obstante llegaría a la misma conclusión con respecto a la correcta evaluación de los daños. Como se señaló anteriormente, el razonamiento del Tribunal se basa principalmente en la determinación del impuesto ecuatoriano aplicable a los ingresos petroleros e intereses, cuyas conclusiones se han trazado a partir del archivo y se han confirmado por el Informe Pericial Conjunto.

G.III. El Monto de los Daños Directos de TexPet

1. Argumentos de los Demandantes

285. Los Demandantes rechazan la afirmación de la Demandada de que de conformidad con la teoría del “lucro cesante”, un juzgado ecuatoriano habría deducido el Impuesto Unificado de cualesquiera daños ocasionados sobre la base de que el Impuesto Unificado era un “costo operativo” basado en una transacción que TexPet “evitó”. Los Demandantes sostienen que en este sentido la Opinión Individual del Dr. Cordero contradice principios básicos del derecho civil y tributario ecuatoriano así como principios económicos básicos. De manera más significativa, la Opinión Individual del Dr. Cordero confunde la secuencia de los hechos que dieron lugar a la renta sujeta a tributación en el hipotético escenario establecido por el Tribunal.
286. El Dr. Cordero toma la postura de que TexPet no tenía derecho a percibir intereses sobre la totalidad del monto principal porque, si el Ecuador no hubiese incumplido el Acuerdo de 1973 y si TexPet hubiese recibido las cantidades que se le debía, TexPet habría tenido que pagar impuestos sobre esas cantidades durante el década de los 80 y principios de los 90. Sin embargo, en su Laudo Parcial, el Tribunal decidió que los tribunales ecuatorianos deberían haber decidido a favor de TexPet el monto establecido en el párrafo 549 del Laudo Parcial, como muy tarde, antes de la fecha de la Notificación de arbitraje de los Demandantes. Por lo tanto, los Demandantes alegan que, sólo en ese momento resulta relevante la cuestión de los posibles efectos fiscales de tal sentencia. Sólo *después* de que TexPet se hiciese titular del derecho a la cantidad principal, por medio de una sentencia en 2006, o incluso hasta que TexPet recibiera verdaderamente el pago, podría éste haber debido impuestos sobre tales cantidades (C XV, p. 5).
287. Los Demandantes alegan que la opinión del Dr. Cordero ignora el principio bien establecido de que “los impuestos son consecuencia de la transacción subyacente que da lugar a la renta sujeta a tributación”. De conformidad con los artículos 16 a 18 del Código Tributario ecuatoriano, “la obligación tributaria sobre la renta no puede surgir hasta que se ha ganado la

renta y ha ocurrido el hecho sujeto a tributación”. Además, los Demandantes sostienen que “en ninguna parte la legislación tributaria del Ecuador se establece que el interés en un litigio civil debería calcularse en base después de impuestos”. Sin embargo, ningún hecho sujeto a tributación habría ocurrido hasta después de la emisión de la sentencia del tribunal en diciembre de 2006. De lo contrario, la sustracción de impuestos por el tribunal crearía un insalvable problema de doble imposición (C XV, pp. 5-7; C XVI, p. 3).

288. Además, los Demandantes sostienen que “el cálculo de intereses sobre la base después de impuestos no indemnizaría íntegramente a TexPet en virtud del artículo 1572 del Código Civil ecuatoriano, que establece el principio de indemnización íntegra por incumplimiento contractual” (C XV, p. 6). Tampoco tendría sentido económicamente, ya que está “universalmente aceptado que el interés indemniza por valor del dinero en el tiempo” y “TexPet tiene el derecho a ser indemnizada por el incumplimiento del Ecuador, incluyendo la demora (mora) en la recaudación del dinero al que tiene derecho (y que todavía está por pagársele)”. Los Demandantes también observan que, de acuerdo con el artículo 218 del Código Tributario ecuatoriano, sólo los tribunales de lo fiscal tienen competencia sobre materias fiscales. Los tribunales de lo civil y de lo mercantil ecuatorianos por lo tanto carecen de competencia para conocer de los asuntos fiscales en la forma defendida por el Dr. Cordero y por la Demandada (C XV, pp. 6-8).

289. Los Demandantes también sostienen que la opinión del Dr. Cordero permite al Ecuador obtener un trato preferencial en sus relaciones comerciales al permitirle valerse a sí mismo de su autoridad tributaria. Según los Demandantes, el Dr. Cordero confunde tres organismos distintos del Estado ecuatoriano: el Ministerio de Energía como la contraparte comercial y el demandado en los juicios subyacentes; el juzgado de lo civil ecuatoriano como el órgano adjudicador de la controversia comercial de TexPet; y el Servicio de Rentas Internas del Ecuador como autoridad tributaria interna del Ecuador y el único receptor de los impuestos de TexPet. El hecho de que el demandado mercantil en los casos ante el Tribunal ecuatoriano es también parte del Estado ecuatoriano, con autoridad para imponer tributos, es una coincidencia irrelevante. Decidir de otro modo sería dar licencia al Ecuador para “usar su autoridad tributaria en beneficio de sus relaciones comerciales ilícitas” (C XV, p. 8).

290. Adicionalmente, los Demandantes rechazan los principios de la teoría del “lucro cesante” de la Demandada, la cual argumentan no se encontraba respaldada por la Opinión Individual del Dr. Cordero. Según los Demandantes, la Demandada no puede probar que (i) las reclamaciones por daños de TexPet lo fueron por “lucro cesante”, (ii) la legislación ecuatoriana prevé la sustracción de “costos evitados”, y (iii) el Impuesto Unificado se califica como “costo evitado”.
291. En primer lugar, los Demandantes argumentan que la Demandada malinterpreta las reclamaciones por “Daños Directos” como reclamaciones por “lucro cesante”. Los Demandantes observan que el artículo 1572 del Código Civil ecuatoriano reconoce dos tipos de daños por incumplimiento de contrato: daño emergente o *damnum emergens* y el lucro cesante o *lucrum cessans*. Mientras que el daño emergente repara el daño directo sufrido por la parte que no ha incumplido, el lucro cesante compensa por la pérdida de ganancias que se deriva de la falta de uso del dinero que la parte que no ha incumplido dejó de recibir. En este caso, “el daño emergente sufrido” por TexPet era el dinero que este dejó de recibir en virtud del Acuerdo de 1973 como consecuencia del incumplimiento por el Ecuador, y el interés indemniza por los beneficios que podría haber obtenido con ese dinero, pero que no obtuvo. Los Demandantes señalan que la Demandada no ha proporcionado ningún caso ecuatoriano que apoye su definición alternativa de “lucro cesante”. Según los Demandantes, incluso las autoridades legales de la Demandada confirman que las reclamaciones de TexPet por la diferencia entre el precio doméstico e internacional del petróleo constituyen legalmente sus “daños directos”. Los Demandantes afirman que la Demandada ha mostrado su conformidad con este argumento de manera explícita durante la Audiencia sobre el fondo, cuando la Demandada afirmó que “daños y perjuicios incluye los daños y perjuicios reales, o los ‘directos’ como los llama la demandante, y la pérdida de ganancias, lucro cesante, que es una compensación en forma de intereses por este daño y perjuicio directo”(C XVI, p. 7; Tr. II en 1021:24-1022:2).
292. En segundo lugar, los Demandantes sostienen que la Demandada no ha probado que la legislación ecuatoriana sobre contratos prevé la deducción de los “costos evitados” en el cálculo del lucro cesante. Los Demandantes impugnan el argumento de la Demandada de que de acuerdo con la legislación ecuatoriana, el “lucro cesante” se calcula “como el ingreso

perdido menos los costos evitados” y que el Impuesto Unificado se califica como un costo evitado. Para los Demandantes, la afirmación del Dr. Cordero de que el interés debe ser calculado sobre una base después de impuestos está completamente desconectada de este caso. La referencia de la Demandada a un caso de la Corte Suprema del Ecuador donde el tribunal sustrajo el costo de mantenimiento de un camión en la adjudicación de los daños por la retención ilegal del vehículo por la demandada resulta también irrelevante. A diferencia del caso que nos ocupa, ese caso consistía en una reclamación extracontractual, no una acción por incumplimiento contractual. Los Demandantes además observan que la Demandada no cita jurisprudencia alguna y que ninguna de la doctrina que ha presentado trata los “costos evitados”. La única excepción es la de un tratado chileno que no se puede considerar que refleje con autoridad la Ley ecuatoriana. Además, los Demandantes señalan que, al pretender dar una definición general del lucro cesante, la Demandada cita un ejemplo donde la obligación principal del contratista fue la de dirigir una obra de teatro. Debido a la naturaleza de la obligación, era al contratista en tal caso a quien correspondía la carga de la prueba del lucro cesante. En el presente caso, sin embargo, la obligación es dineraria, lo que significa que no es necesaria una prueba separada del lucro cesante (C XVI, pp. 8-9).

293. Los Demandantes también rechazan la afirmación de la Demandada de que la legislación de los EE.UU. apoya su posición. Los Demandantes sostienen que “la Corte Suprema de los EE.UU. trata de lleno esta cuestión, señalando que en realidad un demandante sería mucho más desafortunado en el caso de tal deducción porque se enfrentaría a la doble imposición, primero por el tribunal y segundo por el SRI del laudo en sí mismo”. Además, mientras que los Demandantes han citado varios casos de los EE.UU. posteriores a *Randall v. Loftsgaarden*¹³ en los que los tribunales se negaron a considerar la sustracción de los impuestos al calcular los daños, la Demandada no ha señalado un sólo caso posterior a *Randall* en el que un tribunal haya liquidado impuestos como parte de un análisis de daños (C XVI, pp. 8-9).

294. En tercer lugar, los Demandantes se oponen a que el Impuesto Unificado se califique como un “costo operativo”. Las Partes han argumentado extensamente la naturaleza del Impuesto

¹³ *Randall v. Loftsgaarden*, 478 EE.UU. 647 (1986).

Unificado. Durante la etapa sobre el fondo, los Demandantes establecieron que ni el testimonio del Dr. Prado, ni la cláusula 33.4 del Acuerdo de 1973 apoyan la posición de la Demandada de que el Impuesto Unificado se califica como un “costo operativo”. El Sr. Kaczmarek demostró que “el Impuesto Unificado a la Renta gravaba *renta* derivada de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y estuvo por lo tanto sujeto a un sistema de retención complicado y a conciliación al final del año”. La cláusula 33.4 del Acuerdo de 1973 “simplemente impedía a TexPet aplicar deducciones a sus ingresos en el marco del Acuerdo de 1973 sobre la base de otras inversiones [...] pero de ninguna manera impedía a TexPet hacer uso de derechos de deducción del Impuesto Unificado a la Renta, o lo convertía en un costo operativo por transacción”. Mientras tanto, el sistema de retención del Banco Central, era un mecanismo de recaudación y no un aparato legal definiendo la naturaleza del Impuesto Unificado (C XVI, pp. 10-12).

2. Argumentos de la Demandada

295. La Demandada sostiene que la Opinión Individual del Dr. Cordero es perfectamente coherente con los principios de la legislación ecuatoriana. La deducción del Impuesto Unificado durante el cálculo de los daños directos por el tribunal simplemente reconocería los costos fiscales evitados por TexPet. Según la Demandada, el Dr. Cordero aceptó que TexPet tenía derecho a recibir el crudo contribuido en exceso en virtud de los Acuerdos de 1973 y 1977, pero observó que el no recibir este crudo sólo resultó en una pérdida del 12,69% del total del valor del crudo, como resultado de la aplicación del Impuesto Unificado en el cálculo del “lucro cesante” resultante, que sería la medida adecuada de los daños en virtud de la legislación ecuatoriana (R XV, ¶¶51-53).
296. La Demandada alega que su teoría sobre el “lucro cesante” se encuentra completamente apoyada por la legislación de contratos del Ecuador y de los EE.UU. La Demandada sostiene que “la pérdida sufrida por TexPet se describe mejor como los beneficios netos adicionales (no los ingresos brutos) que éste fue incapaz de realizar de la venta de ese petróleo crudo que se le debería haber permitido vender por su propia cuenta al precio más alto del mercado

internacional”. La Demandada también recuerda el caso *Blount Brothers*¹⁴ ante el Tribunal de las Reclamaciones Irán-EE.UU. y cita, entre otras fuentes de América Latina, un tratado del profesor Fueyo Laneri, que describe el lucro cesante como “el beneficio probable que habría obtenido el empresario en el caso de cumplimiento, resultante de la diferencia entre el producto bruto de las entradas y los gastos efectuados”¹⁵ (R XIV, ¶¶10-14).

297. La Demandada sostiene que un juzgado ecuatoriano, de conformidad con la legislación civil ecuatoriana sobre las obligaciones contractuales, habría considerado el valor monetarizado del crudo contribuido en exceso como el “precio contractual” (ingresos brutos) no pagado a TexPet, el Impuesto Unificado del 87,31% como “costos evitados”, y la cantidad residual del 12,69% como lucro cesante. Un tribunal ecuatoriano, habría pues dictado una sentencia de “lucro cesante” por daños directos (principal) exactamente al 12,69% del bruto del contrato o del valor de los “ingresos” reflejados en los daños directos establecidos por el Tribunal en el párrafo 549 de su Laudo Parcial sobre el Fondo. Este cálculo consecuentemente reduce la base de los daños directos sobre la cual el interés anterior a la sentencia sería calculado al 87,31%, dando lugar a un monto total de intereses que también es equivalente al 12,69% del interés total anterior a la sentencia mostrado en el párrafo 549 del Laudo Parcial. De manera similar, la Corte Suprema de Justicia del Ecuador ha dictaminado que, en un caso concerniente a un camión utilizado para el comercio, el “lucro cesante” por la privación injusta de un activo (el camión) era equivalente a (1) los ingresos brutos que se preveía que el vehículo habría ganado durante el período en que el demandante fue privado de su uso, menos (2) los costos operativos que el demandante habría incurrido (pero no incurrió) atribuibles a tal uso (esto es, los costos evitados) (R XIV, ¶¶15-16).
298. Según la Demandada, los Demandantes malinterpretan la opinión del Dr. Cordero cuando afirman que éste “defiende el cálculo de los intereses sobre el ‘principal después de impuestos’”. Según lo establecido por el testimonio pericial del Dr. Prado en sus dos informes y en el testimonio de la audiencia, el Impuesto Unificado era un gravamen basado en transacciones en el que el Banco Central del Ecuador automáticamente retenía el 87,31%

¹⁴ *Blount Brothers Corp. c. La República Islámica de Irán, y otros*, Laudo No. 215-52-1 (6 de marzo de 1986), págs. 77-78, reimpresso en 10 Irán-U.S. C.T.R. 95 [en adelante *Blount Brothers*].

¹⁵ FERNANDO FUEYO LANERI, CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, pág. 466. (Editorial Jurídica De Chile, 3ª Edición Actualizada, 2004).

de la recaudación de cada venta y lo pagaba al Gobierno. La cláusula 33.1 del Acuerdo de 1973 también obligaba contractualmente a TexPet a pagar el Impuesto Unificado y la Cláusula 33.4 protegía la recaudación del Impuesto Unificado de potenciales deducciones fiscales de las que TexPet de otro modo podría hacerse valer. Esta evidencia no controvertida pone de relieve el hecho de que los Demandantes nunca habrían recibido, ni nunca habrían esperado recibir el 100% de los ingresos de las ventas del petróleo crudo para reinvertir y sobre los que ganar intereses. Por lo tanto, el Dr. Cordero está en lo correcto al considerar el Impuesto Unificado como un costo operativo evitado que habría sido sustraído por un tribunal ecuatoriano en el cálculo de los daños directos debidos a TexPet, como resultado de los incumplimientos contractuales (R XIV, ¶¶17-20; R XV, ¶54).

299. Adicionalmente, la Demandada sostiene que “sólo después de convertir la pérdida de ingresos en pérdida de rentas para establecer los daños directos, aplicaría la legislación ecuatoriana una tasa de interés apropiada con el fin de determinar los daños indirectos”. Como consecuencia, resulta irrelevante si los juzgados de lo civil y de lo mercantil del Ecuador carecen de competencia sobre las materias fiscales o no, porque “los juzgados de lo civil del Ecuador son claramente competentes para calcular y adjudicar los daños por incumplimiento contractual” (R XV, ¶¶54-55).
300. Además, la Demandada sostiene que el cálculo de daños del Dr. Cordero no se contradice con el principio de “indemnización íntegra” conforme al artículo 1572 del Código Civil ecuatoriano. Por el contrario, TexPet sólo habría sufrido una pérdida de 12,69% del valor del crudo. Por tanto, es necesario dar cuentas del Impuesto Unificado en el cálculo de la cuantía de la indemnización con el fin de evitar la “indemnización en exceso” resultante en una ganancia o enriquecimiento injusto. La Demandada también contesta la afirmación de los Demandantes de que la opinión del Dr. Cordero ignora los principios bien establecidos de la legislación tributaria ecuatoriana, como el de que una “obligación tributaria sobre la renta no puede surgir hasta que se gana la renta”. En opinión de la Demandada, la opinión del Dr. Cordero no alega que los tribunales habrían cargado impuestos a TexPet. Por el contrario, argumenta que “las pérdidas de TexPet por el incumplimiento contractual incluyen únicamente aquellas que se habrían realizado de no haberse producido el incumplimiento”,

algo que “no es diferente de la deducción de otros gastos evitados para determinar el lucro cesante” (R XV, ¶¶56-59).

301. El cálculo del Dr. Cordero del interés anterior a la sentencia también es coherente con las conclusiones del Tribunal de que un tribunal ecuatoriano habría aplicado una tasa de interés libre de riesgo con el fin de indemnizar a los Demandantes por “los ingresos perdidos de la inversión que los Demandantes de otro modo podrían haber realizado si la reclamación se hubiese pagado de manera oportuna”. Si TexPet hubiese recibido y vendido el crudo contribuido en exceso, el Banco Central habría retenido inmediata y automáticamente el 87,31% de los ingresos de las ventas, dejando el 12,69% de saldo para invertir y obtener un rendimiento libre de riesgo de la inversión. Adjudicar a los Demandantes una indemnización por “pérdidas del uso de la reinversión” de fondos que nunca podrían haber reinvertido en un primer momento resultaría claramente en la misma ganancia inesperada que el Tribunal busca evitar (R XIV, ¶¶21-23) .
302. Contrariamente a la proposición de los Demandantes de que la opinión del Dr. Cordero indemniza al Ecuador por sus actos y omisiones ilícitos, la Demandada afirma que adjudicar a los Demandantes “pérdidas del uso de la inversión” sobre el monto total antes de impuestos, indemnizaría a TexPet por dinero que nunca habría tenido disponible para invertir. Incluso si los Demandantes hubieran recibido esas cantidades a tiempo, “resulta incuestionable que habrían recibido y sido capaces de invertir únicamente el 12,69%, y no el 100%, de ese valor” (R XIV, ¶18; R XV, ¶59 -60).
303. Para la Demandada, en términos del cálculo de los daños, no supone ninguna diferencia si los costos evitados habrían sido costos a pagar a un tercero, o costos de mano de obra en los que se habría incurrido. Puesto que siguen siendo los costos evitados que se reducirían de cualquier sentencia por lucro cesante, “el hecho de que el costo no incurrido es un impuesto es irrelevante y no concede un trato preferencial a la Demandada, ni tampoco le permite valerse a sí misma de su autoridad tributaria, como los Demandantes argumentan” (R XV, ¶61).
304. La Demandada concluye que “la Opinión Individual del Dr. Cordero representa el enfoque más apropiado para la determinación de la pérdida real de los Demandantes porque se

corresponde con lo que TexPet en realidad perdió como resultado de los incumplimientos del contractuales que éste afirma”, por lo tanto “representando la mejor solución al dilema del Tribunal de evitar adjudicar una ganancia inesperada de escala sin precedentes”.

3. El Tribunal

305. Como se ha descrito anteriormente en relación con la cuestión de la cosa juzgada, el Tribunal decidió, en su Laudo Parcial, las cantidades que los tribunales ecuatorianos deberían haber adjudicado a TexPet en sus juicios contra el Ecuador el 21 de diciembre de 2006, representando el momento en el que las demoras indebidas dieron lugar una violación del TBI. La decisión del Tribunal también estipulaba “que un tribunal local de Ecuador no habría deducido impuestos a partir de su sentencia” (véase Laudo Parcial, ¶551).
306. Como se observa en el párrafo 551 del Laudo Parcial, la tarea del Tribunal es indemnizar íntegramente a los Demandantes, y no más que íntegramente, en virtud del derecho internacional como si el ilícito no se hubiese producido. Los daños que los tribunales ecuatorianos habrían adjudicado son un elemento de la evaluación de los daños causados por el ilícito internacional. Sin embargo, como ya se dijo, el análisis del Tribunal no se detiene ahí. El Tribunal, a la hora de indemnizar íntegramente a los Demandantes debe tener en cuenta el efecto de los impuestos ecuatorianos aplicables sobre las cantidades debidas a los Demandantes en virtud del Acuerdo de 1973, y finalmente, sobre la indemnización total de los Demandantes. Si TexPet hubiese recibido las cantidades que reclamó, dichas sumas habrían estado sujetas a la imposición de los impuestos ecuatorianos aplicables. En consecuencia, TexPet al final habría obtenido para su propio uso únicamente dichas cantidades después de impuestos.
307. La consiguiente diferencia entre el mandato de los tribunales ecuatorianos y el del Tribunal fue tratada en el párrafo 552 del Laudo Parcial, donde el Tribunal declaró que, “[s]i el Tribunal no tomase dichas leyes tributarias en consideración, correría el riesgo de sobreestimar la pérdida sufrida por los Demandantes, de modo que estos serían compensados en exceso. [...] Al cuantificar y evaluar los daños, *el Tribunal no puede conceder un monto mayor al que los Demandantes hubieran obtenido en todo caso*” (énfasis añadido).

308. El enfoque del Tribunal se desprende de los principios enunciados en la decisión de *Chorzów Factory*, respecto de la que ambas partes coinciden en que es una autoridad legal influyente: “... la reparación debe, en la medida de lo posible, borrar todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que, con toda probabilidad, habría existido si dicho acto no se hubiera cometido”.¹⁶ En esencia, el análisis “de no haber sido por” del Tribunal debe deshacer, no sólo los daños que han surgido para los Demandantes de no haber sido por el ilícito, sino que también debe restaurar las responsabilidades que se evitaron de no haber sido por tal ilícito.
309. En este caso, el Tribunal ha sido informado por los peritos sobre el alcance de las importantes obligaciones tributarias de los Demandantes que habrían surgido de la emisión de una sentencia a favor de TexPet por los tribunales ecuatorianos. Además, la Demandada ha demostrado que las obligaciones tributarias sobre los daños directos de los Demandantes eran al mismo tiempo obligaciones contractuales en virtud de los mismos acuerdos invocados por los Demandantes en sus juicios y fueron sujetas a retención con regularidad por el Banco Central del Ecuador a partir de los pagos realizados a TexPet en el curso normal de las operaciones del Consorcio. El Tribunal por lo tanto debe evaluar el efecto de los impuestos ecuatorianos como parte de la situación que habría existido si el acto ilícito no se hubiera cometido.
310. Este enfoque también es coherente con la definición del Tribunal de la pérdida de los Demandantes. En su Laudo Parcial, el Tribunal determinó que los Demandantes se vieron privados de sentencias a favor de TexPet en tiempo oportuno que deberían haber sido dictadas el 21 de diciembre de 2006 y valoradas en 698.621.904,84 USD antes de considerar el efecto de los impuestos aplicables sobre el capital y los intereses. El valor de estas sentencias para TexPet, a la luz de los significativos efectos de los impuestos ecuatorianos sobre ambas partes de capital y de interés de las sentencias, no se corresponde automáticamente con el monto nominal acumulado de las sentencias. Conceder a los Demandantes en este arbitraje la adjudicación de esta cantidad les proveería de algo de mayor valor que la pérdida económica real de los Demandantes.

¹⁶ *Factory at Chorzów* (F.R.G. c. Pol.), Sentencia, 1928 P.C.I.J. (ser. A.) No. 17, pág. 47 (13 de septiembre) [en adelante *Chorzów Factory*].

311. El razonamiento anterior no resta valor a la regla general de que los impuestos son resultantes de la indemnización adjudicada. Con el fin de caer dentro del ámbito de la evaluación de daños por el Tribunal, los impuestos a deducir deben ser determinados con certeza y deben estar lo suficientemente conectados con la misma relación jurídica entre las partes que la que es objeto del arbitraje. Los impuestos por lo tanto podrían ser tenidos en cuenta cuando existe una disposición específica en un acuerdo o una práctica establecida entre las partes relacionada con su asignación, recaudación, o retención.
312. En concreto, en su Laudo Parcial, el Tribunal aplicó la Tasa Preferencial de Nueva York a los montos totales debidos a los Demandantes en virtud del Acuerdo de 1973, 354.558.145 USD (el “Valor Contractual”), que representa la suma total de los ingresos generados por las ventas del petróleo en el marco del Acuerdo de 1973 sin considerar el pago de impuestos debidos en virtud del mismo Acuerdo de 1973, a la espera de la determinación por los peritos de qué tasa impositiva habría resultado aplicable a esos ingresos durante el periodo operativo del Acuerdo de 1973. Ese ejercicio produjo una cantidad de interés de 344.063.759,84 USD. Sin embargo, dado que cada monto del principal otorgado a TexPet implicaba una obligación tributaria automática del 87,31% que el Ecuador recaudaba periódicamente (véase la Sección G.IV a continuación), una parte correspondiente del total del Valor del Contrato habría sido acumulada por la Demandada. De ello se desprende que la misma porción de los intereses sobre el Valor total del Contrato habrían sido devengados por la Demandada, y no pueden ser adjudicados ahora a los Demandantes. Los Demandantes no pueden por lo tanto recaudar más del 12,69% del Valor total del Contrato y el mismo porcentaje del interés devengado antes de la sentencia sobre el Valor total del Contrato. La última parte del interés devengado antes de la sentencia se encuentra por lo tanto todavía sujeta a otro impuesto a una tarifa aplicable a esa renta, tal y como se determina más adelante en este Laudo (véase Sección G.V a continuación)¹⁷.

¹⁷ El Tribunal observa, en relación con esto, que debido a su mandato independiente en virtud del derecho internacional, este no tiene necesidad de llegar a la cuestión de si los tribunales ecuatorianos habrían adoptado una lógica similar con respecto a los intereses debidos a los Demandantes. En opinión del Tribunal, es posible que un tribunal ecuatoriano con mentalidad de justicia, aunque no habría aplicado impuestos al total del valor del Contrato, habría tenido en cuenta el efecto de los pagos fiscales periódicos de los Demandantes en virtud del Contrato para decidir que los Demandantes no podían cobrar intereses sobre el valor total del Contrato, pero sólo en el 12,69% de ese valor. Así, en un “de no haber sido por” escenario donde la Demandada no habría incumplido el Tratado, un tribunal ecuatoriano podría haber emitido una sentencia a favor de los Demandantes por el valor total del Contrato,

313. El Tribunal observa que, a los efectos de sus cálculos en el presente laudo, el Tribunal ha tomado el hecho imponible como la emisión de la sentencia del Ecuador a favor de TexPet en lugar de la recaudación efectiva por TexPet sobre esa sentencia. Sin embargo, este asunto no tiene ninguna consecuencia para la cuantía final de los daños. A pesar del período de tiempo transcurrido entre la fecha de la sentencia y la fecha efectiva de recaudación de la sentencia ecuatoriana, la obligación fiscal de TexPet consistiría en la misma proporción de la cantidad total a deber. En cualquier caso, el enfoque alternativo no se podía elegir, ya que estaría en contradicción con la conclusión previa del Tribunal en su Laudo Parcial de que la violación del TBI se completó antes del 21 de diciembre de 2006, dando lugar a daños en virtud el derecho internacional a partir de esa fecha.
314. En consecuencia, el Tribunal considera que el monto de los daños directos de TexPet debería reducirse conforme a la tarifa impositiva aplicable a dichos montos. Además, la cantidad de interés anterior a la sentencia debe primero reducirse en la misma proporción que los daños directos y después gravarse conforme a la tarifa aplicable a la renta de intereses.

más el 12,69% de los intereses del mismo; esas cantidades se someterían entonces a imposición por las autoridades tributarias del Ecuador a las tarifas aplicables a estas fuentes de ingresos, dando lugar al mismo resultado que el alcanzado por este Tribunal mediante la aplicación de los principios de indemnización enunciados en *Chorzów Factory*. El Tribunal, sin embargo, no queda convencido de una u otra manera - ni necesita decidir - si los tribunales ecuatorianos habrían considerado este razonamiento lógico como “la aplicación de un impuesto sobre una sentencia”, el cual el Tribunal ha admitido como inaceptable en virtud del derecho ecuatoriano (véase Laudo Parcial, ¶551).

G.IV. La Tarifa Impositiva Aplicable al Monto de los Daños Directos

1. Argumentos de los Demandantes

315. Los Demandantes están de acuerdo en que la porción de intereses de una hipotética sentencia judicial ecuatoriana en diciembre de 2006 habría estado sujeta a la tarifa general del 25% del impuesto a la renta, pero sostienen que esa tarifa se aplicaría también a la parte principal (daños directos) de la sentencia. Esto es debido a que el Impuesto Unificado del 87,31% no estaba en vigor en diciembre de 2006. Según los Demandantes, la Ley del Régimen Tributario Interno de 1990 buscaba implementar un sistema tributario armonizado. En concreto, la “tributación de la renta petrolera requería una mejora especial” y la Ley del Régimen Tributario Interno dedicaba un título entero al régimen tributario para las compañías petroleras, donde “reducía la tarifa general del 44,4% del impuesto a la renta para las corporaciones al 25% y hacía este tipo de tarifa impositiva general aplicable a los contratos de petróleo”(C XV, p.10). Además, los Demandantes sostienen que con el propósito de completar el proceso de armonización, la Ley del Régimen Tributario Interno derogaba todas las demás leyes tributarias, sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones transitorias. Por lo tanto, el régimen del Impuesto Unificado del 87,31% solo podría haber sobrevivido mediante el efecto de una disposición transitoria específica (C XV, p. 10).
316. Según los Demandantes, la Disposición Transitoria Número Cinco regulaba exclusivamente el régimen tributario a la renta de TexPet y City Investment Co., las dos compañías que habían entrado en contratos de asociación de petróleo con el Gobierno ecuatoriano y estaban por lo tanto sujetas al Impuesto Unificado del 87,31%. El Impuesto Unificado, sin embargo, estaba intrínsecamente ligado a la actividad petrolera en el marco del Acuerdo de 1973. Por lo tanto, una vez expirado el Acuerdo de 1973, la Disposición Transitoria también dejó de tener efecto sobre TexPet, aunque formalmente permanecía como parte de la legislación. De la misma manera, el Decreto 982 también dejó de resultar aplicable a TexPet (C XV, p. 10).
317. Además, los Demandantes cuestionan la opinión de los Peritos Tributarios de que, porque la Disposición Transitoria utiliza la palabra “suscrito” en lugar de “en vigor” respecto del

Acuerdo de 1973, la Disposición Transitoria se aplica independientemente de si el Acuerdo de 1973 permanecía en vigor. Los Demandantes afirman que City Investment dejó de pagar el Impuesto Unificado del 87,31% una vez que su contrato de asociación fue modificado en un acuerdo de participación de la producción en 1995 y a partir de entonces sólo pagaba la tarifa general del 25% del impuesto a la renta (C XV, p. 11).

318. Incluso en el caso de que la Disposición transitoria Número Cinco estuviese en vigor en 2006, la tasa general de interés del 25% seguiría resultando aplicable, porque los ingresos que un tribunal ecuatoriano habría adjudicado no pueden ser calificados como “renta petrolera”. Según los Demandantes, TexPet no habría recibido restitución directa del petróleo contribuido en exceso, sino que en su lugar habría recibido “una suma de dinero equivalente al valor económico de la propiedad que TexPet dejó de percibir debido al incumplimiento del Ecuador, y al lucro cesante” (C XV, p. 12).
319. Los Demandantes además señalan que los componentes subyacentes del Impuesto Unificado dejan claro que este sólo se aplicaría a actividades directas de exploración y producción de petróleo en virtud del Acuerdo de 1973, y no a una hipotética sentencia judicial ecuatoriana. En consecuencia, no existe base jurídica para aplicar el Impuesto Unificado en el contexto de una hipotética sentencia judicial emitida 16 años después del cese de todas las operaciones en las que el impuesto se basa, y 14 años después de la terminación del contrato que rige esas operaciones (C XV, p. 12).
320. Los Demandantes destacan que la Demandada es la única responsable por el incumplimiento del Acuerdo de 1973, la demora de los casos de TexPet más de 13 años, la violación del TBI, y el cambio de sus propias leyes tributarias durante este tiempo. Como resultado, la Demandada debe soportar las consecuencias de estas acciones, aun si las leyes tributarias promulgadas más tarde favorecen a los Demandantes (C XV, p. 12).

2. Argumentos de la Demandada

321. La Demandada rechaza el argumento de los Demandantes de que la tarifa del 25% no sólo se aplica a los intereses (daños indirectos) sino también al principal (daños directos). En

particular, la Demandada cuestiona la afirmación de los Demandantes de que el Impuesto Unificado no se encontraba en vigor en 2006 y por lo tanto no podría haberse aplicado a ningún ingreso recibido por TexPet en ese momento. La Demandada señala que los Peritos Tributarios, teniendo un vasto conocimiento de la legislación tributaria del Ecuador, unánimemente concluyeron que el Impuesto Unificado habría resultado aplicable a una hipotética sentencia judicial ecuatoriana en 2006, y que el Decreto Supremo No. 982 se mantuvo en vigor y aplicable a los asuntos tributarios de este procedimiento (R XV, ¶67).

322. Los Peritos Tributarios explicaron como la Disposición Transitoria Número Cinco por sus términos, se aplica a un “contrato suscrito” y no sólo a un “contrato en vigor”, y que el contrato de TexPet constituía un “contrato suscrito” conforme al significado de la Disposición Transitoria Número Cinco. Además, la Demandada señala el testimonio no cuestionado del Dr. Prado de que el Impuesto Unificado continuaba aplicándose y se aplicaría asimismo a cualquier resarcimiento arbitral por TexPet, en virtud de la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de Régimen Tributario Interno de 1990, que fue posteriormente prorrogada mediante la Disposición Transitoria Quinta de 2004 de la Ley de Régimen Tributario Interno. El Dr. Prado también dio testimonio de que tanto City Investing como TexPet tenían un tratamiento fiscal especial porque eran las dos únicas empresas que aún tenían legado de acuerdos de “exploración y producción”, una forma de acuerdo de “asociación” híbrido, cuando la República estaba tratando de convertir sus contratos de petróleo y gas pendientes en acuerdos de servicio. Además, éste dio testimonio de como City Investing finalmente convirtió su relación en un contrato de participación y por tanto nunca más estuvo cubierto por el Decreto Supremo No. 982 (R XV, ¶¶68-70).

323. La Demandada está de acuerdo con la conclusión de los Peritos Tributarios de que el Impuesto Unificado del 87,31% habría resultado aplicable a los daños directos puesto que éste estaba en vigor tanto en el momento de los respectivos incumplimientos contractuales como en diciembre de 2006. La Demandada también está de acuerdo con la teoría de que el Impuesto Unificado seguía aplicándose a TexPet como parte de un “contrato suscrito”, y como la ley aplicable a los daños que constituían “renta petrolera” (R XIV, ¶27). La Demandada se refiere a la Ley de Régimen Tributario Interno, en virtud del cual la renta sujeta a imposición incluye todos “ingresos de fuente ecuatoriana”, y en virtud del cual

“ingreso” incluye “los intereses y demás rendimientos financieros pagados por personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o por las sociedades extranjeras establecidas en el Ecuador” y “[c]ualquier otro ingreso que las entidades jurídicas y personas naturales nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador puedan recibir”. La Demandada además sostiene que las cantidades de la sentencia no entran en ninguna de las exenciones a la renta sujeta a imposición en virtud del artículo 9 de dicha ley. Además, según el Código Tributario y la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, el Servicio de Rentas Internas está facultado por ley para recaudar impuestos, incluso por medio de la retención automática en lugar del Banco Central. El Estado del Ecuador, como el presunto deudor judicial en virtud de las sentencias, también está obligado por el Código Tributario a retener los impuestos debidos (R XIV, ¶28).

324. La Demandada rechaza el hecho de que sólo había dos empresas, TexPet y City Investing, sujetas al Impuesto Unificado. La Demandada también se opone a la alegación de que no existen casos en los que un tribunal ecuatoriano haya sustraído impuestos del cálculo de los daños (R XV, ¶58). Además, la Demandada se refiere al caso *Blount Brothers*¹⁸ donde el Tribunal de las Reclamaciones Irán-EE.UU. “aplicó el principio de la pérdida neta con respecto al impuesto iraní sobre el contratista cuando se enfrentó con ello en un caso contractual” y afirma que este principio también se encuentra totalmente respaldado por la legislación ecuatoriana en el cálculo de los daños por lucro cesante (RXIV, ¶10; R XV, ¶58).
325. Por último, la Demandada contesta la afirmación de los Demandantes de que el Impuesto Unificado dejó de aplicarse al Acuerdo de 1973 de TexPet cuando el contrato petrolero expiró en 1992. Según la Demandada, las alegaciones de los Demandantes contradicen la premisa en la que anteriormente basaron su afirmación de que este Tribunal tiene competencia sobre el TBI Ecuador-EE.UU. (R XV, ¶72). La Demandada se refiere a la Contramemoria de los Demandantes en materia de jurisdicción y escritos relacionados, donde estos afirmaron que los siete casos subyacentes en los tribunales ecuatorianos eran una continuación de su inversión en virtud del Acuerdo de 1973, y que la pendencia de estas reclamaciones en los tribunales ecuatorianos constituía una extensión temporal del Acuerdo

¹⁸ *Blount Brothers*, nota 14 anterior.

de 1973 en el período posterior al que entró en vigor el TBI. La Demandada cita un pasaje en particular:

[I]os siete juicios que inició TexPet en contra del gobierno en los tribunales ecuatorianos no puede descontextualizarse y ser disociado de la venta y producción de petróleo, los contratos, los derechos otorgados a TexPet y los incumplimientos por parte del Gobierno, los que conforman el problema central de todos estos casos. La inversión es un continuo de hechos que comenzaron con el primer contrato y las operaciones de petróleo en los años '60 y se mantiene hoy en la forma de juicios que se entablaron para exigir el cumplimiento de los derechos adquiridos por ley y en virtud del contrato.

(R XV ¶72; C II, ¶131)

326. Los demandantes también alegaron que “las reclamaciones de TexPet y los derechos legales que se tratan en los siete casos de los tribunales ecuatorianos [...] se encuentran indisolublemente ligados a la exploración petrolera de TexPet y a las actividades de producción en el Ecuador”. La Demandada sostiene que, al construir esos argumentos, los Demandantes “equipararon las recaudaciones de las potenciales sentencias de sus juicios con los ingresos petroleros de su Acuerdo de 1973” (R XV, ¶¶72-73). Por lo tanto, las críticas de los Demandantes al Informe Pericial Conjunto deben ser rechazadas.

3. El Tribunal

327. Tras examinar el Informe Pericial Conjunto y los comentarios de las Partes, el Tribunal concluye que la tarifa del Impuesto Unificado del 87,31% debería aplicarse a los Daños Directos de TexPet. El Tribunal otorga un peso significativo al hecho de que los Peritos Tributarios nombrados libremente por cada lado, sumamente cualificados en legislación tributaria ecuatoriana, acordaron y concluyeron una opinión bien razonada de que TexPet continuó estando sujeto al Impuesto Unificado durante todo el tiempo relevante, que el Impuesto Unificado es aplicable a la “renta petrolera”, y que el Impuesto Unificado resulta aplicable por lo tanto a las cantidades descritas como “daños directos” en el Laudo Parcial. El Tribunal adopta esas razones como suyas propias en este Laudo. Los Demandantes no han presentado razones convincentes para que el Tribunal ignore las conclusiones del Informe Pericial Conjunto sobre este asunto y, en ese sentido, el Tribunal queda convencido por los argumentos de la Demandada.

328. En consecuencia, aplicando la tarifa del 87,31% del Impuesto Unificado a la cantidad de los daños directos de 354.558.145,00 USD, cuantificada en el Laudo Parcial se produce la suma sobrante de 44.993.428,60 USD.

G.V. La Tarifa Impositiva Aplicable al Monto de los Intereses

1. Argumentos de los Demandantes

329. Los Demandantes rebaten el argumento de la Demandada de que el Impuesto Unificado del 87,31% habría resultado aplicable a la cantidad de interés porque “un laudo por daños de intereses es accesorio a la cantidad principal de los daños directos, esto es, tiene su origen en la exploración y explotación de hidrocarburos”. Los Demandantes observan que los peritos ya rechazaron la opinión de que el interés deba calificarse como “renta petrolera”, que estaría sujeta al Impuesto Unificado del 87,31% (C XVI, p. 12).
330. Los Demandantes además sostienen que los intereses no son “renta petrolera” bajo la legislación ecuatoriana porque no se originan de la explotación de hidrocarburos por TexPet, y no son accesorios a los ingresos derivados de la explotación petrolera. Por lo tanto, el interés tiene una naturaleza jurídica distinta de renta petrolera de TexPet conforme a la legislación ecuatoriana y, en consecuencia, un tratamiento fiscal diferente. Estuviese o no la porción principal de la hipotética sentencia judicial de diciembre de 2006 sujeta al Impuesto Unificado del 87,31%, la porción de interés de esa sentencia se habría enmarcado dentro de la categoría general de “ingresos de fuente ecuatoriana” conforme a los artículos 1, 2 y 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno, y por lo tanto, habría estado sujeta a la tarifa general del impuesto a la renta del 25% aplicable en diciembre de 2006. Además, los rendimientos del impuesto a la renta de TexPet demuestran que durante los años en que TexPet estaba sujeto al Impuesto Unificado, la renta de intereses de TexPet no estaba sujeta a la tarifa impositiva del 87,31%, sino a la tarifa general del impuesto a la renta (C XVI, p. 12-13).
331. Adicionalmente, los Demandantes observan que la Demandada no proporciona ninguna autoridad legal que apoye la idea de que el interés debe ser considerado accesorio al principal y por lo tanto derive en el mismo tratamiento fiscal. El artículo 1607 del Código Civil ecuatoriano, que supuestamente ordena que los daños directos e intereses de TexPet sean tratados como una “deuda única”, resulta irrelevante para el tratamiento fiscal que la legislación ecuatoriana concede a los intereses (C XVI, p. 13).

332. Los Demandantes también rechazan la afirmación del Dr. Cordero de que los intereses después de impuestos adjudicados en la sentencia deberían ser posteriormente gravados a la tarifa del 25%. En primer lugar, la teoría del Dr. Cordero va en contra del Informe Pericial Conjunto. El Dr. Cordero tampoco explica si el principal después de impuestos adjudicados por el tribunal ecuatoriano debería estar de nuevo sujeto a imposición. Para los Demandantes, “gravar el principal en el momento de la recaudación después de que un tribunal ecuatoriano ya haya sustraído impuestos en su cálculo de los daños sería absurdo”. Además, los Demandantes observan que durante el curso de este procedimiento, la Demandada argumentó en su Escrito sobre el fondo que el cálculo de los intereses de los Demandantes “produc[ía] resultados desproporcionados” y trató muchos otros aspectos respecto del cálculo de intereses. Sin embargo, la Demandada nunca se opuso a ningún cálculo de intereses devengados del monto principal. Dado que no presentó este nuevo argumento durante la fase del fondo del caso, debe impedirse ahora a la Demandada que continúe con este nuevo argumento en esta fase del arbitraje (C XV, p. 9).

2. Argumentos de la Demandada

333. La Demandada sostiene que los peritos se equivocaron al concluir que el interés anterior a la sentencia ha de estar sujeto a una imposición del 25%. Dichos intereses deberían ser considerados de naturaleza de “renta petrolera” tal y como los daños directos adjudicados. Dado que el interés constituye una indemnización por la demora en el pago del crudo contribuido en exceso, un laudo sobre intereses es accesorio a la cantidad principal de los daños directos. Ambas cantidades se originan en la exploración y explotación de hidrocarburos y recibirían el mismo tratamiento. Adicionalmente, de conformidad con el artículo 1607 del Código Civil ecuatoriano, los daños directos y daños anteriores a la sentencia constituyen una deuda única y por lo tanto, también deben recibir el mismo tratamiento fiscal. Por lo tanto, la tarifa del Impuesto Unificado del 87,31% habría sido aplicada por los tribunales ecuatorianos al interés anterior a la sentencia, así como a la porción de los daños directos de la sentencia (R XIV, ¶¶29-30; R XV, ¶75) .

334. La Demandada también refuta que la Opinión Individual del Dr. Cordero presente un “nuevo argumento”, o que la República haya “renunciado” a cualquier derecho. La Demandada

afirma que esta ha presentado este argumento a lo largo de todo el procedimiento. En particular, la Demandada se refiere al párrafo 526 del Laudo Parcial, así como a los párrafos 772 y 779 de su Dúplica sobre el fondo, al párrafo 165 de su primer Escrito pos-audiencia y a las opiniones escritas y testimoniales de los Peritos de la Demandada (R XV, ¶63).

335. Finalmente, la Demandada afirma que, al solicitar que para fines fiscales de los EE.UU., el Laudo Final especifique que el componente de interés anterior a la sentencia “se relaciona con y es parte del monto principal (daños directos)” (véase ¶340 a continuación), los Demandantes están “inconscientemente adoptando la posición de la Demandada con respecto a la legislación tributaria de Ecuador” (R XV, ¶¶76-78).

3. El Tribunal

336. Tras examinar el Informe Pericial Conjunto y los comentarios de las Partes, el Tribunal concluye que los intereses anteriores a la sentencia están sujetos a imposición conforme a la tarifa general del impuesto a la renta del 25%. El Tribunal, una vez más otorga un peso significativo al Informe Conjunto de los Peritos, que concluyó que la renta por intereses constituye un ingreso de fuente ecuatoriana sujeto a la Tarifa general del Impuesto a la Renta del 25%. El Tribunal adopta esas razones como suyas propias en este Laudo. El Tribunal no considera que los argumentos de la Demandada proporcionan razones convincentes para que el Tribunal se aparte del razonamiento o las conclusiones de los Peritos Tributarios y, en ese sentido, queda convencido por los argumentos de los Demandantes. Además, el Tribunal observa que su razonamiento respecto de la obligación de los Demandantes de pagar el Impuesto Unificado de forma periódica en virtud del Acuerdo de 1973 (véase la Sección G. II anterior) ya conlleva una reducción de la cantidad de intereses debida a los Demandantes en proporción al Impuesto Unificado aplicable a los daños directos.
337. Con todo ello, para llegar al cálculo adecuado de los intereses, la cantidad de intereses anterior al laudo ha de reducirse primero en la misma proporción que los daños directos, en base a la tarifa del Impuesto Unificado del 87,31%, para representar la verdadera pérdida económica sufrida por los Demandantes debido al tiempo transcurrido entre el incumplimiento contractual y la emisión de una hipotética sentencia ecuatoriana en 2006

adjudicando las cantidades adeudadas en virtud del Acuerdo de 1973. Esto deja una suma de 43.661.691,12 USD como monto restante de la renta por intereses de TexPet, que habría estado sujeto a imposición a la Tarifa general del Impuesto a la Renta 25%. Este cálculo produce un total final después de impuestos de 32.746.268,34 USD, como daños ecuatorianos por intereses.

G.VI. El Monto Final de Daños

1. Argumentos de los Demandantes

338. Los Demandantes sostienen que, de acuerdo con sus argumentos anteriores, la correcta tarifa impositiva aplicable a todos los montos adjudicados en el párrafo 549 del Laudo Parcial es del 25%. Como resultado, la cantidad de daños de los Demandantes asciende a 649.786.333 USD, incluyendo el interés compuesto hasta el 31 de diciembre de 2010. Esta cantidad se obtiene de deducir el impuesto del 25% tanto de la cantidad de los Daños Directos (354.558.145 USD) como de los intereses ecuatorianos (344.063.760 USD), resultando en un monto total de principal después de impuestos de 523.966.429 USD. Cuando el interés anterior al laudo se aplica hasta el 31 de diciembre de 2010, el total de daños asciende a una suma de 649.786.333 USD (C XVI, p. 13).
339. Si el Tribunal fuese a adoptar las recomendaciones conjuntas de los Peritos Tributarios en su totalidad, sin embargo, los daños de los Demandantes ascenderían a 375.854.424 USD, incluyendo el interés compuesto hasta el 31 de diciembre de 2010. Dicho monto se obtiene deduciendo el Impuesto Unificado del 87,31% del monto de los Daños Directos en el Laudo Parcial, deduciendo la tarifa general del impuesto a la renta del 25% del monto de los Intereses ecuatorianos en el Laudo Parcial, y sumando estos dos para dar lugar a un monto total después de impuestos de 303.076.704 USD. Cuando el interés anterior al laudo se aplica hasta el 31 de diciembre de 2010, el total de daños lugar a un total de 375.854.424 USD (C XVI, p. 13-14).
340. En una solicitud separada en su carta de 17 de noviembre de 2010, los Demandantes también solicitan al Tribunal que ordene al Ecuador que no imponga impuestos adicionales sobre ningún monto adjudicado y que declare su jurisdicción continua para conocer de este asunto en caso de que el Ecuador ignore dicha orden. Los Demandantes también solicitan que, a efectos fiscales de los EE.UU., el Tribunal “deje claro en el Laudo Final que (i) el componente subyacente de los intereses (hasta el 21 de diciembre de 2006) se relaciona y forma parte del monto principal (daños directos); y (ii) el componente de interés

internacional (después del 21 de diciembre de 2006) es una indemnización por la demora en la recepción del pago de esa cantidad”. Los Demandantes proponen que a tales efectos se incluya el siguiente texto específico en el Laudo Final:

Basado en el principio de que los Demandantes deben ser indemnizados íntegramente, la cuantía de los daños concedida está destinada a indemnizar a los Demandantes por lo que perdieron como consecuencia del incumplimiento del artículo (7)II del TBI por la Demandada. El cálculo de la cuantía de la pérdida de los Demandantes es el siguiente:

\$ XXXX, como una adjudicación por los daños directos sufridos por los Demandantes a causa del incumplimiento del artículo II(7); y

\$ XXXX, como una adjudicación por la demora en el pago de las decisiones que un juez ecuatoriano honesto, imparcial e independiente, habría decidido que se deben en cada uno de los casos de TexPet.

(traducción propia)

(C XV, p. 13)

2. Argumentos de la Demandada

341. Basándose en sus argumentos anteriores, la Demandada expone tres escenarios de daños.
342. El primer escenario corresponde a los daños que resultan si los argumentos de la Demandada se aceptan en su totalidad. Conforme a esta opción, se asume que el monto que los tribunales ecuatorianos habrían adjudicado como daños directos corresponderían a los daños directos establecidos en el Laudo Parcial, neto del Impuesto Unificado (44.993.428,60 USD). El interés previo a la sentencia se calcula por lo tanto utilizando esta cantidad como principal y el Impuesto Unificado aplicado a los intereses, dando lugar a un total de 5.540.668,60 USD en concepto de daños por intereses ecuatorianos. Estas dos cantidades se suman entonces para producir una suma total de 50.534.097,20 USD en concepto de daños hasta el 21 de diciembre de 2006 (R XV, ¶79).
343. El segundo escenario corresponde a los daños resultantes si el Tribunal adopta el razonamiento del Dr. Cordero. Una vez más, se parte de la idea de que la cantidad que los tribunales ecuatorianos habrían adjudicado como daños directos correspondería a los Daños Directos establecidos en el Laudo Parcial, neto del Impuesto Unificado (44.993.428,60

USD). El interés anterior a la sentencia entonces se calcula utilizando ese monto como principal y la tarifa general del impuesto a la renta aplicada a los intereses, dando lugar a un total de 32.746.268,34 USD en concepto de daños por intereses ecuatorianos. Estas dos cantidades se suman entonces para producir una suma total de 77.739.696,94 USD en concepto de daños hasta el 21 de diciembre de 2006 (R XV, ¶82).

344. El tercer escenario corresponde a los daños resultantes si el Tribunal adopta el razonamiento en el Informe Pericial Conjunto. En este caso, el Impuesto Unificado se deduce del importe de los Daños Directos establecidos en el Laudo Parcial, dando lugar a 44.993.428,60 USD de daños directos. De la cantidad de intereses anteriores a la sentencia establecidos en el Laudo Parcial se deduce el impuesto general a la renta, dando lugar a un total de 258.047.819,88 USD en concepto de daños por intereses ecuatorianos. Estas dos cantidades entonces se suman para producir una suma total de 303.041.248,48 USD en concepto de daños hasta el 21 de diciembre de 2006 (R XV, ¶81).
345. La Demandada observa que cualquier impuesto ecuatoriano pagado por los Demandantes probablemente se verá significativamente mitigado por los beneficios fiscales de los EE.UU. ya que la legislación fiscal de los EE.UU. proporciona un crédito fiscal extranjero para impuestos a la renta extranjeros pagados (R XV, ¶83).
346. La Demandada insta al Tribunal que rechace la solicitud de los Demandantes de que el Tribunal ordene a la Demandada no aplicar impuestos al monto del Laudo Final y de que afirme su jurisdicción continua sobre el caso. La Demandada ya ha declarado que no impondrá ni duplicará ninguno de los impuestos deducidos en el Laudo Final, y el Tribunal ha reconocido que esta declaración otorga protección a los Demandantes. La Demandada señala, sin embargo, que no ha renunciado a su derecho a hacer valer los impuestos legales no tenidos en cuenta en el laudo del Tribunal (R XV, ¶84).
347. Por último, la Demandada también solicita al Tribunal que rechace la solicitud de los Demandantes de insertar texto que caracterice su adjudicación de los daños indirectos (intereses anteriores a la sentencia) como el principal (renta de las operaciones petroleras) y no como interés. Más allá de reforzar la posición de la Demandada de que cualesquiera daños indirectos deben estar sujetos a imposición a la misma tarifa que el principal (renta de las

operaciones petroleras), la Demandada considera inapropiado que los Demandantes soliciten al Tribunal que caracterice un laudo para efectos fiscales de los EE.UU. de una manera diametralmente opuesta a la que ellos están pidiendo al Tribunal que caracterice para los efectos fiscales del Ecuador (R XV, ¶85).

3. El Tribunal

348. De acuerdo con su razonamiento anterior, el Tribunal ha concluido lo siguiente:

(1) los daños directos de TexPet deben reducirse en un 87,31%, de acuerdo con la Tarifa del Impuesto Unificado, que el Tribunal considera aplicable a este monto; y

(2) los intereses de TexPet anteriores a la sentencia también deben reducirse en un 87,31% con el fin de deducir el interés sobre el dinero que, como resultado de la reducción prevista en (1), no forman parte de los daños de TexPet, y a continuación esta cantidad debe ser posteriormente reducida en un 25%, de acuerdo con la Tarifa general del Impuesto a la Renta.

349. Por lo tanto, los daños directos reducidos por los impuestos (44.993.428,60 USD) y los intereses anteriores a la sentencia (32.746.268,34 USD), conjuntamente producen una cantidad total de daños de los Demandantes de 77.739.696,94 USD. Este resultado es el equivalente al segundo escenario de la Demandada.

350. A esta cantidad, el Tribunal debe aplicar, de acuerdo con el párrafo 6 de sus decisiones en el Laudo Parcial, el interés anual compuesto anterior al laudo a la Tasa Preferencial de Nueva York, lo cual produce un nuevo total de 96.355.369,17 USD hasta el 31 de agosto de 2011.

351. Los cálculos del Tribunal, se resumen en la siguiente tabla:

	Laudo Parcial (Párrafo 549)	Ajuste por el Impuesto Unificado del 87,31% (a los Daños Directos)	Ajuste en proporción al Impuesto Unificado del 87,31% (al Interés Anterior al laudo)	Ajuste por el Impuesto a la Renta del 25% (al Interés Anterior al laudo)	Total de Daños Directos e Interés Anterior al laudo	Aplicación del Interés anterior al Laudo (desde la Notificación de arbitraje del 21 de diciembre de 2006 hasta el 31 de agosto de 2011)
Daños Directos	\$354.558.145,00	\$44.993.428,60	-	-	\$44.993.428,60	\$55.767.627,01
Interés Anterior al laudo¹⁹	\$344.063.759,84	-	\$43.661.691,12	\$32.746.268,34	\$32.746.268,34	\$40.587.742,16
TOTAL	\$698.621.904,84	-	-	-	\$77.739.696,94	\$96.355.369,17

352. El Tribunal recuerda en este punto los compromisos asumidos por la Demandada de no imponer más impuestos o penalidades a ningún laudo del Tribunal que tuviese en cuenta los impuestos ecuatorianos aplicables. En particular, el Tribunal cita la garantía establecida en la Primera Ronda de Escritos pos-audiencia de la Demandada de 19 de junio de 2009:

[los] abajo firmantes abogados de la defensa de la República han sido debidamente autorizados para declarar ante el Tribunal que no habrá ningún otro impuesto que la República grave sobre la cantidad del Laudo neto, y que esta declaración y su contenido podrán ser citados e incorporados en el propio Laudo con el consentimiento de la República.

(R VII, ¶168)

El Tribunal considera que esta declaración, entre otras realizadas en el curso del procedimiento, protege adecuadamente a los Demandantes contra la doble imposición o penalidades por el pago tardío de impuestos. En consecuencia, el Tribunal se niega a emitir las ordenes solicitadas por los Demandantes respecto de otros impuestos y penalidades (véase ¶340 anterior).

¹⁹ Este interés concierne interés acumulado desde la fecha en que las demandas fueron presentadas ante los tribunales ecuatorianos hasta la fecha de la Notificación de Arbitraje el 21 de diciembre de 2006. Véase Laudo Parcial, ¶¶548-549.

353. Por último, con respecto a la solicitud de los Demandantes de incluir el texto específico en las decisiones del Tribunal en la parte dispositiva de este laudo (véase ¶340 anterior), el Tribunal ha accedido a esta petición en la medida en que esas precisiones son coherentes con los razonamiento del Tribunal sobre la responsabilidad y la cuantía.

G.VII. Las Costas del Arbitraje

1. Petitorio de los Demandantes

354. En la Réplica de los Demandantes sobre el fondo (C VI, ¶528), los Demandantes solicitan que el Tribunal otorgue las costas de la siguiente manera:

528. Por los motivos expuestos, las Demandantes solicitan al tribunal que dicte un laudo a su favor y que:

[...]

(vii) Ordene a Demandada el pago de todas las costas, honorarios y gastos de este arbitraje, incluidos los honorarios y gastos del Tribunal y el costo y los honorarios de representación de letrados, más los intereses que correspondan sobre esas sumas en virtud del Tratado;

355. De conformidad con la solicitud del Tribunal en la Sección 2 de la OP VI, los Demandantes presentan una Reclamación de costas por la cantidad de 13.543.118,94 USD (C X, ¶27) por los honorarios y gastos incurridos entre enero de 2006 y julio de 2009, indicando que cualesquiera facturas emitidas en divisa distinta del Dólar EE.UU. fuesen convertidas utilizando el tipo de cambio predominante en la fecha de la factura. Los Demandantes también indican que el valor de cualesquiera impuestos cargados habían sido incluidos en el cálculo de sus costas. Los honorarios legales adicionales y gastos incurridos entre la presentación de su Reclamación de costas y su Contestación al Escrito de la Demandada sobre costas son anotados en la Contestación al escrito de la Demandada sobre costas en la cantidad de 51.109,04 USD. El monto final presentado por los Demandantes es de 13.594.227,98 USD (C X, ¶9). De este monto final, 1.203.962,11 USD se presentan como

costos del arbitraje y los 12.390.265,87 USD se presentan como costos de representación y asistencia de letrados.

356. Los Demandantes sostienen que el monto de su reclamación de costas refleja la complejidad sustancial del caso, observando que el monto en controversia del caso excede de los 1,6 mil millones USD y que han surgido numerosas cuestiones procedimentales y sustantivas, de la siguiente manera:

- (1) Tres rondas de alegatos sobre jurisdicción (una ronda de memoriales anterior a la audiencia y dos rondas de escritos pos-audiencia), incluyendo 1 declaración de testigo, 2 informes de peritos, y 410 pruebas y 127 autoridades legales como documentos acreditativos;
- (2) Cuatro rondas de alegatos sobre el fondo (dos rondas de memoriales anteriores a la audiencia y dos rondas de escritos pos-audiencia), incluyendo 2 declaraciones de testigo, 11 informes de peritos, y 387 pruebas y 110 autoridades legales como documentos acreditativos;
- (3) Dos audiencias completas (una sobre jurisdicción y una sobre el fondo), las cuales en conjunto duraron más de 10 días;
- (4) Varios intercambios entre el Tribunal y las Partes discutiendo el calendario de alegatos, la admisibilidad de pruebas extemporáneas presentadas por Ecuador, y asuntos organizativos relativos a las audiencias sobre jurisdicción y el fondo; y
- (5) Dos rondas de presentaciones sobre costas.

(C X, ¶8)

357. En respuesta a la Reclamación de costas de la Demandada, los Demandantes argumentan que la naturaleza argumentativa de la presentación de costas de la Demandada no se justifica y se aparta de las instrucciones del Tribunal. Los Demandantes también cuestionan la exactitud y fiabilidad de Reclamación de costas de la Demandada debido a referencias a otras acciones judiciales de las del presente arbitraje (C XI, ¶2). En este sentido, los Demandantes observan que la Demandada utilizó el mismo consejero legal en esas demás acciones judiciales y sugieren que la Demandada podría estar reclamando los costos de representación en relación con esos litigios (C XII, ¶¶1-3).

358. Los Demandantes también argumentan que la Demandada no “expone brevemente sus costos”, según lo solicitado por el Tribunal, porque no identifica el propósito y la naturaleza de sus costos. En este sentido, los Demandantes afirman que el Ecuador “generalmente englobaba sus reclamaciones en costos del arbitraje y honorarios de abogados, al tiempo que

proporciona poco o ningún detalle para que el Tribunal establezca los costos reales del Ecuador en la defensa del presente arbitraje” (C XII, ¶4).

359. Los Demandantes también cuestionan la sensatez y necesidad de los costos de representación legal de la Demandada. Los Demandantes observan que, con respecto a los honorarios de los abogados de la Demandada, la Demandada no había indicado (i) si los honorarios habían sido facturados y pagados, (ii) si los honorarios se basan en una tarifa por hora, plana o contingente, (iii) si los honorarios fueron incurridos únicamente para la representación de la Demandada en el presente arbitraje, ni (iv) si los honorarios denominados como “tiempo de abogado” incluían los honorarios y gastos de los 17 peritos contratados por la Demandada. Los Demandantes observan que los honorarios de abogados reclamados por la Demandada son más del doble que los solicitados por los Demandantes en el curso del arbitraje y que el monto reclamado por la Demandada como “tiempo de abogado” supera con creces la suma total del tiempo, costos y gastos de abogados de los Demandantes (C XII, ¶¶5-7).

2. Petitorio de la Demandada

360. En el Escrito de dúplica de la Demandada sobre el fondo (R VI, ¶¶793-797), la Demandada solicita que el Tribunal otorgue las costas de la siguiente manera:

793. Por las razones que anteceden, la República por medio del presente, solicita al Tribunal que le otorgue el laudo a su favor,

[...]

796. Ordene, conforme a los párrafos 1 y 2 de Artículo 40 de las Reglas de Arbitraje de CNUDMI, a los Demandantes que paguen todos los costos y los gastos del presente procedimiento de arbitraje, incluyendo los honorarios y gastos del Tribunal y el costo de la representación legal de la República mas el interés previo y posterior al laudo sobre el mismo;

361. De conformidad con la solicitud del Tribunal en el artículo 2 de la OP VI, la Demandada presenta una Reclamación de costas por la cantidad de 17.876.931 USD y 850.000 € (R X ¶18). De este monto final, 40.468 USD y 850.000 € se presentan como costos del arbitraje y los 17.836.463 USD se presentan como costos de representación y asistencia de letrados.

362. Con respecto a la cuantía de su reclamación por las costas del arbitraje, la Demandada señala que incurrió en costos por un monto de 28.290 USD debido a que fue requerida a presentar 11 de sus testigos para ser interrogados por los Demandantes en la Audiencia sobre el fondo de abril de 2009, como resultado del procedimiento solicitado por los Demandantes (R X, ¶6).
363. Con respecto a los costos de representación y asistencia de letrados, la Demandada sostiene que mientras que los tribunales no conceden con frecuencia el monto total de sus honorarios legales y costos relacionados a la parte vencedora, el Tribunal debe hacerlo aquí, porque los Demandantes han iniciado el procedimiento por razones deshonestas. Como apoyo, la Demandada reitera sus argumentos descritos en la Sección H.VIII, afirmando que los Demandantes no han actuado de buena fe y han “expuesto posturas que son constantemente incoherentes y oportunistas conforme a cada momento” (R X, ¶7-16).
364. Finalmente, la Demandada observa que los Demandantes no han alegado o sugerido que la Demandada actuó de mala fe en el arbitraje y no basan su reclamación de los honorarios de los abogados en cualquier presunta conducta indebida. La Demandada sostiene que la petición de los Demandante respecto de las costas se encuentra por lo tanto injustificada y sin apoyo porque la adjudicación de los honorarios del abogado está normalmente reservada sólo a aquellos casos de mala conducta en la iniciación o defensa del arbitraje (R XII, ¶¶3,6). La Demandada también afirma que sus propios argumentos se han hecho de buena fe y se encuentran respaldados por los hechos en los autos (R XII, ¶¶4-6).

3. El Tribunal

365. Como cuestión preliminar, el Tribunal recuerda que en su Laudo Interino del 1 de diciembre de 2008, decidió “posponer cualquier decisión acerca de las costas hasta la conclusión de la fase sobre el fondo” (Laudo Interino, ¶304). En su Laudo Parcial del 30 de marzo de 2010, el Tribunal además decidió, que “[e]l fallo relativo a los costos del arbitraje se difiere a una etapa posterior de este procedimiento” (Laudo Parcial, Decisiones, ¶8). El Tribunal observa que las reclamaciones de las Partes sobre las costas no se han actualizado desde poco después

de la Audiencia sobre el fondo, pero determina que esto resulta intrascendente a la luz de la decisión final del Tribunal sobre las costas.

366. El Tribunal observa que el TBI no contiene ninguna disposición sobre la asignación de las costas del arbitraje que surja de una “diferencia de inversión”. Las disposiciones relativas a la decisión del Tribunal en materia de costas se encuentran en cambio en los artículos 38 a 40 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. El artículo 38 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI define las “costas de arbitraje” de la siguiente manera:

El tribunal arbitral fijará en el laudo las costas del arbitraje. El término “costas” comprende únicamente lo siguiente:

- (a) Los honorarios del tribunal arbitral, que se indicarán por separado para cada árbitro y que fijará el propio tribunal de conformidad con el artículo 39;
- (b) Los gastos de viaje y las demás expensas realizadas por los árbitros;
- (c) El costo del asesoramiento pericial o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral;
- (d) Los gastos de viaje y otras expensas realizadas por los testigos, en la medida en que dichos gastos y expensas sean aprobados por el tribunal arbitral;
- (e) El costo de representación y de asistencia de letrados de la parte vencedora si se hubiera reclamado dicho costo durante el procedimiento arbitral y sólo en la medida en que el tribunal arbitral decida que el monto de ese costo es razonable;
- (f) Cualesquiera honorarios y gastos de la autoridad nominadora, así como los gastos del Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya.

367. Mientras tanto, los párrafos 1 y 2 del artículo 40 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI proporcionan los criterios que se aplicarán por el Tribunal en la concesión de las costas:

1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2, en principio, las costas del arbitraje serán a cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá prorratear cada uno de los elementos de estas costas entre las partes si decide que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

2. Respecto del costo de representación y de asistencia de letrados a que se refiere el inciso e) del artículo 38, el tribunal arbitral decidirá, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, qué parte deberá pagar dicho costo o podrá prorratearlo entre las partes si decide que el prorrateo es razonable.

368. Las Partes depositaron un total de 1.875.000 € (937.500 € por los Demandantes; 937.500 € por la Demandada) con la CPA para cubrir los costos del arbitraje.
369. Los honorarios y gastos del honorable Charles N. Brower, el árbitro designado por los Demandantes, ascienden a la cantidad de 236.100,00 € y 19.404,89 €, respectivamente. Los honorarios y gastos del profesor Albert Jan van den Berg, el árbitro designado por la Demandada, ascienden a la cantidad de 399.541,66 € y 11.945,12 €, respectivamente. Los honorarios y gastos del profesor Karl-Heinz Böckstiegel, el Presidente del Tribunal, ascienden a la cantidad de 652.120,00 € y 27.798,55 €, respectivamente.
370. De conformidad con la OP I y el acuerdo de las Partes, la Oficina Internacional de la CPA fue designada para actuar como Registro en este arbitraje. Los honorarios por servicios de registro de la CPA ascienden a la cantidad de 155.940,00 €.
371. Otros costos de Tribunal, incluyendo los reporteros de la corte, salas de audiencia, salas de reuniones, viajes, cargos bancarios, y todos los demás gastos relacionados con el procedimiento arbitral, ascienden a 291.690,78 €.
372. Basado en las cifras anteriores, los costos congregados del Tribunal, que comprenden los elementos contemplados en los artículos 38(a) a (c) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, suman un total de 1.794.541,00 €.
373. Las respectivas porciones de las Partes de estos costos del Tribunal, que ascienden a € 897.270,50 para cada lado, serán deducidas del depósito y la CPA reembolsará el importe de 40.229,50 € a cada lado, de conformidad con el artículo 41(5) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.
374. El principio que rige la adjudicación de las costas del arbitraje, de conformidad con el artículo 40(1) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, es que un tribunal arbitral determinará que los gastos serán sufragados por la parte que pierda, a menos que encuentre que un reparto de las costas entre las partes es razonable teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Con respecto a los costos de representación legal y asistencia (artículo 38(e)), el artículo 40(2) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI establece que el tribunal arbitral, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, es libre de determinar qué parte debería

soportar dichos costos, o podrá prorratear estos costos entre las partes si decide que el prorrateo es razonable. Los artículos 40(1) y (2) conceden amplia discreción a un tribunal arbitral en la adjudicación de las costas del arbitraje.

375. El Tribunal es consciente de cierta práctica en el arbitraje de tratados de inversión de que cada parte asuma sus propios gastos y que las partes se dividan los costos del tribunal por igual. Esta práctica no es vinculante para este Tribunal, que prefiere la práctica más reciente en el arbitraje de inversión de la aplicación del principio general del “vencimiento objetivo” salvo en circunstancias excepcionales, como cuando surgen inquietudes en relación con el acceso a la justicia. Este enfoque es el más convincente en el presente caso, el cual se rige por el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI que contempla expresamente la regla de “vencimiento objetivo” en el artículo 40(1) por medio del énfasis en la “victoria” o falta de la misma. Esta conclusión se ve reforzada por el hecho de que de hecho ambas Partes en este caso afirman que la Parte que pierda en este arbitraje debería tener que soportar la totalidad de los costos del Tribunal así como los costos de la representación legal de la otra parte.
376. Sin embargo, en el presente caso los Demandantes han tenido un gran éxito sobre la jurisdicción y la responsabilidad, pero la Demandada ha resultado mayoritariamente exitosa en los daños. El Tribunal considera por lo tanto que no existe una Parte claramente vencedora y consecuentemente decide que cada parte sufragará sus propios costos de representación y asistencia de letrados (así como los costos de los testigos mencionados en el artículo 38 (d)) y divide los costos de tribunal de manera equitativa.

H. Decisiones

POR LAS RAZONES EXPUESTAS, el Tribunal dicta las siguientes decisiones:

- 1. Del Laudo Interino del 1 de diciembre de 2008, el Tribunal recuerda las siguientes decisiones:**
 - 1. Las objeciones de la Demandada son desestimadas.**
 - 2. El Tribunal dispone de jurisdicción respecto a las demandas tal como las formularon los Demandantes en su segundo Escrito pos-audiencia con fecha del 12 de agosto de 2008 en el párrafo 116.**

- 2. Del Laudo Parcial del 30 marzo de 2010, el Tribunal recuerda las siguientes decisiones:**
 - 2. La Demandada incumplió el artículo II(7) del TBI debido a una demora indebida por parte de los tribunales de Ecuador en dictar sentencia sobre siete casos presentados por TexPet, y es responsable por los daños resultantes que afectan a los Demandantes debido a ello.**

 - [...]**

 - 5. Como resultado de la decisión del Tribunal en la anterior sección 2 sobre que la Demandada ha incumplido el artículo II(7) del TBI, la Demandada es responsable de los daños causados a los Demandantes por tal incumplimiento. El total de estos daños se decidirá por el Tribunal con la ayuda de un procedimiento dispuesto separadamente en una Orden Procesal del Tribunal para determinar qué impuestos, de existir, habrían sido debidos a la Demandada si no hubiera ocurrido el incumplimiento del artículo II(7) del TBI.**

 - 6. La Demandada es responsable del pago del interés compuesto anterior al laudo conforme a la Tasa Preferencial de Nueva York (anual) sobre el monto final a ser pagado por la Demandada de conformidad con la anterior sección 5, desde el 22 de diciembre de 2006 y hasta la fecha en que este monto sea pagadero por la Demandada.**

 - 7. La Demandada será responsable del pago de un interés compuesto después del fallo conforme a la Tasa Preferencial de Nueva York (anual) sobre el monto fijado por el Tribunal, desde la fecha en que éste ordene el pago a la Demandada hasta la fecha en que dicho pago se realice.**

3. **La Demandada es responsable por los daños causados a los Demandantes originados por el incumplimiento del artículo II(7) del TBI por la cantidad de 77.739.696,94 USD.**
4. **La Demandada es responsable por el interés compuesto anterior al laudo a la Tasa Preferencial de Nueva York (anual), desde el 22 de diciembre de 2006 hasta la fecha de este Laudo Final, como indemnización por la demora en recibir el pago de la cantidad adjudicada por el Tribunal de conformidad con el apartado 3 anterior, por un total de 18.615.672,23 USD en la fecha de este Laudo Final.**
5. **La Demandada será responsable por el interés compuesto posterior al laudo a la Tasa Preferencial de Nueva York (anual) sobre las cantidades adjudicadas por el Tribunal de conformidad con las secciones 3 y 4 anteriores, a partir de la fecha del presente Laudo Final y hasta la fecha en que se realice el pago.**
6. **Cada parte correrá con los costos de su propia representación y asistencia de letrados, así como los gastos de testigos y peritos, y la mitad de los costos del tribunal.**

Lugar del Arbitraje: La Haya, Países Bajos

Fecha de este Laudo Final: 31 de agosto de 2011

Firmas del Tribunal:

[firmado]

[firmado]

El honorable Charles N. Brower

El profesor Albert Jan van den Berg

[firmado]

El profesor Karl-Heinz Böckstiegel
Árbitro Presidente